

contra la corriente

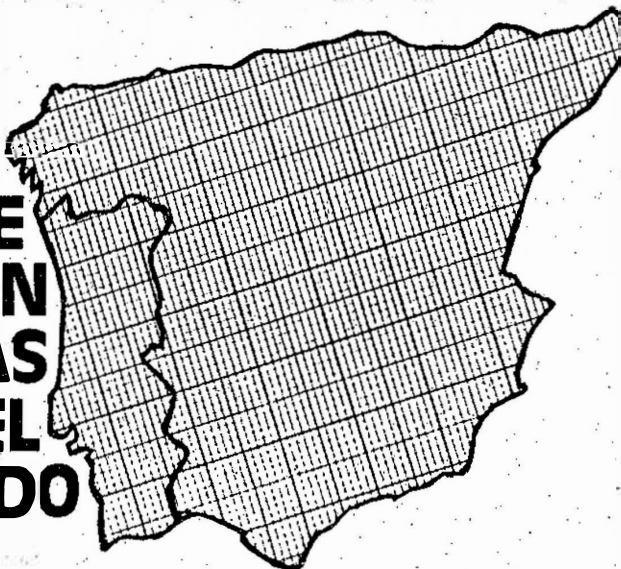
Revista teórico-política de la LIGA COMUNISTA -IV INTERNACIONAL-

NUMERO 5

NOVIEMBRE 1979

PRECIO 100 ptas.

ANTEPROYECTO DE RESOLUCION SOBRE LA SITUACION POLITICA Y LAS TAREAS DEL PROLETARIADO



LA CUARTA INTERNACIONAL
Y LA REVOLUCION INDOCHINA

PRESENTACION

El presente número de "CONTRA LA CORRIENTE" contiene dos textos. El primero es el "Anteproyecto de resolución sobre la situación política y las tareas del proletariado". Es el documento base para la discusión de ésta cuestión en el IV Congreso de la LIGA COMUNISTA (IV INTERNACIONAL). Es "texto básico" de nuestro Congreso. Y es a partir de él que es preciso que militantes y organizaciones del partido elaboren textos y enmiendas alternativas. El Secretariado del Comité Ejecutivo de la LC, es consciente de las limitaciones que tiene éste primer texto. Esta es la razón por la que es un "anteproyecto". Esperamos, pues, la colaboración y aportaciones que veáis necesarias para convertir ese texto en el "proyecto" a presentar a voto en el Congreso.

Su publicación es también útil —aunque sólo sea un "anteproyecto"— para que aquellos luchadores que militan con nosotros en los sindicatos, en las empresas, en el movimiento, conozcan cual es nuestra idea sobre la situación política y sindical, cual es la situación del movimiento obrero y popular, y en consecuencia cuáles son —a nuestro entender— las tareas que debemos impulsar para lograr solución a los problemas que las masas explotadas y oprimidas tienen planteados; para lograr avanzar hacia el socialismo.

El segundo texto que publicamos es el titulado "La IV Internacional y la revolución indochina". Todos conocemos la importancia mundial que ha tenido la lucha de las masas en Indochina. Primero contra el colonialismo francés, luego contra toda la clase capitalista representada por el imperialismo de los USA y contra la propia burguesía indochina.

Poco después de la victoria sobre la burguesía han ocurrido nuevos hechos: la invasión de Camboya por tropas vietnamitas; el ataque del gobierno chino contra Vietnam. Aunque degenerados y deformados, tanto China, la URSS, Vietnam como Camboya son estados obreros en donde se ha acabado con la propiedad capitalista de las fábricas y tierras. ¿Cómo se explica un ataque entre estados que deberían ser hermanos?. ¿Qué programa debemos impulsar los trotskistas en esos países?. ¿Qué posiciones han adoptado las distintas organizaciones trotskistas de la IV Internacional, y cuáles son sus errores?.

Este texto —adoptado por el CC de la LC (IV Internacional)— pretende ser una colaboración en la discusión de este tema. Tema incluido en el orden del día de nuestro IV Congreso, y por tanto, "texto de apoyo" al mismo. En próximos números procuraremos publicar un proyecto de resolución en forma de tesis para que sea presentado a voto en dicho Congreso.

Octubre de 1955, las masas vietnamitas han expulsado al ejército colonialista francés.
foto de portada: Manifestación en la proclamación de la República de Vietnam.

INDICE

PRESENTACION	pag. 2
ANTEPROYECTO DE RESOLUCION SOBRE LA SITUACION POLITICA Y LAS TAREAS DEL PROLETARIADO (este documento se basa en la línea general del Informe Político aprobado en el C.C. de LC en julio de 1979)	pag. 3
I. La crisis del capitalismo español y el plan económico del gobierno	pag. 8
II. Acción de masas y organización obrera	pag. 16
III. La crisis de la Monarquía y la lucha de las nacionalidades	pag. 23
IV. Resurgimiento y crisis del PSOE	pag. 29
V. Por una política de Alianza Obrera	
LA CUARTA INTERNACIONAL Y LA REVOLUCION INDOCHINA (la línea general de este documento fué aprobada por el C.C. de LC en julio de 1979)	
1. Las alternativas de la Mayoría del Secretariado Unificado	pag. 37
2. El PCV, ¿una burocracia revolucionaria?	pag. 38
3. El PCV contra la revolución en Camboya	pag. 39
4. Coexistencia y conflictos interburocráticos	pag. 40
5. El papel de Moscú en Indochina	pag. 41
6. La alternativa de la Minoría del SU	pag. 42
7. Camboya: un Estado Obrero contrarrevolucionario	pag. 42
8. Concesiones políticas a la burocracia vietnamita	pag. 47
9. Hanoi, Moscú, La Habana	pag. 49
10. La coexistencia y la crisis del stalinismo	pag. 50
11. La cuestión Indochina y el Congreso Mundial	pag. 51
Notas	pag. 52

Difusión deferencia de Edicions Internacionals Sedov. Para descargar el resto de documentos de esta serie, enlace desde imagen del logotipo:

Edicions internacionals Sedov





ANTEPROYECTO DE RESOLUCION SOBRE LA SITUACION POLITICA Y LAS TAREAS DEL PROLETARIADO

I.- LA CRISIS DEL CAPITALISMO ESPAÑOL Y EL PLAN ECONOMICO DEL GOBIERNO

A) ALGUNOS ANTECEDENTES

Por primera vez desde la apertura en 1973 de la crisis económica mundial, el Gobierno expone crudamente de manera global algunas de las principales reformas estructurales que son necesarias para enfrentar la crisis económica, de acuerdo con las intenciones e intereses de los grandes grupos financieros y de la gran patronal.

En 1973 decíamos que "cualquier paso real del capitalismo español hacia la incrustación en la CEE, pasa por intensificar la concentración y modernización industrial, la reorganización de los servicios y la penetración monopolista en el campo, con un ataque a la clase obrera y al resto de asalariados, mediante el paro masivo y la reducción draconiana de salarios, y una embestida contra amplísimos sectores de la pequeña burguesía, de una profundidad y envergadura mucho mayor que en el pasado".

Este coste social aparece hoy tremendamente amplificado. Por el retroceso experimentado por la economía española en estos últimos años y por la crisis de los imperialismos europeos.

En efecto, con la depresión de 1967-68 no se llegó a un saneamiento de la economía española ni se operó un relanzamiento con nuevo oxígeno. La nueva relación de fuerzas impuesta por el proletariado a partir de 1962 impiden al gran capital asumir ese riesgo. Los defectos estructurales eran enormes. El crecimiento de los años 60 se basó en la inversión extranjera, en la emigración y el turismo, principalmente, realizándose sobre la base de bajos salarios, largas jornadas de trabajo, escasos costes en equipamientos sociales, y en un sistema fiscal profundamente regresivo.

Sobre esta base se mantuvo el minifundismo industrial y el retraso tecnológico generalizado. En este marco, destacan ciertos sectores "punta" fundamentalmente en la industria manufacturera, de bases poco consistentes para la exportación de productos industriales, que cubren sobre todo la ampliación de la demanda interna de artículos de consumo. Sectores ligados al capital internacional.

No hay, en estos años, ni en la industria ni en la agricultura ninguna reforma profunda de estructuras que permita establecer bases sólidas para un desarrollo de largo alcance.

De todos modos, hay hasta 1969 un incremento de los salarios y un cierto desarrollo de equipamiento social, que implican cierta expansión de la demanda interna.

El auge del sector servicios, por su parte, añade una nueva acumulación de mecanismos parasitarios a la hipertrofia burocrática de la época autárquica. Este desarrollo, muy superior al de la producción de bienes, es junto con las contradicciones señaladas en la agricultura e industria, un indicador del carácter extremadamente parasitario del capitalismo español parapegado tras el régimen de Franco.

En suma, una economía que ni siquiera es los mejores momentos del desarrollo logra ofrecer ocupación al ritmo de crecimiento de la población, a pesar de la baja productividad del sistema: entre 1964 y 1971 la media de aumento anual del empleo es de un 0'2 por ciento, mientras que para absorber el medio millón de emigrados de esos años, hubiese sido preciso alcanzar una media del 1'1 por ciento.

La estructura de costes de producción en una economía así desarrollada impide una penetración sólida en el mercado internacional, cara al cual la única ventaja es la mano de obra barata, la proximidad geográfica y cierto nivel de tecnología importada en algunos sectores. Ello determina el mantenimiento del déficit crónico. Pero al mismo tiempo las transformaciones efectuadas abocan a una fuerte dependencia, en concreto respecto de la CEE.

La expresión primera de estos factores que lastran la competitividad es la fuerte inflación: la descapitalización del campo y la industria, sumada a las características del mercado financiero hacen de la inflación la única arma para alimentar el crecimiento y evitar quiebras sociales mortales para el régimen. Y son estas presiones inflacionistas las que de manera directa entorpecen una y otra vez la competitividad y causan un déficit insostenible.

La cuestión de la CEE concentra las contradicciones del capitalismo español: necesidad de integrarse dada la dependencia, imposibilidad de hacerlo sin unas reformas estructurales que no están en condiciones de realizar porque significarían la dislocación definitiva de los mecanismos económicos y políticos de dominación. De un lado, la amenaza del proletariado y el proceso de desplazamiento de las capas medias. De otro lado, una reforma a fondo dislocaría completamente a una burguesía en la que tienen tanto peso los sectores ligados a unas condiciones de supervivencia como las que la dictadura asegura.

A partir de la recesión de 1967-68 que, tras una ligera reactivación en el 69, desembocaría en una nueva recesión en el 71, se dan, junto a la incapacidad del gran capital para acometer una profunda reestructuración, hechos no menos significativos: a partir de 1969 dejan de crecer los salarios; se ini-

El desarrollo de la economía española en los últimos años se había desarrollado a un nivel comparable con otros países; a partir de 1971 se da un decrecimiento del índice de creación de nuevos empleos y un aumento incesante del paro (a pesar de que no se había dado el frenazo por parte de los países europeos que absorben emigración). El freno de salarios y de equipamiento social, y también el aumento del paro, tienen como consecuencia una tendencia a la contracción del mercado interno, que acentuará la debilidad de la industria y de la agricultura, y por tanto su competitividad. El aumento del paro representa una baja de la productividad global de un país cuya población activa oficial (no potencial) y cuya población ocupada se sitúan en una tasa bajísima.

Es decir, si bien el crecimiento prosigue hasta 1973 y en parte 1974, el "desarrollo español" está en curva descendente, se desacelera, antes ya de que incida sobre él la crisis que se desata en el sistema mundial con la devaluación del dólar en 1971 y la "crisis del petróleo" cuyo estallido provoca en 1973 la propia USA. El capitalismo español repercutió, pues, temprana e intensamente el cambio de tendencia que a partir de la segunda mitad de los 60 asfixia el boom internacional al que España se había incorporado tardíamente.

Tratando de contener la pérdida de soporte social del régimen, la burguesía no hace sino ralentizar esa pérdida, al precio de profundizar las contradicciones estructurales insostenibles sobre las que había efectuado su crecimiento.

Sobre esta situación de declive inciden aún dos factores: por un lado, el nuevo desplazamiento de la relación de fuerzas que apunta desde 1969 y cuaja a partir de los juicios de Burgos en diciembre de 1970. Ante esto se profundiza la reacción conservadora que ya en la segunda mitad de los 60 agarrotaba y privaba de iniciativa al parásito capitalismo hispano. Por otro lado, el impacto de la crisis internacional del capitalismo a partir primero de la devaluación del dólar, y luego (otoño del 72-73) el alza de precios del petróleo y las materias primas, y finalmente la recesión generalizada a escala mundial en 1974. Teniendo en cuenta que esta cadena de hechos crean una situación nueva pues no ha habido ninguna recuperación de fondo tras esa recesión, sino un constante decrecer de la inversión y una clara tendencia a la contracción del mercado internacional.

En estas condiciones la burguesía española no osa ni arremeter las medidas antiinflacionistas que otras burguesías acometen, ni mucho menos abordar las reformas estructurales que su retraso respecto de éstas requería con urgencia cada vez mayor.

"Crear las condiciones políticas" (imponer un retroceso al proletariado, contener el desplazamiento de las capas medias, renovar los mecanismos políticos internos de la propia burguesía) es, desde febrero de 1974 la obsesión de esta burguesía paralizada en sus mecanismos económicos defensivos mas elementales. Crear las condiciones para poder pasar a las masas trabajadoras la factura de un mínimo reenderezamiento de los beneficios. Pero en lugar del retroceso del proletariado se produce la muerte de Franco y un nuevo ascenso de luchas, un cambio cualitativo en la correlación de fuerzas entre las clases, la apertura de una situación prerrevolucionaria cuyas coordenadas vienen situadas por el desarrollo de la organización obrera de masas frente al aparato franquista que subsiste casi íntegro. La prioridad de "lo político" se afirma mas que nunca.

El precio económico es alto. Desde 1974 hasta 1977 de forma progresivamente acelerada se produce un ascenso en flecha simultaneo del paro, la inflación y el deficit exterior, y un descenso acelerado de la inversión. España no solo había perdido con el alza de las materias primas del 73, y en pocos meses, el 25 por ciento de su capacidad adquisitiva en el exterior, sino que cuando en 1976 el resto de países industrializados habían absorbido este impacto y dominado las tasas de inflación, la inflación española alcanzaba cotas del 20 por ciento, y el deficit se hacía correlativamente insoportable. Ello implicaba una creciente absorción privilegiada del descenso mundial de la tasa de beneficios y una baja acelerada de la inversión. Desde 1974 hasta 1978 el descenso de la inversión productiva ha producido una descapitalización del conjunto de la economía española de un 13 por ciento. La primera expresión de esto es el paro. No solo no se absorbe el aumento de la población ni la vuela de emigrantes, sino que disminuye constante-

mente el número de puestos de trabajo (en el período desde 1974 hasta 1977). Pero no solo se cierran puestos de trabajo, sino que hay un envejecimiento de las instalaciones: en 1978 la importación de maquinaria ha disminuido en un 13'5 por ciento. Probablemente un analisis desglosado por sectores de ese 13 por ciento de descapitalización en 4 años no daría un porcentaje superior para la industria y la construcción. El decrecimiento de los aumentos de productividad refleja este envejecimiento de instalaciones, al tiempo que el aumento del paro marca un auténtico descenso de la productividad global.

B) LOS PACTOS DE LA MONCLOA

La grave situación alcanzada (insostenible económica y políticamente —en este segundo aspecto ante todo por el potencial explosivo de un paro incontenible—) y las presiones del imperialismo internacional (FMI) obligaron a la burguesía a partir del 15 de junio de 1977 a aprovechar un leve respiro coyuntural, la renovación de los mecanismos políticos del régimen para emprender por primera vez en muchos años una acción económica de conjunto.

Con este plan la burguesía española pretendía abordar unas primeras reformas estructurales encaminadas a elevar la tasa de ganancia de los capitalistas, que por causa de la crisis económica, se encontraba a niveles demasiado bajos. Para ello se recurrió a una serie de medidas:

— Limitar el crecimiento de los precios, encareciendo los créditos, limitando el gasto público y llevando una política monetaria restrictiva. Lo que de entrada suponía caminar hacia el cierre de pequeñas empresas, aumentar los índices de paro y reducir los servicios sociales destinados a los trabajadores.

— Limitar por debajo del crecimiento de los precios el de los salarios. Buscando un aumento de los beneficios a costa de los salarios.

— Limitar el enorme deficit de la balanza de pagos, pero no mejorando la tecnología sino recrudesciendo la explotación de los trabajadores para hacer competitivas las exportaciones.

— Abordar una serie de planes de reestructuración de los sectores básicos de la industria, buscando aumentos de productividad, con las naturales consecuencias de aumento del paro, aumentos de ritmos de trabajo y en definitiva deterioro de las condiciones de trabajo.

Por primera vez, los partidos mayoritarios y centrales sindicales se comprometían abiertamente a aplicar un plan económico de conjunto, cosa por otra parte imprescindible para que tuviera una mínima posibilidad de éxito. Para hacerlo mas "illevadero" se formularon una serie de "contrapartidas" demagógicas sobre la enseñanza y otros servicios, totalmente concretas —ninguna de ellas se ha cumplido— y un plan de beneficios fiscales a las empresas que firmasen contratos eventuales, como medida para "paliar el paro", con lo que se invitaba descaradamente a los capitalistas a que no crearan puestos de trabajo fijos, sino eventuales.

Las consecuencias del Pacto de la Moncloa en el terreno económico y social fueron contundentes.

El número de parados aumentó en cerca de medio millón, aumentando ostensiblemente la tasa de incremento del paro (mas del 130 por ciento con respecto a 1977).

La evolución de los salarios con respecto a los precios al consumo fue claramente negativa. Si tomamos como base 100 el nivel de los precios a primeros de enero de 1977, a 1 de enero de 1978 se convertían en 126'5 y el 1 de enero de 1979 alcanzaban 147'4 (tomando como referencia 100 a 1 de enero de 1977).

Por su parte los salarios experimentan alzas muy por debajo de los precios. Así, si tomamos como 100 los salarios a 1 de enero de 1977 (convenios del 77), a 1 de enero de 1978 subieron a 118 (teniendo en cuenta el tope máximo marcado por el Pacto de la Moncloa que fue de un 22 por ciento, descontando de ello Seguridad Social, trienios, etc). El 1 de enero del 79 (convenios del 79) se subió a 135'7 (teniendo en cuenta que como mucho hubo un aumento real del 15 por ciento respecto a enero de 1978). Este aumento se consiguió en muy pocos casos, teniendo en cuenta los topes del gobierno, 14 por ciento, los convenios y el cambio del sistema impositivo.

Según estos datos, tenemos que en el Pacto de la Moncloa los partidos obreros aceptaron una depreciación de los salarios de un 8,5 o/o en el año 77 (en los convenios que se firman para el año 78). Llegándose a fines del 78 con una depreciación del 36,9 o/o, dado que durante todo el año 78 prácticamente siguen vigentes los convenios firmados a resultados del Pacto de la Moncloa que como hemos dicho supusieron únicamente un aumento del 18 o/o en general.

En otros aspectos las consecuencias no fueron menos funestas para los trabajadores. Con los Pactos de la Moncloa se ponen en marcha la primera fase del plan de reestructuración naval y siderúrgico, firmados por los sindicatos. Que suponen el inicio de los desmantelamientos de la siderurgia integral y fuertes reestructuraciones de plantilla también en los astilleros. De todos modos, esto no era más que el inicio de una política de desmantelamientos generales. Concretada en la puesta en práctica de la primera fase de los planes naval y siderúrgico.

C) EL PACTO SOCIAL FRUSTRADO

El mantenimiento de la combatividad obrera y ciertos niveles de organización sindical, dificultaron llevar hasta sus últimas consecuencias la aplicación de los pactos de la Moncloa, particularmente en el aspecto del saneamiento y reestructuración de sectores industriales deficitarios o poco competitivos. La oleada de movilizaciones desatada a partir del 1 de mayo de 1978, colocaron al gobierno y al régimen en una situación de crisis mortal. La necesidad de articular un plan económico en profundidad con la imprescindible colaboración de los principales partidos y sindicatos obreros, tenía que acompañarse con la disposición de nuevos mecanismos contra la organización obrera.

De hecho, los grandes planes de reestructuración de la industria siderúrgica, del automóvil y la segunda fase del plan naval que comportaban la supresión de miles de puestos de trabajo fueron aplazadas a la espera de una firma por parte de los sindicatos. Pues no hay que olvidar que la aplicación de estos planes suponía atacar a las mayores concentraciones proletarias del país. Era un reto de una enorme envergadura que difícilmente podía ser asumido por un Gobierno en crisis cuya principal preocupación era la aprobación por Referendum de la Constitución. Por otra parte, el desgaste de los mecanismos de integración de la organización obrera (los comités del Gobierno) y la ausencia de un marco apropiado de "relaciones laborales", aconsejaban sentar las bases políticas previas para asegurar un pacto social con las direcciones del movimiento obrero.

Sin embargo, el golpe sufrido por el Gobierno con el masivo rechazo a la Constitución y la oleada de movilizaciones desatada en la preparación de los Convenios para el 79, imposibilitaron la firma de un pacto a todas luces urgente.

La tremenda crisis política que se abrió, manifestada en la disolución de las Cortes del 15 de junio y la convocatoria de elecciones, impidieron nuevamente acometer las profundas medidas y agresiones a los trabajadores que la crisis económica demandaba al Gobierno. Una vez más, las exigencias políticas impedían al mismo hacer frente en profundidad a la crisis económica, a costa de agravarla aún más.

La cifra de parados sobrepasaba a finales de año el millón setecientos mil. El crecimiento del PIB era de un 3,1 o/o, presentándose perspectivas más negras para el año 79 (recuérdese que para que no hubiera un aumento en el número de parados, hubiese hecho falta un incremento del PIB de un 5 o/o como mínimo, sin contar factores como el regreso de emigrados, éxodo del campo a la ciudad, etc.)

La inflación alcanzaba el 16,5 o/o a finales del año 78, sin que hubiese habido ni siquiera una mínima reforma de la estructura de costes, etc. con lo que el peligro de nuevos impulsos de la onda inflacionista amenazaban echar por tierra las pequeñas 'conquistas' del Pacto de la Moncloa.

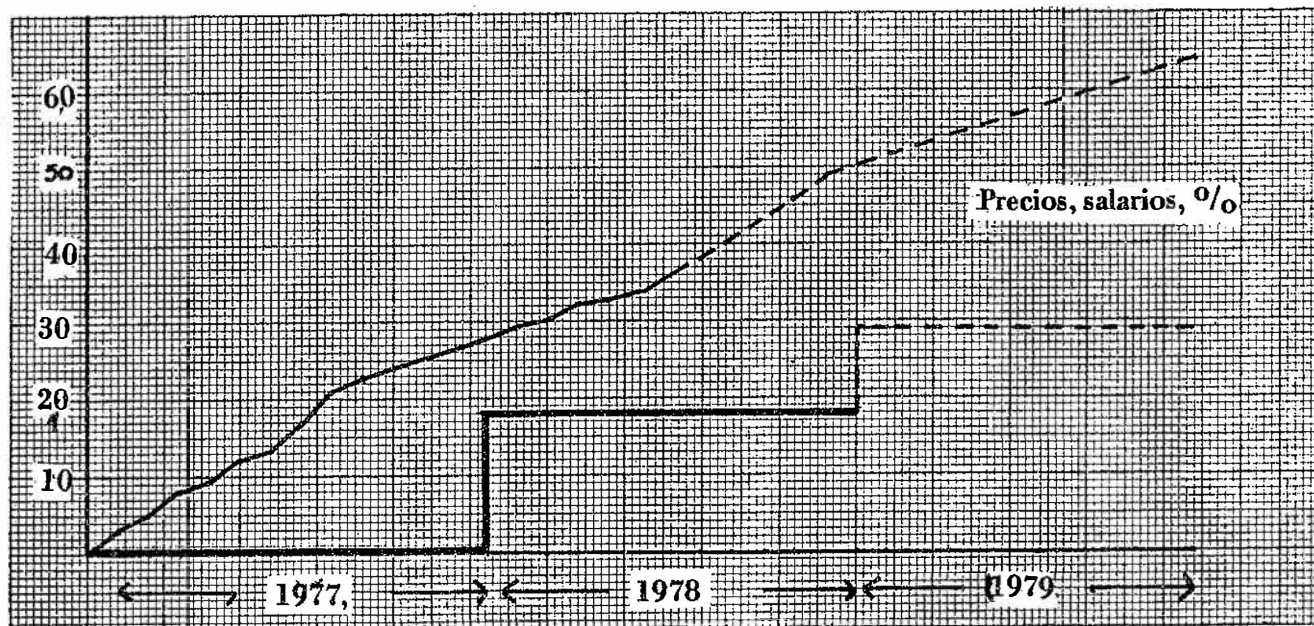
En esas circunstancias, el Gobierno establecía el decreto de limitación salarial para hacer frente a los convenios. Los topes establecidos (por debajo del 13 o/o en la mayoría de los casos) se completaron con la oposición frontal a aumentos lineales y la imposición de nuevos tributos a los salarios.

La derrota parcial sufrida por los trabajadores en la lucha de los convenios tuvo una expresión principalmente política: la "victoria" de la UCD en las elecciones generales. Pero la timidez de las medidas en el terreno económico no hacían más que profundizar la crisis, aún con el ligero respiro obtenido en el terreno político con las elecciones.

Una muestra elocuente de esto que decimos lo constituye el Presupuesto del Estado para 1979 y el déficit que arrastra en la actualidad.

A finales del año pasado el Gobierno presentó a las Cortes un Presupuesto que regulaba el Gasto Público (de enorme importancia si tenemos en cuenta que el Estado controla el 26 o/o del PIB) así como la estructura de impuestos.

Este presupuesto pretendía originalmente disminuir el Gasto Público, con las consiguientes consecuencias en el aumento del paro, reducción de servicios sociales, etc. En efecto, aunque se dijo que había un aumento del 20,8 o/o en el gasto, muy por encima del aumento de la inflación, lo cierto es que teniendo en cuenta el presupuesto de los organismos autónomos controlados por la administración y el presupuesto de la Seguridad Social, siendo ambos de una cuantía similar al presupuesto general del Estado, el gasto de todos ellos suponía un aumento no superior al 15,9 o/o (por debajo del índice de inflación que fue de un 16,5 o/o) lo que suponía en términos reales una disminución del Gasto Público. E incluso considerando el aumento de un 20,8 o/o del Presupuesto General, tenemos que los Ministerios Económicos que son los que en principio más se tendrían que beneficiar para un impulso de la economía no obtienen aumentos superiores a los de la inflaci



Cada vez más diferencia entre los precios y los salarios.

inflación, con lo que realmente sufrían una disminución en sus gastos. Siendo el caso más escandaloso el del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, fundamental para impulsar una política real contra el paro, el cual obtiene un aumento de un 8,9 o/o es decir, varios puntos por debajo del índice de inflación.

Este presupuesto que originalmente ya suponía un golpe muy importante a los trabajadores por la disminución del gasto público que comportaba, era realmente difícil ponerlo en práctica en unas condiciones políticas particularmente delicadas.

Así, a mediados de este año se cifraba el déficit del sector público en más del doble del previsto en las medidas de diciembre del 78. Este déficit se desglosa del siguiente modo: más de 250 000 millones de pesetas de déficit en el Presupuesto; unos gastos en la Seguridad Social de 170 000 millones más que los inicialmente previstos, que descontando unos 80 000 millones de más que el Gobierno dice que se va a recaudar, sitúa el déficit en unos 90 000 millones; 30 000 millones para evitar una situación de quiebra de las empresas públicas, especialmente las del INI; un déficit de las corporaciones locales de por lo menos 30 000 millones de pesetas. Todo ello suman un déficit del sector público de por lo menos 400 000 millones de pesetas, lo que supone, como hemos dicho, el doble de lo previsto por el Gobierno en el plan económico de diciembre pasado.

Si a esto se añaden los 180 000 millones de pesetas por pago de obligaciones que quedaron pendientes del ejercicio de 1978, siendo esta cifra unos 100 000 millones más alta de lo habitual en estos casos, tenemos que el déficit monetario del sector público superaría a finales de año la cifra de medio billón de pesetas. Cifra que supone la quiebra total del plan establecido por el Gobierno.

D) EL NUEVO PROGRAMA ECONOMICO DEL GOBIERNO

Las previsiones del Gobierno para el año actual sobre la tasa de inflación como de crecimiento del Producto Interior Bruto, han quedado deshechas en los seis primeros meses. Bastante antes de que se noten las repercusiones de los últimos aumentos del precio de los crudos.

Si a esto le añadimos el alarmante incremento del déficit del sector público antes señalado y la perspectiva de una recesión internacional aún más profunda, se puede comprender la catastrófica situación de la economía española.

Con la promesa de que la inflación no sobrepasaría el 12 o/o en este año el Gobierno, como antes hemos señalado, impuso a principios de año unos topes salariales entre el 12 y el 14 o/o. Sin embargo, la tasa de inflación se sitúa para este año en cifras aproximadas del 18 o/o, habiéndose superado ampliamente los objetivos señalados.

Estos índices suponen una nueva y fuerte depreciación de los salarios. Podemos afirmar que caso de confirmarse las previsiones de un 18 o/o de inflación para este año, los salarios habrán sufrido desde los convenios del 77 una depreciación aproximada de un 28,1 o/o. Ante esta situación, el plan económico del Gobierno en su apartado de medidas a corto plazo, propone una revisión de un 1,7 o/o a partir del 1 de julio y que los convenios para el año 80 revisen los salarios muy por debajo de los índices de inflación previstos para el año 79, pues se dice explícitamente que los salarios al ser revisados no deben tener en cuenta el efecto que en el alza del coste de la vida tiene el alza del petróleo. En este terreno el Gobierno pretende propiciar un mayor golpe a unos salarios que no paran de bajar desde hace varios años.

El año pasado, de acuerdo con las medidas establecidas en los Pactos de la Moncloa, el PIB creció un 3,1 o/o. Ya hemos visto las nefastas consecuencias que eso ha tenido en cuanto a un fuerte incremento del paro.

Decían que tras los pactos de la Moncloa iban a empezar a resolverse los graves problemas de la economía. Decían que comenzaría la reactivación, que habría mayores tasas de inversión y menor inflación. Y los primeros en decirlo eran los Sres. Carrillo y González. Ahora no sólo se pone en evidencia que la inflación no ha sido controlada de ninguna manera a pesar de los golpes sufridos por la clase obrera en su trabajo y en sus sa-



El "nuevo" programa económico de la burguesía no solucionará esto...

larios, sino que las previsiones para este año en cuanto a un incremento del PIB de un 4 ó 5 o/o, tienen que ser rectificadas a la baja. Ahora el Gobierno habla de un crecimiento aproximado de un 2,5 o/o, con lo que a buen seguro los niveles de paro aumentarán como una flecha. Difícilmente se acabará el año con menos de 2 millones de parados. Y las perspectivas a medio plazo son todavía más negras. La culpa de todo esto, claro, la tienen los "moros" según afirma con toda la chatez del mundo el Gobierno. En el apartado de medidas a corto plazo, el último aspecto que pretende abordar el Gobierno es el de la reducción en unos 100 000 millones de pesetas el enorme déficit del sector público. Las medidas que van a poner en práctica para ello son: reducción del gasto público, lo que supone de entrada un descenso de los salarios de los funcionarios, entre otras medidas; disminución del gasto de la Seguridad Social en un primer momento tratarían de lograrlo mediante la reducción del desempleo, incapacidad laboral transitoria, medicinas, etc.; finalmente una serie de medidas encaminadas a reducir el déficit de los ayuntamientos como son la recaudación de dos pesetas por litro de gasolina vendida, etc. Todo este conjunto de medidas a corto plazo, para este año, suponen no sólo un fuerte incremento del paro y una depreciación todavía más fuerte de los salarios, como antes hemos señalado, sino también un serio golpe a los servicios sociales. Pero claro, se piden todos estos sacrificios a los trabajadores para aliviar la crisis, pero dejando claro que de aumentar impuestos a los capitalistas nada y además para mayor descaro se afirma que recibirán todo tipo de ayudas y desgravaciones fiscales para que inviertan.

Las medidas a medio plazo de este plan no son menos contundentes. Su "filosofía" está perfectamente clara: aumentar las tasas de ganancia de los capitalistas, liberando los precios para que suban cuando ellos quieran; aumentando la productividad, es decir, mayores ritmos de trabajo y menos salarios para los trabajadores; reestructurar los sectores básicos de la economía mandando a miles de trabajadores a la calle; reducir drásticamente los servicios sociales, etc. Es decir, aumentar al máximo la explotación.

En efecto, las líneas de actuación son muy claras:

-PARO: el crecimiento en los próximos años será de un 4 ó 5 o/o, asegurando "la ausencia de tensiones en el proceso de negociación colectiva" y teniendo en cuenta que "los crecimientos en el PIB en los próximos años sólo podrán asegurar un incremento del empleo si el avance de los salarios reales no absorbe íntegramente el crecimiento de la productividad". Es decir, una decidida voluntad por parte del Gobierno de incrementar, no reducir, el número de parados existentes en la actualidad, y eso durante varios años más. Y además atentar sistemáticamente contra los salarios en beneficio de las ganancias capitalistas. Junto a esta declaración de guerra contra los obreros, el Gobierno se propone " paliar " los efectos del tremendo paro mediante un conjunto de acciones específicas verdaderamente canallas, como son:

"Establecimiento de la jubilación obligatoria a los 69 años".

"Mantenimiento del programa de empleo juvenil", que como se sabe consiste en primar a los empresarios que realicen

contratos eventuales, lo que constituye una clara invitación a no crear puestos de trabajo fijos.

Programa de 10 000 millones de pesetas de ayuda a las empresas en crisis.

Limitación en 12 000 millones de pesetas del fondo de empleo comunitario.....

Finalmente se proponen junto a estas ridículas medidas contra el paro, un ataque a fondo al seguro de desempleo, tanto en su duración, cuantía como en su concesión:

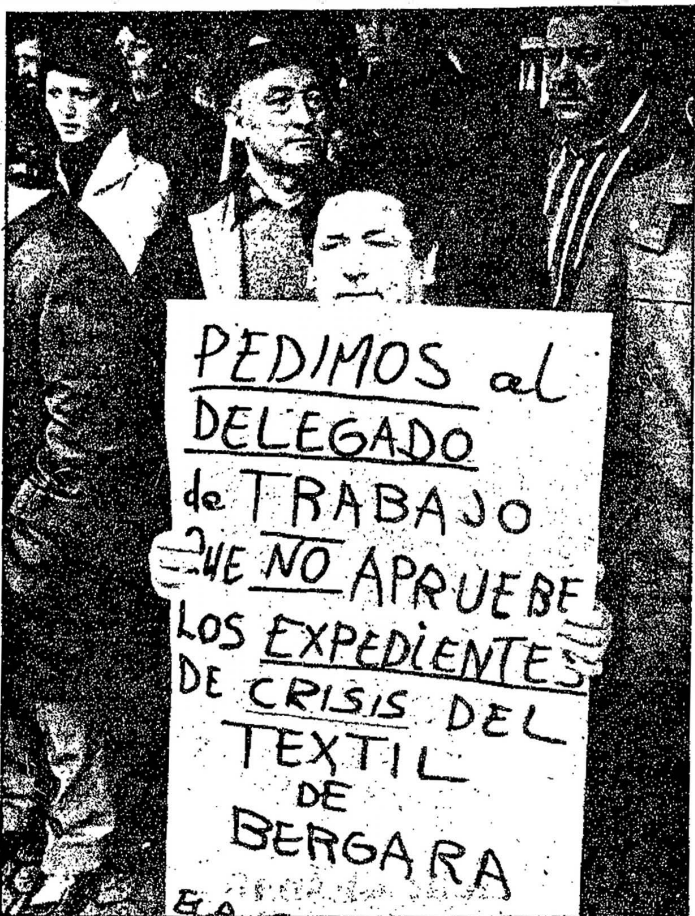
"La duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de ocupación cotizados al seguro de desempleo".

"La cuantía de la prestación tendrá un límite máximo y será decreciente en el tiempo"

Es decir, principalmente la juventud, que se supone que o bien nunca ha trabajado o lo ha hecho eventualmente, se quedará no sólo sin posibilidad de trabajo sino también sin cobrar un duro del seguro de paro. Y no sólo esto, sino que todos los parados que cobran, que son los menos, verán cómo se les va a ir reduciendo el dinero que cobran, de la misma manera que irán perdiendo las esperanzas de encontrar trabajo.

-REESTRUCTURACIONES DE LOS SECTORES

INDUSTRIALES: como hemos explicado anteriormente, el Gobierno se había mostrado incapaz, incluso con los Pactos de la Moncloa, de meter mano a fondo a sectores básicos de la economía española, especialmente la siderurgia. Con la complicidad de los dirigentes de CC OO y UGT, se estaba poniendo en práctica la primera fase del plan naval, que comporta miles de despidos. Pero aún con todo, tampoco en este sector, ni en el automóvil, etc. se habían atrevido a ir hasta el final. Ahora, sin embargo, se proponen entrar a saco, tanto en la siderurgia como en la industria naval, articulando además un conjunto de mecanismos que permitan abordar reestructuraciones más o menos camufladas a prácticamente todos los sectores de la producción. En efecto, tras afirmar que en las actuales circunstancias se "deberá proceder a una reasignación de recursos que deberán dirigirse ineludiblemente con carácter prioritario a actividades directamente productivas" lo que "impondrá aplazamientos en la satisfacción de demandas sociales que sólo podrán ser cubiertas una vez superada la crisis actual", se establecen los siguientes criterios básicos de la política de reestructuraciones:



"Reducción de los costes financieros, en especial, para aquellas empresas en las que las deficiencias estructurales y tecnológicas sean menos graves que las de su estructura financiera y, por tanto, tengan mayores posibilidades de supervivencia futura, cara a la competitividad internacional y la integración en Europa".

"Este apoyo oficial al saneamiento financiero se hará de forma selectiva y condicionada a la consecución de unos objetivos mínimos de competitividad y productividad para cada empresa. Ello exigirá en la mayoría de los casos una decidida reestructuración en profundidad y un compromiso en materia de salarios".

En pocas palabras: que se hundan todas las empresas obsoletas, las pequeñas y medianas, y bajo el criterio de lograr una mayor productividad, apoyo oficial a todas aquellas empresas "punta" —en general aquellas cuyo producto es de un alto valor añadido, que son por otra parte las que generan menos empleo— que puedan competir internacionalmente.

Esta política de reestructuraciones se concreta también para el sector siderúrgico y naval:

a) Siderurgia: "desarrollar su capacidad de producción de acuerdo con la evolución previsible del consumo interior de acero y de sus posibilidades de exportación y (.....) lograr una reducción de costes", lo que exigirá una "adecuación realista del empleo, tanto directo como indirecto, para conseguir que las empresas operen con eficacia mediante un aumento importante de la productividad".

"Por último, la siderurgia española habrá de evolucionar hacia productos de mayor valor añadido, dentro de un marco de especialización productiva, que vendrá impuesto por nuestro nivel tecnológico competencia internacional".

Sus intenciones por lo menos están claras: abajo toda la siderurgia integral y toda su industria auxiliar. Mantener, con reestructuraciones adecuadas al nivel de consumo, la industria de aceros especiales, etc. La aplicación de este plan comportará decenas de miles de despidos, cierres de numerosas empresas, principalmente en la zona de Bilbao, Asturias, etc.

b) Construcción naval:

"Ajustar el volumen de producción de la demanda previsible".

"Incrementar la competitividad de la construcción naval, mejorando su productividad, lo cual implicará tanto una mejora de los rendimientos como una adecuación de la estructura y del volumen del empleo en este sector".

Y ello adaptando medidas encaminadas a "superar los fuertes déficits y mejorar la estructura financiera de los grandes astilleros" y "adaptar el volumen y estructura del empleo al tipo y nivel de actividad productiva prevista a medio plazo".

Es decir, desmantelamiento, prácticamente general, de la industria naval.

Finalmente, se establecen las siguientes líneas de actuación en cuanto al sector público:

Junto a crecientes incentivos fiscales a los empresarios, se plantea una creciente liberalización de la política de importación, en la que entre otros objetivos se plantea la eliminación del comercio de Estado en el plazo de los dos próximos años. Asimismo en los capítulos dedicados a la inversión extranjera en España y a la inversión española en el extranjero se procederá a una progresiva liberalización.

En cuanto a los gastos públicos, en la línea explicada en el problema de los presupuestos, "es propósito del Gobierno limitar el crecimiento del gasto corriente del Estado. En este sentido, el Gobierno se compromete a mantener el incremento del gasto público corriente en términos nominales por debajo del crecimiento del Producto Nacional Bruto". Y "es preciso que la inversión pública... se dirija de manera especial a aquellas actividades directamente productivas que mayor impacto puedan tener en la creación de puestos de trabajo y atiendan a facilitar el funcionamiento del sector privado". Eligiéndose "inversiones de carácter productivo y que no generen aumentos apreciables en los gastos públicos corrientes". Junto a esta voluntad de acometer una política de reducción sistemática de servicios, se sitúa a la inversión del Estado al servicio de las empresas más competitivas y bajo criterios de disminu-

ción del papel del Estado en una política generadora de puestos de trabajo.

Por otro lado, "dado que los gastos de personal absorben actualmente en torno al 45 o/o del presupuesto de las Administraciones Públicas, constituye objetivo prioritario del Gobierno la reducción relativa de los costes de personal y el aumento de la productividad del mismo". Con independencia del conjunto de acciones que se van a adoptar en relación a la disminución de 100 000 millones del actual déficit del presupuesto, al que antes hacíamos referencia, el Gobierno se propone adoptar "a medio plazo las siguientes medidas:

"Fomento de la movilidad del personal dentro de la Administración.

"Adopción de una política realista de retribuciones.

"Aplicación estricta del criterio coste-beneficio a la hora de decidir la creación de nuevos servicios o la ampliación de los existentes."

Respecto a la actuación de la empresa pública, el PEG plantea un principio básico: "La actuación simultánea en sectores económicamente rentables y no rentables debe permitir absorber las pérdidas transitorias que puedan producirse".

Sobre esta base se establecen un conjunto de normas de actuación:

Salvo casos excepcionales, la creación de nuevas empresas públicas en el futuro deberá hacerse mediante ley aprobada en las Cortes.

El equilibrio financiero de las empresas públicas deberá lograrse fundamentalmente por la vía normal de su competitividad en el mercado, teniendo las subvenciones un carácter excepcional.

La empresa pública se ajustará en sus relaciones con terceros al principio de equiparación con las empresas privadas....

Es decir, tanto en lo referente a los gastos corrientes, como a la actividad inversora del Estado, se propone un programa fuertemente restrictivo y encaminado al desmantelamiento de importantes empresas públicas. Con lo que en lugar de acometer una política decidida contra el paro y por una mejora de los servicios sociales, se opta por todo lo contrario, expresando una decidida voluntad de emprender importantes acciones contra el sector público.

II.- ACCION DE MASAS Y ORGANIZACION OBRERA

A) LA APERTURA DE UNA CRISIS PREREVOLUCIONARIA EN EL ESTADO ESPAÑOL

En el mes de septiembre de 1976 se celebró el III Congreso de la LIGA COMUNISTA. Tal y como se indica en su resolución política, todos sus debates y resoluciones estuvieron determinados por la creencia de que ese Congreso se realizaba "en vísperas de la caída de la dictadura".

Sus previsiones se basaban principalmente en la maduración al extremo de todas las contradicciones sociales y políticas del Régimen a raíz de la muerte de Franco, unida a la imposición en los hechos de los sindicatos libres y partidos obreros.

Se pensaba que todos los planes de la "reforma" de la Dictadura estaban desbaratados y que la política de la burguesía se caracterizaba por "su parálisis, su carencia total de iniciativa, en contraste con el ímpetu y las progresivas conquistas del movimiento obrero".

Se decía que el Gobierno Suárez, que sustituía al fracasado de Arias-Fraga, se encontraría "paralizado desde el principio". Concluyéndose en que:

"En medio de esta situación de crisis general, con un movimiento obrero mas fuerte que nunca, cualquier paso en la "reforma", lejos de fortalecer la dictadura coronada agrava todas sus contradicciones y acelera su descomposición. Acentúa peligrosamente la distancia entre las imposiciones del movimiento de masas y la legalidad franquista. Profundiza hasta los límites de un abierto enfrentamiento las tensiones entre los distintos clanes del Régimen. Se aleja cualquier posibilidad de colaboración directa de los sectores fundamentales de la "oposición democrática" con el Gobierno, a pesar de la "buena voluntad" de ésta. Se acelera la crisis de las instituciones fundamentales del estado, como el Ejército. Se resquebrajan a pasos de gigante los aparatos de control franquista (CNS,...). Se acelera, en fin, el momento del derrocamiento de la Dictadura a manos de un movimiento de masas cuyo ascenso es ya imparable".

Y en relación a todo ello se señalaba la "decisión renovada del gran capital de asirse con fuerza al clavo ardiendo de la dictadura, hasta el fin, en tanto quede un hilo de esperanza, condenándole a una crisis profunda y permanente".

En este contexto de "ruina acelerada del régimen", se analizaba que "el desbaratamiento definitivo de los proyectos de la reforma lleva aparejado el aumento de inclinaciones de partes importantes del aparato burocrático, policíaco y militar del franquismo hacia soluciones duras, ligadas a intenciones militares", así como a que sectores importantes de las clases dominantes considerasen seriamente "la necesaria utilización de la

salida democrática de emergencia", pregona entre otros el PCE y el PSOE, sin dejar por ello de aferrarse, con todas sus fuerzas y hasta el fin, a la dictadura "una salida que con el auxilio de las direcciones del movimiento obrero, les permita contener el torrente desatado con la caída de la dictadura".

Y todo esto se analizaba en el contexto de un auge del proletariado internacional que conocía en Portugal, en abril y mayo de 1974, el primer hito de la revolución europea, determinando una crisis irreversible de los regímenes burgueses y burocráticos del continente europeo.

A partir de aquí conviene analizar los hechos fundamentales del proceso revolucionario español, valorando críticamente las previsiones de nuestro III Congreso, así como otras posteriores.



De ministro del Movimiento con Franco a capitán de la "democracia"

Tal y como preveía el III Congreso, los últimos meses del año 76 y los primeros del año 77, conocieron un impetuoso desarrollo de la acción de masas, en sus objetivos y en su organización, que condujeron la primera "reforma" de Suárez a una situación de clara bancarrota, y con ella a la misma Monarquía franquista.

Estas movilizaciones tuvieron su punto culminante en las acciones desatadas a raíz de los asesinatos de Madrid de enero de 1977, las movilizaciones campesinas de marzo y la huelga general de Euskadi de mayo en torno a la exigencia de amnistía, entre otros objetivos.

El panorama no podía ser mas sombrío para la burguesía. Era notoria la quiebra del plan de "reforma" del primer gobierno de Suárez. La CNS, uno de los pilares básicos del Régi-

men, estaba en Barcelona. Ese régimen caucico experimentaba una progresiva pérdida de base social, como se evidenció en las citadas movilizaciones del campesinado en marzo de ese año y la constante movilización de la pequeña burguesía urbana y nacionalista. Junto a todo ello, la perspectiva de una agudización de la crisis económica, indicaban el verdadero alcance de la crisis social que atenazaba al capitalismo español, que había medrado durante décadas parapetado tras una dictadura militar fascista, ahora en irreversible descomposición. La correlación de fuerzas ganada por el proletariado y las masas, a través de sucesivas imposiciones de hecho mediante su acción y organización independientes, acentuaban la crisis de un Régimen cuyos rasgos bonapartistas aparecían cada día mas descompuestos.

La ausencia de equipos y planes políticos para articular nuevos mecanismos que prolongasen la agonía del Régimen, expresaba nítidamente esa correlación enormemente desfavorable en la que se debatía.

En esta situación, tal y como analizó el III Congreso, no podían por menos que expresarse los primeros síntomas de la crisis de la columna vertebral del Régimen: el ejército y la policía.

Frente a ellos, el proletariado aparecía como claro e indiscutible protagonista de la escena política. Su acción, tras la que arrastraba al grueso de la población, estaba presidida por un objetivo claro: acabar con la Monarquía franquista.

Sus métodos no eran menos contundentes: una y otra vez todas las movilizaciones desencadenadas tras objetivos elementales y democráticos, desembocaban en huelgas generales que rápidamente apuntaban hacia el mismo objetivo centralizador: derrocar el Régimen.

Las formas de organización que levantaba en el desarrollo de su lucha, se adecuaban a los objetivos de la misma: asambleas de fábrica, barrio y pueblo, culminando en la formación de comités revocables en las mismas, con desiguales niveles de extensión y coordinación, y que dieron paso a un desarrollo masivo de los sindicatos libres, en un marco de práctico desmantelamiento de la CNS y de enormes dificultades para la burguesía y la burocracia stalinista para dislocar ese proceso avanzado y masivo de organización independiente de la clase mediante el recurso a nuevas estructuras de encuadramiento.

Esta voluntad del proletariado de organizarse para acabar con la Monarquía, tenía su correlato en su voluntad de levantar un Gobierno de sus partidos, lo que se expresaba en su agrupamiento político en torno a sus partidos tradicionales, especialmente el PSOE.



"... la lucha obrera que ponía en crisis al Régimen..."

Estas eran las características fundamentales de la situación que, correctamente, fue definida por nuestro partido como "prerrevolucionaria", indicando con ello que la lucha de masas por derrocar a la Monarquía daría paso a una situación abiertamente revolucionaria, en la que todas y cada una de las cuestiones políticas se remitirían a la construcción de un partido

revolucionario de la sección de la IV Internacional, capaz de encabezar la construcción de formas soviéticas de organización en trono a un programa de independencia política y de toma del poder por la clase obrera.

B) LA NUEVA "REFORMA" DE LA DICTADURA: LAS ELECCIONES DEL 15 DE JUNIO

En este contexto, no podía por menos que fracasar cualquier intento de "reforma" de la Dictadura realizado al margen de la dirección stalinista y socialdemócrata. La disyuntiva era clara: o la Monarquía se enfrentaba abiertamente al movimiento obrero, precipitando un choque frontal cuyo resultado era evidente, o lo aplazaba buscando un momento mas propicio, para lo que era imprescindible establecer unos mínimos mecanismos que permitieran la colaboración directa e institucional del PCE y del PSOE en el sostenimiento de un estado en Barcelona.

Constatado el fracaso del primer intento de "reforma", el gobierno Suárez aceptaba legalizar al PCE, conceder una amnistía recortada y organizar las elecciones del 15 de junio de 1977.

En definitiva, adoptaba una serie de medidas encaminadas a una colaboración directa del PCE y el PSOE en la defensa de la Monarquía.

Pero estas medidas tenían en un primer momento un efecto contradictorio. De hecho contribuían a la división en las filas de la burguesía y a la agravación de la crisis del estado. Pues no hay que olvidar que entraban en una contradicción, cuando menos parcial, con un estado y unas instituciones conformados para regular sus relaciones con las organizaciones de la clase obrera por medio de medidas y mecanismos dictatoriales y represivos.

De este modo se establecía una clara distinción entre los diversos agrupamientos de la burguesía, distinción que no fue correctamente detectada por el III Congreso. En efecto, la división entre Alianza Popular y UCD tenía bases objetivas reales. Respondía a la existencia de dos proyectos políticos distintos para salvar a la Monarquía, al Ejército y la unidad del estado. Alianza Popular expresaba la negativa a modificar siquiera parcialmente los mecanismos de relación institucional con las organizaciones obreras. Expresaba, y expresa, la defensa estricta e íntegra del aparato de estado en su conjunto, tal y como este se ha conformado. Lo que políticamente significaba en esos momentos cerrar las puertas a una posible entrada del PCE y el PSOE en determinadas instituciones del estado, pues eso implicaba unas mínimas modificaciones que iban contra su propia integridad. Pero esto, con la primera reforma de Suárez fracasada significaba precipitar un enfrentamiento frontal con las masas, a lo que no estaba dispuesta el grueso de la burguesía.

Así caracterizaba la Fracción Trotskista de la LC a las Cortes levantadas el 15 de junio y en definitiva la perspectiva que se abría a partir de entonces:

"Estas Cortes han sido levantadas no como instrumento de dominación parlamentaria, dominación que sigue siendo burocrático-represivo-militar, sino como una barrera a las crecientes imposiciones de masas y tratando de encauzar la movilización dentro de la legalidad franquista. Una barrera para tratar de que la lucha por el desmantelamiento de la Dictadura por medio de la huelga general se quede entrampada cierto tiempo en el camino "parlamentario" y no siga un curso revolucionario..."

"Originalmente, el proyecto consistía en utilizar estas Cortes para limar asperezas entre los diversos clanes del Régimen, atraerse la colaboración de algunos sectores de la "oposición democrática" y renovar a través de ello su base popular de apoyo..."

"Este proyecto, hoy materializado, lejos de estabilizar la situación, lejos de fortalecer la Monarquía franquista, va a agravar --como todo paso anterior en la Reforma-- todas las contradicciones, acelerando hasta el extremo la descomposición:

a) en primer lugar, se ha evidenciado el fracaso de los mecanismos políticos articulados por la Reforma (Cortes) para romper las filas del proletariado y los oprimidos



Euforia de los socialistas tras las elecciones

atrayendo a la pequeña burguesía bajo el manto de la Monarquía "legitimada"...

b) La bancarrota de los equipos políticos que representan a los sectores franquistas más recalcitrantes —que se ha expresado sobre todo en el fracaso de Alianza Popular— junto a los elevados costes económicos, sociales y políticos que arrastra consigo la materialización del proyecto reformista, deben tener como consecuencia la agravación de las contradicciones en el seno del aparato franquista. Ello contribuye a acelerar la crisis de la Monarquía franquista."

c) El hundimiento de la Democracia Cristiana expresa, a un nivel, la incapacidad de la burguesía para organizar partidos políticos que aseguren cambios en sus formas de dominación a través de estas Cortes. Por otra parte, la participación de liberales, "socialdemócratas" y sectores de la democracia cristiana en la UCD, necesaria para mantener una mayoría franquista en las Cortes, indica su conversión en fuerzas neo-franquistas, habiéndose acabado definitivamente como fuerzas de "oposición democrática". La burguesía atraviesa una crisis de alternativas políticas globales... que en definitiva se ha reflejado en las elecciones: ausencia de alternativas políticas que no sean una subordinación al aparato del estado levantado por el franquismo... la necesidad de mantener cohesionado el heterogéneo bloque de la UCD, dada la crítica situación, contribuye, a su vez, a cerrar las puertas de la organización política de la burguesía en su versión post-franquista, y en esta medida supone también un obstáculo para cualquier cambio en las formas de dominación."

e) (...) el nuevo gobierno Suárez debe acometer la puesta en práctica de un plan de estabilización sin haber conseguido, ni mucho menos, despejar el horizonte político. Deben aplicarlo en peores condiciones que nunca: con una crisis política que no ha sido aliviada con la imposición de las Cortes y en una correlación de fuerzas más desfavorable que en ningún otro momento..."

f) En estas condiciones, la participación de las direcciones obreras mayoritarias, constituye el único elemento de estabilidad con que cuentan estas Cortes. Pero este mismo elemento está minado por profundas contradicciones. Pues la política de sostenimiento de la dictadura en la que están empeñadas se ve atrapada en el profundo carácter del mandato con el que las masas han elegido a sus partidos —acabar con la Monarquía franquista— voluntad que no ha sido quebrada y que adquiere una expresión concentrada en el amplísimo proceso de organización que el proletariado protagoniza frente a la crisis económica, social y política de la burguesía. En esta perspecti-

tica de las direcciones reformistas es el único punto de apoyo sólido con que cuenta el proyecto estabilizador de Suárez, pero éste debe serlo a costa de ahondar las contradicciones con las masas, que se expresará en crecientes desgarrones en el seno de los aparatos obreros. Ello constituye un elemento que debilitará seriamente y a corto plazo, la eficacia de la política de apoyo a la Monarquía franquista."

La Fracción Trotskista acababa así su definición sobre la crisis del capital:

"En esta situación prerrevolucionaria... el gran capital sigue optando por aferrarse a la dictadura. La Dictadura militar en su última fase bonapartista se oculta tras la fachada de supuestos cambios institucionales "democráticos" (Cortes) apoyada por las direcciones contrarrevolucionarias. Las formas bonapartistas, Monarca como arbitro mediador, gobierno presidencialista... no responden a una situación de equilibrio entre el proletariado y la burguesía, entran en flagrante contradicción con la correlación de fuerzas entre las clases, añadiendo nuevos elementos de inestabilidad a la situación. Es en este sentido que hablamos de que la Dictadura militar atraviesa su última fase de descomposición manteniendo aún formas bonapartistas residuales."

"El apoyo de los partidos contrarrevolucionarios al gobierno Suárez" y su continuo embellecimiento es la única forma de mantener un pseudoapoyo social en las capas más atrasadas de la pequeña burguesía."

A partir de esta valoración de la segunda versión de la "reforma Suárez" es necesario volver sobre las previsiones del Tercer Congreso.

Este Congreso efectuó importantes correcciones tanto en el plano del análisis como en el del programa y la táctica. Corrigió las perspectivas lineales del Congreso precedente, para quien "hasta su último estertor, la dictadura seguirá impidiendo la estabilización duradera de formas organizativas de masas del proletariado y otras capas."... aunque "esos mismos enfrentamientos alentarán al proletariado a levantar una y otra vez, en el curso de las movilizaciones, los organismos democráticos y unitarios de su combate sobre la base de las asambleas y a familiarizarse con ellos...". El Tercer Congreso comprendió que a partir de la imposición de las organizaciones de masas (asambleas, comités, sindicatos, partidos obreros) se abría una fase transitoria caracterizada por una contradicción básica: por un lado la existencia y creciente imposición de los hechos de las organizaciones obreras, por otro la permanencia de un Estado en crisis modelado para impedir cualquier brote de organización obrera, imposibilitado para articular mecanismos de integración de esa organización. Para el Tercer Congreso, esa "transición" necesariamente tenía que concluir con rapidez hacia un lado o hacia otro. Es decir, teniendo en cuenta la evolución de la correlación de fuerzas a escala general, sólo podía concluirse en un rápido hundimiento de la Dictadura por la acción de masas. De ahí que se vieran movimientos y acciones de finales del año 76, primeros del 77, como los que indefectiblemente habrían de causar el fin del viejo Régimen.

Este esquematismo en los análisis, problema que se ha ido presentando sucesivamente, no fue del todo desterrado por la Fracción Trotskista y por la misma Conferencia Extraordinaria de la LC celebrada en Noviembre del 77.

En efecto, si bien se advirtieron correctamente las profundas contradicciones de la "reforma" del 15 de junio, contradicciones que imposibilitaban una estabilización de la situación económica, social y política —como así ha sido—, se volvía a subvalorar el efecto que la política contrarrevolucionaria de las direcciones habría de tener en el movimiento obrero. La participación del PCE y el PSOE en la farsa del 15 de junio introducía, de entrada, una seria distorsión en los objetivos políticos que centralizaban la acción de las masas y en torno a los cuales desarrollaban sus procesos de organización. Se inculcó la creencia de que se iba a acabar con el franquismo por medio de la participación en las Cortes franquistas. Después se establecieron los pactos de la Moncloa, acuerdos no sólo de carácter económico sino fundamentalmente político. Pero aun y a pesar de estas distorsiones políticas, esto no bastaba para minar las bases del proceso de organización de masas, que seguía en las movilizaciones en torno a los convenios de finales del 77. Necesitaban atacarlo de raíz. El mecanismo básico fue el decreto de comités de diciembre del 77.

C) LOS COMITES DEL GOBIERNO CONTRA LA ORGANIZACION OBRERA



D) EL PRIMER CONGRESO DE LAS CCOO.

Como los hechos anteriores se habían encargado de demostrarlo, era prácticamente imprevisible aplastar directamente las organizaciones de masas levantadas. Sin embargo, la CNS, mecanismo utilizado a fondo por el PCE y las CCOO, para impedir el desarrollo de las asambleas, comités independientes y de los sindicatos, estaba en bancarrota total. Había fracasado ya el proyecto de la COS, que lejos de constituir un organismo de unidad sindical, fue un mecanismo establecido por la dirección estalinista para atar a la UGT a una CNS en crisis. Ya no era posible levantar nuevos artilugios para salvar a la CNS. Pero a la vez necesitaban de unos mecanismos de integración de la organización obrera en el Estado. Esto no era fácil, pues aparte del auge impresionante de los comités y sindicatos libres, la existencia de un Estado sustancialmente franquista era un obstáculo para facilitar la puesta en pie de nuevos organismos corporativos dotados de ciertas atribuciones.

Por otra parte, era impensable que se pudiera abortar el proceso de desarrollo de los sindicatos sin atacar previamente las bases orgánicas en las que se sustentaba: los comités libres y las secciones sindicales. Imponer, además, un proceso de desorganización y burocratización de los sindicatos, exigía atacar previamente esas bases.

Estos eran los objetivos del decreto de comités de Diciembre del 77. Lejos de considerarlos como "una victoria obrera", "organismo de unidad sindical" o "bases del proceso sindical constituyente", la LIGA COMUNISTA los definió correctamente como organismos burocráticos y corporativos cuya razón de ser era acabar con las secciones sindicales, las asambleas y los comités elegidos y revocables.

La participación de la UGT en las elecciones a los comités del Gobierno, fue un tremendo golpe contra la organización independiente de la clase y contra la propia UGT. Este sindicato, sus secciones y federaciones, constituían en ese momento la expresión más elevada de los procesos de organización de la clase. Se había levantado masivamente sobre la base de su intransigencia ante la CNS. Su misma existencia era un peligro para los pactos de las direcciones con Suárez y para todo el proyecto de "reforma" de la Monarquía. No bastó la aceptación de los pactos de la Moncloa por parte de la dirección ugetista, aceptación que ocasionó serias resistencias como en el caso del sindicato de Madrid, para imponer a la UGT el decreto del Gobierno. Fue necesario incorporar de manera burocrática al grueso de la burocracia vaticanista de la USO, para fortalecer en el interior de la UGT las posiciones partidarias de la participación en las elecciones.

Estos comités burocráticos se impusieron a la clase obrera por la confianza depositada en las centrales de clase que llamaban a su elección, no por la capacidad que tuviera el Gobierno Suárez para ello.

Pero también hubo empresas donde se rechazaron los contenidos del Decreto y se eligieron comités independientes, vinculados a la asamblea. Sin embargo, los procesos de desorganización que introdujeron a nivel general los comités del Gobierno, unido a las dificultades para asumir la generalización y la profundización de una dinámica de control obrero en la empresa, impusieron a esos comités independientes un proceso desigual de marginación de la asamblea y de burocratización, hasta llegar a presentar una fisonomía similar a los del decreto.

La imposición de los comités del decreto del Gobierno, introdujo un proceso de serio debilitamiento de los sindicatos. A partir de ahí se inició la desorganización interna, el freno de la afiliación masiva, el descenso de la militancia sindical, etc.

Pero esto no bastó para doblegar a la UGT y en general para desarticular las conquistas logradas en la fase anterior. La prueba más clara lo constituyeron las movilizaciones desatadas a partir del 1 de Mayo del 78. La presencia masiva y organizada de las secciones en esas acciones eran a su vez una clara evidencia de las limitaciones del proyecto del Gobierno. Nuevamente, los sindicatos y las movilizaciones de las masas de Euskadi, metían al Gobierno y a su "reforma" en una crisis profunda. Y ello a pesar del consenso establecido por las direcciones con la UCD para sacar adelante los proyectos antiobreros y contra las nacionalidades, cuya expresión máxima lo constituía la Constitución que se estaba gestando.

La precariedad de los mecanismos establecidos contra los comités y los sindicatos no sólo se manifestó en la tremenda crisis que se abrió tras las movilizaciones del 1 de Mayo y las de Euskadi.

Esas acciones impidieron al Gobierno llevar hasta sus últimas consecuencias los planes de reestructuración naval y siderúrgico aceptados por las burocracias en los Pactos de la Moncloa. También impidieron que se manifestaran hasta sus últimas consecuencias los efectos del decreto del Gobierno sobre comités. Pero no es menos cierto que gracias al apoyo prestado por las direcciones, el Gobierno consiguió sortear el escollo que supuso la importante acción de masas de la primavera de ese año. La tremenda división introducida tanto en los objetivos como en las formas de organización evitó que aquellas impresionantes movilizaciones cristalizaran en una huelga general contra el Gobierno.

Tanto en la fase anterior al 15 de junio, como durante los meses inmediatamente posteriores, la dirección del PCE se había destacado en la aplicación de una táctica encaminada a impedir el surgimiento de sindicatos libres. Para ello metió a las CCOO en la CNS, desde las elecciones del 66, consiguiendo destruirlas como organización independiente y convirtiéndolas en un aparato burocrático —apéndice del PCE— cuya única misión consistía en organizar la intervención de los enlaces y jurados.

Posteriormente, cuando eran una realidad la UGT y la CNT, lo que anunciaba el fin del vertical, el PCE se negó a cualquier dimisión de enlaces y jurados y propuso la formación de la COS para comprometer a la UGT en el mantenimiento de los mismos. Ese era, como antes decíamos, un organismo contrario a la libertad y a la unidad sindical.

A pesar de esta claudicación de la dirección de UGT, el movimiento obrero hizo inviable por más tiempo el mantenimiento de esos enlaces y jurados. Así, el proyecto del PCE de Congreso Sindical Constituyente desde el marco del vertical se fue al agua. Ya no podía imponerse desde el vertical esa estructura "unicitaria". Necesitaban otros mecanismos para hacer lo mismo. Así, cuando el Gobierno planteó el Decreto a comités de fábrica, el PCE se agarró hasta el fondo al mismo. Lo ideal para él era conseguir que estos comités se impusieran en todas las empresas, con la participación de todos los sindicatos y a partir de ahí plantear la coordinación de los mismos y montar toda la estructura de sindicato de nuevo tipo, más allá de la empresa. Dio pasos en ese sentido en el ramo de la Banca en Barcelona, en el metal del Vallés y del Bajo Llobregat. Su campaña electoral se basó en que los comités eran los organismos unitarios, las bases del proceso sindical constituyente, que hacían posible la "unicidad sindical".

Pero a pesar de lograr la imposición del proyecto del Gobierno, las evidencias posteriores al 1 de Mayo exigían un cambio de táctica. Ya el Congreso de la Comisión Obrera Nacional de Catalunya desechó el término de Congreso Sindical Constituyente para pasar a hablar de Congreso de Unificación Sindical.

Curiosamente, en ese Congreso frente a una propuesta de la LCR de que constara en los estatutos que CCOO eran un "sindicato asambleario", López Bulla contestó que en el espíritu y contenido de la propuesta se estaba "completamente de acuerdo", que era un problema de "táctica" no ponerlo en los estatutos, ya que "es evidente la existencia de la UGT".

La imposición de UGT, sobre todo, demostraba al PCE que era imposible imponer una intersindical a la portuguesa. Había que seguir otros caminos, más largos.

Así, como un reflejo retardado de la realidad impuesta por el movimiento obrero, se constituye el primer Congreso estatal de CCOO. En este Congreso se decidió la estructuración de CCOO como sindicato, con un proyecto unitario en línea con el del PCE.

Su objetivo es el Congreso de Unificación Sindical, que tendrá "parte de unificación y parte de constituyente" ya que "aunque lo fundamental es conseguir la unidad con la UGT, en este congreso se puede incluir al conjunto de trabajadores".

Se establece una estrategia hiperburocrática en la que las secciones sindicales no pueden tomar ninguna decisión respecto a su ámbito sin consultar previamente con el órgano superior.

Este congreso aprobó una línea de apoyo total a los "comités" del decreto, a los que se caracteriza como organismos de defensa de todos los trabajadores, base de la unidad sindical. Son ellos los encargados de asumir las tareas sindicales a nivel de la empresa. La razón de ser de la Comisión Obrera, como tal sección, es la de dar un mayor y mejor apoyo al comité, habida cuenta de la existencia de otras secciones sindicales estructuradas en la empresa.

Junto a esto se aprueba una línea hacia una real cogestión en el ámbito de la empresa a través de la dotación de atribuciones a los "comités", y en el marco de la empresa pública mediante el "control parlamentario" y la participación de las centrales en su gestión.

Este conjunto de decisiones, que significan un cambio táctico real, vienen fundamentalmente motivadas por la existencia en las empresas, y más en general, de la UGT. La utilización a fondo del vertical y posteriormente de la COS, no habían conseguido integrar a la UGT en las estructuras del Estado. Más adelante, el compromiso político adquirido por la dirección de UGT en los Pactos de la Moncloa y su participación en las elecciones a "comités", tampoco habían conseguido destruir a las secciones a través de su subordinación orgánica a esos "comités". Indudablemente con esas medidas se había introducido una fuerte desorganización y burocratización del sindicato, pero, como lo demostraron las acciones de masas inmediatamente posteriores al 1 de mayo del 78, todavía estaban lejos de conseguir sus objetivos. En ese momento, las movilizaciones de Euskadi y la resistencia que suponía la fracción del movimiento organizada en la UGT, principalmente, amenazaron con hacer estallar todas las contradicciones, no resueltas, de la reforma Suárez en su segunda y definitiva versión.

En esas circunstancias, el PCE y las CC OO se veían obligadas a establecer nuevos mecanismos para integrar a la UGT en el aparato de Estado. De ahí que, junto a la conversión de CC OO en un sindicato hiperburocrático, se profundizase en la línea de "participación" marcada por el IX Congreso del PCE. Tenían que orientarse hacia la "democratización del Estado y la democratización de la empresa", es decir, buscaban la modificación de los mecanismos institucionales franquistas, especialmente en el terreno laboral, como condición para facilitar la participación de las centrales y los "comités" en determinados aspectos de la gestión empresarial. Sin ello difícilmente podían jugar a fondo con los "comités" para subordinar y desorganizar a las secciones.

Por eso, la creación de "secciones" de comisiones obreras era el complemento para intentar atar a las secciones de UGT a los "comités". En línea con ello, este primer Congreso de CC OO acabó con una propuesta de "unidad" a la UGT. Propuesta que contemplaba la institucionalización de los acuerdos a nivel de las ejecutivas confederales para llevar a cabo el conjunto de la política sindical. El establecimiento de comités de enlace de las secciones sindicales, con el objetivo de embarcar definitivamente a las mismas en los "comités" de empresa. Y finalmente se establecía el objetivo, a más largo plazo, de unidad sindical orgánica.

En suma, aunque hoy puede decirse que CC OO es un sindicato, existen grandes diferencias, todavía hoy, con lo que representa la UGT en cuanto al grado de independencia de su organización.

CC OO, contrariamente a su nombre, no es una organización confederal, sino centralista: cada instancia del sindicato está subordinada a la inmediatamente superior. El Congreso no tiene un poder efectivo sobre la organización, salvo el de disolverla, quedando todo en manos del Consejo Confederal. Los poderes del Secretario General son omnímodos. Todo ello reconocido estatutariamente. Y sobre todo, hay una negativa explícita a las tareas del sindicato a nivel de la empresa, las cuales se delegan a los "comités" burocratizados del Gobierno,

de manera que las secciones sindicales de CC OO son meros apéndices de esos "comités". La impronta del proyecto de "sindicalismo de nuevo tipo" marca a CC OO con profundas deformaciones como organización sindical.

Pero las diferencias cualitativas entre CC OO y UGT son ante todo producto de un proceso histórico, no de la progresividad de la socialdemocracia frente al stalinismo.

UGT es la resultante del enfrentamiento del movimiento obrero contra el vertical. En ese sentido representa el punto más avanzado de organización obrera independiente, en tanto que ha recogido lo fundamental del impulso de masas contra el franquismo a ese nivel. La actual Confederación de CC OO es un aparato forjado en las entrañas del vertical por la vía de los enlaces y jurados, que en las actuales condiciones modifica parcialmente sus formas de relación con las masas para integrar sus organizaciones independientes en el Estado.

De ahí que la campaña por la "unidad" lanzada por las CC OO a partir de su Congreso no busque la unidad sindical, sino la destrucción de la UGT, profundizando y apoyándose en su debilitamiento actual.

E) LA CRISIS DE LAS CORTES DEL 15 DE JUNIO Y DE LA NUEVA "REFORMA"

Como hemos explicado anteriormente lo "nuevo" de la operación de "reforma" del Régimen iniciada con las Cortes del 15 de Junio era la participación institucional de las direcciones obreras en las tareas de defensa de la Monarquía. Sin embargo, el objetivo por el que se articulaba esta participación seguía siendo el mismo que el de todas las anteriores operaciones "reformistas...: mantener en sustancia el mismo aparato de Estado franquista aglutinado en torno a la Monarquía y el Ejército del 18 de julio.



"... el mismo aparato franquista..."

Pero esta operación de defensa del aparato franquista frente al acoso de la movilización de masas, cerraba todas las vías de integración de la organización obrera independiente, porque buscaba una y otra vez hacerla retorcer, por cuanto el sostenimiento del aparato franquista es incompatible con el avance de la organización obrera.

Las convulsiones de todo el proceso de "reforma" corresponden en definitiva a la contradicción establecida por la pervivencia de ese aparato gracias al apoyo de las organizaciones obreras cuya imposición y creciente realidad resulta incompatible con él.

La colaboración de los partidos obreros en la firma y aplicación del Pacto de la Moncloa y en el alumbramiento de la Constitución, así como la imposición de los comités de empresa, no bastaron para dislocar la correlación de fuerzas que las masas impusieron en las movilizaciones de principios del 77 y frente a las que se levantaron las Cortes del 15 de junio.



Julio de 1978. San Fermín..Huelga General en Euskadi por el asesinato del cda. Germán (LKI)

Las movilizaciones desarrolladas tras el 1 de Mayo del 78 significaron el fracaso de Suárez en sus intentos de derrotar seriamente al movimiento obrero. La huelga general de Euskadi en julio de ese año lo hizo más evidente al tiempo que colocaba la cuestión nacional vasca en primer término. Esto hizo entrar en crisis a toda la política del Gobierno y al Gobierno mismo, y, más allá, al conjunto del aparato del Estado.

En esta situación reaparecía en el juego político la dialéctica "reforma"-"ruptura". En efecto: la mayoría de la burguesía y el aparato coincidieron una vez más en el objetivo de asegurar la integridad del Estado y de los mecanismos de dominación franquistas negándose rotundamente a realizar las concesiones que la relación de fuerzas y el mantenimiento del consenso exigían. Otro sector de la burguesía pugnaba por enfrentar la crisis profundizando aún más la política de consenso. Y en esa situación eso significaba preparar las condiciones para una incorporación del PSOE al Gobierno, en coalición con la UCD, lo que implicaba abordar algunas modificaciones en el aparato y los mecanismos de dominación franquistas, y sobre todo amenazaba con provocar una irrupción de las masas que desbordase todos los planes. Para disminuir el impacto sobre el aparato y las masas de esta opción, el PCE pretendía realizarla simplemente con elecciones municipales y sobre la base de las mismas Cortes del 15 de junio, dejando al PSOE con escaso peso en la coalición. El PSOE no podía aceptar estas condiciones de convidado de piedra en un gobierno que seguiría siendo de UCD y sin posibilidad de una mayor intervención institucional. Quería la disolución de las Cortes y nuevas elecciones. Pero esto aumentaba el peligro propiciar mediante la intervención de las masas y como subproducto de su movilización un proceso de dislocamiento de todo el aparato de Estado.

El aparato de Estado y en especial el Ejército no estaban dispuestos a aceptar nuevas agresiones a su integridad. Con las asesinas provocaciones de Pamplona, en julio de este año, comenzaba a tomar cuerpo una operación de gran alcance destinada a cerrar el paso a cualquier fuga hacia la "ruptura" del régimen.

Nuestro partido fue el único que denunció públicamente e intervino políticamente frente a la operación golpista en marcha. Sin embargo no es menos cierto que cometimos un grave error al identificar la existencia de una operación, cuyas causas políticas se comprobaron como totalmente correctas, con la realización, hasta sus últimas consecuencias, de la misma. Nuevamente incurrimos en un error similar a los cometidos por el III Congreso y por la Fracción Trotskista y que antes hemos analizado. Subvalorábamos las consecuencias que la correlación de fuerzas impuesta por el movimiento de masas tenía sobre la crisis en la que se debatía la burguesía. Sobrevvalorábamos la capacidad de cohesión política de los franquistas y los burgueses en torno a un plan político de gobierno "fuerte".

En efecto, una resolución del CC de la LC de julio de

"La única salida: una intervención directa del Ejército". "(.../...) La respuesta de masas a las provocaciones político-fascistas de los sectores más exasperados del aparato franquista ha hecho estallar todas las contradicciones acumuladas".

"(.../...) El momento crítico a que ha llegado la crisis del aparato de Estado franquista ha forzado al Ejército a decidirse a intervenir directamente para contener su proceso de dislocación, que tras la huelga general de Euskadi ha llegado al límite. La opción golpista ya está firmemente en marcha".

"(.../...) No obstante importantes sectores de la burguesía ven con terror esta intervención del Ejército, porque no creen posible hacer retroceder a las masas por este camino..."

"(.../...) Estos sectores están privados de iniciativa política por el momento. Aceptan las medidas del Ejército para defender la unidad del Estado y la Monarquía, pero esperan encontrar espacio político para una nueva alternativa de recambio, siguiendo los consejos del PSOE, que mantiene la propuesta de elecciones generales tras el Referendum, estando incluso dispuesto a formar gobierno antes, si fuese necesario."

"Para el imperialismo, la estabilidad de la Monarquía franquista juega un papel trascendental por las repercusiones que su derrocamiento tendría en Europa. Hasta ahora, los principales dirigentes imperialistas habían apostado por estirar al máximo el juego de UCD (...) Una intervención militar en el Estado español supone un revés a esa política, pero difícilmente pueden levantar una alternativa política distinta ante la crisis del aparato de Estado."

"(.../...) La burocracia del Kremlin, aún descontenta con la Monarquía franquista por el pago ingrato (viaje a China del Rey) a su tradicional apoyo, está interesada en la estabilidad de la península ibérica. Por eso tampoco vería con malos ojos la intervención militar, siempre que comportase garantías sobre la no entrada de España en la OTAN."

"(.../...) La necesidad de articular la intervención del Ejército en torno a una alternativa política es el principal problema para los generales..."

"(.../...) Ni la presente relación de fuerzas, en el plano estatal e internacional, ni la política imperialista permiten al Ejército ensayar un golpe frontal contra el movimiento obrero, de corte fascista. Necesitan algún tipo de apoyo de las organizaciones obreras, que sería imposible de esa forma".

"(.../...) Esto nos conduce a las características de la intervención militar. Van a tratar de que sea lo más orgánica posible, haciéndola aparecer como un cambio de

malmente respetuoso de la Constitución, aunque es probable que se vean obligados a disolver las Cortes provisionalmente hasta que existan las condiciones para unas nuevas elecciones favorables a los franquistas."

"(.../...) Las contradicciones de esta opción van a ser brutales. Sobre todo porque va a precipitar un enfrentamiento frontal con el movimiento de masas de incierto resultado para la burguesía.... La división de la burguesía y el debilitamiento del aparato de Estado franquista es mayor que nunca. La falta de un proyecto político en torno al que la burguesía y el aparato franquista puedan apiñarse expresan la fragilidad de ese paso."

"(.../...) La colaboración de los partidos obreros va a resultar más difícil".

Sin embargo, el aparato, en sus esfuerzos por ver como imponer su solución, experimentó un profundo proceso de dislocación interna, lo que se expresó claramente en los acontecimientos militares de Cartagena, la "Operación Galaxia", y el entierro del general Ortín. De hecho, el mantenimiento de la movilización obrera y de la organización, la lucha de Euskadi como punta de lanza, impidieron a los franquistas cohesionarse y cohesionar a la burguesía en torno a un proyecto político concreto de gobierno "fuerte".

Por otra parte, el rechazo de Euskadi a la Constitución y la imposibilidad de conseguir un acuerdo en el Pacto Social, al tiempo que hacían aparecer como más contraproducente aún la imposición directa de un Gobierno por los poderes "fácticos", expresaron de manera irreversible el fracaso del juego del consenso tal y como estaba establecido. La disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones se daban, pues, en el momento de máxima crisis política de la burguesía, de mayor división, y en una situación marcada por el vencimiento de miles de convenios —sin pacto— y el agravamiento al máximo del problema de Euskadi.

Las elecciones permitían a la burguesía concretar políticamente sus opciones, y la forzaban a un reagrupamiento para tratar de imponerlas. Su objetivo de preservar el aparato franquista exigía, o bien una remodelación global de sus equipos políticos (levantar un nuevo agrupamiento CD y desde aquí atar y modificar a UCD), o bien limitarse a aprovechar la ocasión para atar y mediatizar más fuertemente ese flan ucedista. Pero al mismo tiempo, las elecciones eran un fuerte riesgo que la burguesía no había podido evitar, por el margen que daban a la intervención de las masas en esa situación de convenios y de radicalización de las mismas en Euskadi.

En esas circunstancias, el movimiento obrero se enfrentaba a un reto de gran envergadura: unir y desarrollar sus luchas, organizando la huelga general frente a los toques del gobierno, y por unos convenios justos; movilizarse en solidaridad con Euskadi y ganar la mayoría en las elecciones para imponer con todo ello un gobierno de sus partidos y sindicatos sin ningún ministro burgués.

Esto era posible tras las importantes movilizaciones que precedieron a las elecciones y que tuvieron como consecuencia la disolución de las Cortes del 15 de junio. Estas Cortes eran un mecanismo básico de la Reforma. Su disolución fue una victoria del movimiento de masas. Expresaba de hecho el fracaso de la política de Reforma de la Monarquía franquista. También el de una política de consenso que basándose en ellas permitió a los dirigentes del PSOE y del PCE sostener a un gobierno de franquistas, manteniéndose prácticamente intacto el aparato franquista de Estado.

La mayoría obrera en las Cortes no garantizaba por sí misma el desmantelamiento del aparato franquista, pero sí introducía una contradicción insalvable. Y sobre todo jugaba un pa-

per importante en la determinación política del proletariado, daría alas a su movilización, a la confianza de la clase en sus fuerzas. Lanzadas las masas por ese camino, cualquier intento de promover un nuevo gobierno franquista encontraría una respuesta mucho más activa. Una mayoría obrera en las Cortes hubiera abierto el camino hacía la ruptura como subproducto de las masas en lucha.

La LIGA COMUNISTA asumió el reto que ello significaba lanzando una campaña por la unidad obrera para la lucha por los convenios, contra la represión, en solidaridad con Euskadi, etc., y por la mayoría obrera en las elecciones con el objetivo de acabar con la Constitución y la Monarquía, por un gobierno del PSOE y del PCE sin ministros burgueses.

Si bien las fuerzas franquistas experimentaron en las elecciones de marzo un retroceso en relación al 15 de junio de 1977 —lo que constituyó una pequeña expresión de los profundos cambios sociales operados en estos años— las masas no consiguieron los objetivos propuestos.

Nuestro partido situó correctamente las causas de esto: la "victoria" de UCD no obedeció a un avance de las fuerzas franquistas. La responsabilidad estuvo en la política de división desarrollada por el PSOE y el PCE.

En efecto. Lo que se manifestó en primer término en las elecciones generales fue la profunda división en las filas obreras. De hecho, el proletariado se dividió en cuatro grandes bloques: Un primero que votó al PSOE. Un segundo bloque que se abstuvo. Otro que votó al PCE, y finalmente un gran número de trabajadores que votaron a organizaciones y coaliciones nacionalistas, principalmente a Herri Batasuna.

Centros obreros de gran tradición de lucha como Barcelona, Guipuzcoa o Cádiz dieron los porcentajes más elevados de abstención. Por otra parte, el voto nacionalista, especialmente en Euskadi, arrastró a amplios sectores obreros de esa nacionalidad.

De ello se desprende claramente que grandes sectores del proletariado que se movilizaban masivamente por sus convenios, justo antes de las elecciones o que, como en el caso de Euskadi, llevan una prolongada lucha por la soberanía y contra la represión, y que en las elecciones del 15 de junio de 1977 votaron por los partidos obreros, el 1 de marzo de 1979 no lo hacen.

La desastrosa política llevada por el PSOE y el PCE en los convenios y en relación con Euskadi, y más en general la política de consenso con la UCD, fue la causa fundamental del fracaso sufrido en las elecciones, de la división manifestada.

En efecto, desde el momento en que se anunciaron las elecciones generales, el PSOE y el PCE se lanzaron a desarrollar un esfuerzo divisor sin precedentes. La crisis política de la burguesía, el peligro de la irrupción revolucionaria de las masas y un dislocamiento institucional de la burguesía, así lo exigían. Tenían que impedir la unificación de las luchas de convenios y la lucha de Euskadi, así como un triunfo obrero aplastante en las elecciones. Su objetivo no era otro que proteger la retirada ordenada de la burguesía hacía una línea de defensa parcialmente nueva definida por el gobierno de coalición: ayuntamientos, autonomías y pasos en el sindicalismo de participación (con el pacto social como perspectiva central), manteniendo lo más posible del aparato de Estado y las bases fundamentales de la Reforma del 15 de junio, expresadas en la Constitución.

Este apoyo de PSOE y PCE a la Monarquía mediante una política de Gobierno de Coalición, se centró en primer lugar en los convenios, frente a la movilización de millones de trabajadores, la más masiva desde la guerra civil. PSOE y PCE hubieran querido estos convenios tras un Pacto Social y sin mez-

El pueblo vasco rechazó mayoritariamente una Constitución española y antiobrera

DIA
de la
CONSTITUCION

EL FUTURO DE ESPAÑA ESTA EN TUS MANOS.



Como en toda política de pacto social, la otra cara de subordinación a la política burguesa y sus instituciones es desorganización obrera. El esfuerzo desorganizador tenía que ser más intenso por no haber firma, y porque en un momento de crisis política abierta la lucha masiva por los convenios podía encontrar con mayor facilidad el camino de la huelga general revolucionaria. Para lograrlo necesitaban también desorganizar la acción, cortar la unificación y generalización de las luchas. Porque incluso la lucha que parte de reivindicaciones mínimas y recortadas, se transforma en lucha abiertamente política en cuanto se transforma en huelga general.

Nunca desde el primer semestre de 1977 los trabajadores pugnaron con tanto ahínco por la HUELGA GENERAL como en esos convenios. Fue el grueso de la clase la que trató en los hechos de abrirse camino a la huelga general con sus piquetes masivos de extensión, su obstinación en ir a la huelga total indefinida, sus esfuerzos por unificar la acción de los distintos sectores, su ocupación de las calles. Este potente movimiento articulado inicialmente en torno a limitadísimos objetivos económicos, recortados por las direcciones hasta el extremo, de ningún modo puede entenderse al margen de la crisis de la Reforma del 15 de junio.

clar la cuestión con unas elecciones. Eran una tremenda amenaza "desestabilizadora" en un momento de crisis política abierta y sin la mordaza del Pacto Social. El decreto-ley de topes, transformaba la movilización por los convenios en una lucha contra el gobierno y contra todo lo que él mismo representaba: la Reforma del 15 de junio.

Las direcciones no pudieron evitar que los convenios se lanzaran contra un decreto del gobierno, como batalla claramente política. Pero trataron de convertirlos en una lucha por el programa con el que ellos fueron a las negociaciones del Pacto Social, y que era parte de un proyecto político más general de gobierno, respetuoso al fin y al cabo con la Monarquía y la Constitución. Ni siquiera lanzaron la batalla como lucha contra el gobierno, porque no querían enfrentar a la clase con la UCD, sino subordinarla a ésta. Se trataba pues de una plataforma "económica" de desorganización, que no cuestionaba el tinglado franquista: topes del 16 por ciento, aumentos proporcionales, no reducción de horas, aumentos de ritmos, puerta abierta a la reducción de plantillas, etc.

Pero esto no bastaba. Subordinar la clase y sus organizaciones a las exigencias de la burguesía exige subordinar los sindicatos y los trabajadores a las instituciones burguesas, al aparato franquista y a la empresa. Por ello, el PSOE y el PCE se esforzaron en asegurar la subordinación a los laudos, arbitrajes, mecanismos legales sobre convenios, y en particular, a los comités de empresa.

Fue de hecho un Pacto Social sin firma, en que se partía de la plataforma de las burocracias para el frustrado Pacto Social, y se aterrizaba en admitir la plataforma de la patronal y el gobierno franquista para ese mismo frustrado Pacto Social O, en el mejor de los casos, a medio camino.

Es decir: la política general de gobierno de coalición con los franquistas se manifestó en los hechos como la defensa de

Las movilizaciones por los convenios fueron la explosión de la presión de la clase que hizo fracasar el intento de Pacto Social dentro del marco de la Reforma. Y este fracaso fue un elemento fundamental de su hundimiento.

Frente a ese potente impulso de la clase hacia la huelga general, stalinistas y socialdemócratas tuvieron que echar mano de todo el arsenal de recursos para fragmentar y desgastar la acción obrera que han puesto a punto las burocracias sindicales de Europa, y que se empezaron a experimentar en los convenios del año precedente: huelgas intermitentes, pero limitados...

Cerrar el paso así a las reivindicaciones y a las formas de acción proletarias sólo podía intentarse apoyándose en la organización que las direcciones stalinista y socialdemócrata crearon en el año y medio anterior (liquidación de comité elegidos, supresión de la soberanía de las asambleas, liquidación del papel de las secciones sindicales, burocratización de los sindicatos). Pero incluso esto era insuficiente. Las experiencias que se dieron en los convenios de 1978, de organización de la lucha desde algunos sindicatos, de relación entre sindicatos y asambleas, habían de ser extirpadas. Y ello implicaba la anulación de los mecanismos normales de centralización de cada sindicato local —plenos, coordinadoras— e incluso secciones. Incluso los propios comités de los sindicatos son anulados, para que actúen directamente las ejecutivas provinciales o estatales.

Las burocracias levantaron auténticos muros para que los sindicatos no pudieran convertirse, bajo la presión de la lucha, en centros organizadores de ésta. Evidentemente no lo consiguieron en todos los casos, pero en estos convenios se dieron pasos muy importantes en la desorganización de los sindicatos. Mientras, las asambleas eran igualmente marginadas para firmar a sus espaldas incluso convenios de empresa. Y, por supuesto, toda centralización zonal mediante comité de huelga sindicales o asambleas, debía ser abortada.

No se podía combatir la huelga general sin cargarse sus centros organizadores.

No se podía propiciar la formación de un gobierno de coalición para proteger el aparato franquista, sin atentar contra la organización obrera.

Esta política de desorganización de la acción de masas por los convenios se completó con la complicidad con la campaña represiva del Gobierno y la defensa de los "Estatutos de Autonomía" de la Constitución. Mientras, el Gobierno, con la colaboración de Giscard-Barre, hacía coincidir la convocatoria de elecciones con una nueva escalada represiva contra Euskadi, el PSOE y el PCE, aún discrepando con alguna de sus medidas, mantuvieron claramente su apoyo al Gobierno.

Junto a esto, el eje "antiterrorista" constituyó un elemento básico de su campaña, con el claro objetivo de aislar a Euskadi y crear las condiciones para su aplastamiento.

Como era de esperar este apoyo a la represión gubernamental abrió las puertas a medidas represivas mas generales contra el conjunto del movimiento obrero, que de otra forma no hubieran podido ponerse en práctica. Así, el decreto-ley de Seguridad Ciudadana contra los piquetes constituyó una clara agresión contra los derechos sindicales y contra los sindicatos.

La negativa de las burocracias sindicales a combinar la lucha contra la represión con la lucha por los convenios, incluso cuando el Gobierno las relacionaba atacando a los sindicatos, en alejarlos de los intereses y luchas de los trabajadores. Sobre todo en Euskadi.

Por otra parte, la bandera contrarrevolucionaria de los "estatutos" levantada por el PCE y el PSOE, se vió acompañada de un paso práctico en la imposición del centralismo monárquico a Euskadi: las Juntas Generales. PSOE y PCE, junto con el PNV, aceptaron el montaje por Martín Villa de esos órganos falsamente representativos de las regiones históricas de Euskadi.

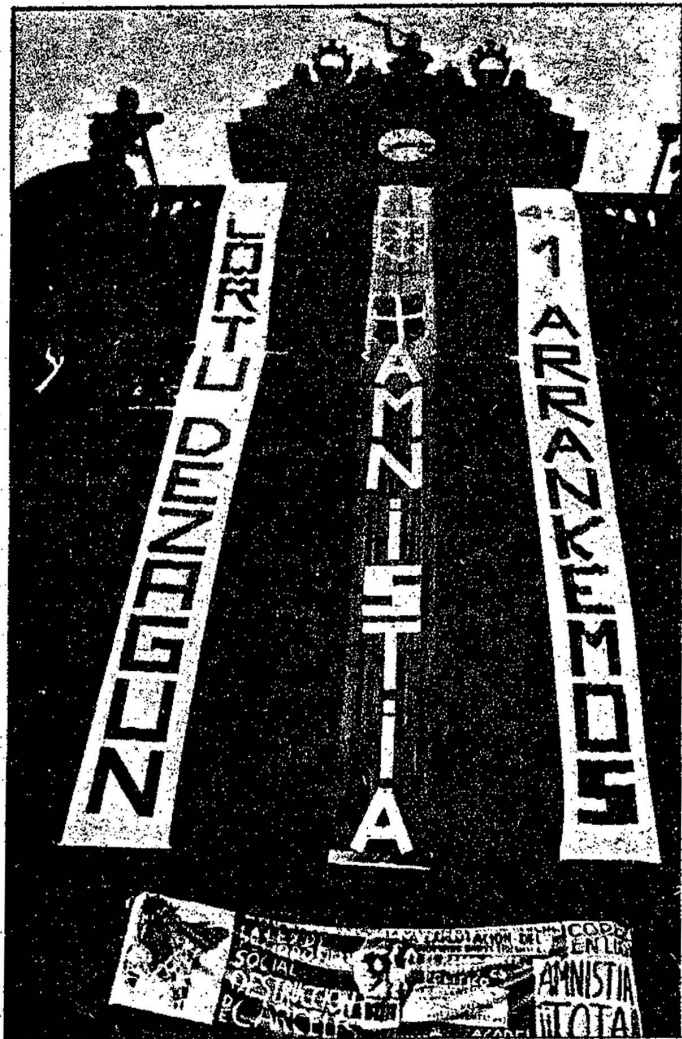
La campaña de "municipales", que en Euskadi fue también de elecciones a esas Juntas (y al Parlamento Foral en Navarra), se convirtió así en una campaña por el Consejo Vasco, la pre-autonomía y el Estatuto, no solo como programa político del PSOE y el PCE, sino como puesta en pie de un mecanismo institucional concreto que tiene ese significado.

Con las elecciones municipales, PSOE y PCE pretendieron proteger al aparato de Estado (a costa de inevitables reformas del mismo a nivel municipal), haciendo de los elegidos una cobertura del mantenimiento del aparato centralista y de los apéndices locales que forman parte de ese aparato. Y ello con unos objetivos concretos: incorporar los ayuntamientos a una eficaz política de austeridad capitalista que es contraria a la lucha contra el paro, las necesidades de los trabajadores en el terreno de los servicios sociales...; reforzar el papel del aparato municipal en la represión; y para ello promover la participación de los sindicatos y trabajadores en la gestión del aparato estatal a ese nivel municipal.

En suma, fue la política de gobierno de coalición que buscan PCE y PSOE la que se puso en práctica, mas intensamente que nunca, desde el momento en que se convocaron las elecciones, para contener la crisis del régimen. Era inevitable la afirmación del marco "institucional" monárquico-franquista en la que se apoya la política del pretendido gobierno de coalición. Y de ahí se ha derivado todo el programa del mismo: el paro, los toques, desmantelamiento de servicios, represión, los estatutos... el pacto social y las leyes antisindicales, los mecanismos de participación y de desorganización.

Solo ahogando la lucha obrera, desorganizando las huelgas y sindicatos, podían aspirar a los objetivos del gobierno de coalición. Pero esto, como se ha demostrado, además de ser condición para mantener el régimen, sirvió de paso para combatir contra la mayoría obrera en las mismas elecciones.

III.- LA CRISIS DE LA MONARQUIA Y LA LUCHA DE LAS NACIONALIDADES



La cuestión nacional, además de haber sido fuente de constantes problemas para la Dictadura y también para la Monarquía franquista, es hoy punto en el que se anudan crudamente las graves contradicciones políticas del régimen. Euskadi es hoy el mayor problema del Gobierno y de la propia Monarquía y un obstáculo de gran envergadura para establecer una política de consenso con los partidos obreros y nacionalistas.

Es necesario remontarse a la historia de la Reforma para comprender el alcance de la situación hoy planteada.

Las movilizaciones de Euskadi de mayo del 77 determinaron, junto a las luchas de los meses anteriores, el desarrollo hasta el límite de la crisis de la Monarquía y de las sucesivas versiones del proyecto de Reforma Monárquica de la Dictadura puestas en práctica hasta entonces. En torno a la exigencia de amnistía total que rápidamente enlazó con la lucha de masas por la disolución de los cuerpos represivos y el derrocamiento de la Monarquía, se desarrolló un proceso de generalización y maduración de formas organizativas de tipo soviético unidas a la extensión y masificación de asambleas de fábrica, barrio y pueblo en las que se apoyó la puesta en práctica de métodos de acción directa de masas frente a la actuación de las FOP. Evidentemente esta huelga general era la culminación de un proceso de acción y organización de masas de alcance estatal y que tenía como antecedentes más inmediatos los movimientos campesinos de marzo y las acciones de masas de enero del mismo año.

Como lo dijimos entonces, estos movimientos formaban parte de un proceso más general que se desarrollaba en toda Europa. Sus rasgos fundamentales, comunes a cada expresión del proceso más general: la crisis política de los regímenes burgueses del suroeste del continente como consecuencia de un ascenso de masas en sus objetivos, en su organización y en su acción, destacando como elemento característico el desarrollo y generalización de formas orgánicas de tipo soviético elementales (comités de fábrica, etc.) sobre los que maduró un proceso de reorganización masiva del proletariado en torno a sus organizaciones tradicionales, sindicales y políticas, especialmente en torno a la socialdemocracia.

El estado español no fué una excepción, sino que reflejaba, probablemente a un nivel superior, este conjunto de fenómenos más generales.

La maniobra reformista del 15 de junio realizada con la complicidad de los partidos obreros estalinista y reformista, así como con la del PNV, entre otros, expresó aunque de manera deformada las graves contradicciones sobre las que se asentaba. Masivamente, Euskadi expresó su voluntad de lucha a través de un voto mayoritario al PSOE, a pesar del chovinismo centralista nunca abandonado por este partido.

Con la huelga general de julio del 78 Euskadi demostró que no había sido derrotada, a pesar de los retrocesos sufridos en la organización de las masas mediante la aplicación del decreto de comités del gobierno y más en general por la traidora política de las direcciones a las que había votado para que culminaran la política de destrucción de la Monarquía. En efecto, si la huelga de mayo del 77 dió la puntilla a todas las versiones reformistas que pretenden continuar con la Monarquía franquista, tal cual, la huelga del 78 junto con el rechazo masivo a la Constitución el 6 de Diciembre del mismo año, dieron al traste con la última versión de la Reforma basada en el consenso con los partidos obreros.

Las Cortes del 15 de junio se levantaron para derrotar a Euskadi y al conjunto del movimiento obrero que amenazaba con barrer a la Monarquía. Con las movilizaciones del 1 de mayo y siguientes, Euskadi a la cabeza de la lucha de las masas de todo el Estado, barrieron a las Cortes del 15 de junio, y ello a pesar haber sufrido un serio retroceso en su organización. La disolución de las Cortes del 15 de junio es desde este punto de vista una victoria fundamental que sólo pertenece a las masas de todo el Estado y de ninguna manera a la política traidora de los aparatos.

Siendo Euskadi el punto donde de una manera más elevada se han desarrollado los procesos verificados en toda Europa en el actual ascenso revolucionario, es probablemente también el sitio donde se han operado las modificaciones más profundas en el terreno de las masas y sus direcciones..



Así como en Catalunya las elecciones del 1 de marzo y sobre todo las municipales han confirmado la hegemonía del PSC-PSOE, en línea de continuidad con los procesos más generales advertidos en el conjunto del estado en la apertura de la crisis prerevolucionaria, en Euskadi el proceso es claramente más avanzado. El tránsito político hacia una situación de tipo revolucionario se está desarrollando sobre la base de una profunda modificación de las relaciones entre las masas vascas y las direcciones que en los primeros momentos de este proceso ordenaron la organización política del proletariado y las masas vascas.

La política promonárquica y chovinista de la socialdemocracia ha metido al PSOE -y a otro nivel a la UGT- en una dinámica abierta en Euskadi. Los obreros vascos están experimentando un proceso de ruptura orgánica con el PSOE y su reorganización, todavía muy retrasada como lo evidencian los grandes problemas orgánicos manifestados en las huelgas de julio del año pasado y en la más reciente de junio de este año, se realiza en torno a ejes políticos de ruptura abierta con la Monarquía y sus agentes en Euskadi. Los nuevos procesos de reorganización de

masas a través de las asambleas y organismos de tipo soviético, todavía se encuentran muy retrasados, a pesar de desarrollos incipientes manifestados en las últimas huelgas del metal en Navarra y posteriormente en Vizcaya, así como en los desarrollos que en pueblos como Rentería y Hernani, sobre todo, se han visto con ocasión de las últimas movilizaciones, con la puesta en pie de comités de huelga de partidos y sindicatos apoyados en la asamblea del pueblo.

El desarrollo de Herri Batasuna por un lado y la influencia hegemónica que aún mantiene el PNV, por otro, son expresiones, contradictorias, de este fenómeno.

Lo hemos dicho en multitud de ocasiones: la IV Internacional tiene planteado un reto de enorme trascendencia, no sólo en Euskadi sino en el conjunto del estado, en torno a este problema

A) EL ESTATUTO DE LA MONCLOA Y EL PAPEL DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO

Tras la quema sufrida por el PSOE en toda la etapa que va del 15 de junio de 77 al 6 de diciembre del 78, prolongándose todavía hoy, el PNV es consciente de que sólo su actuación profunda en el problema de Euskadi puede dejar entrever la posibilidad de frenar el curso acelerado y profundo hacia la apertura de una situación revolucionaria.

No descubriríamos nada nuevo si decimos que el PNV mantiene estrechos vinculos sociales y políticos con ciertos sectores del gran capital español. El PNV es el único partido burgués de masas, populista, que hay hoy en el Estado español. Y es hoy el genuino representante de un sector de la burguesía española, la vasca, así como de la burguesía media vasca, fundamentalmente la de la máquina herramienta y la industria auxiliar metalúrgica. Así mismo tiene una base de apoyo masiva localizada fundamentalmente en la pequeña burguesía, las clases medias urbanas y el campesinado, y en mucho menor medida entre el proletariado.

Esta heterogeneidad social, en su composición y base de apoyo, no impide que sea un partido burgués y que aplique una política de acuerdo con los intereses económicos y políticos del gran capital, mejor dicho de un sector específico del gran capital. Lo que en las actuales circunstancias sociales y políticas es fuente de gravísimos problemas para el PNV.

El predominio político en el PNV corresponde totalmente a los sectores directamente vinculados al gran capital, entre ellos a los que dominan las Cámaras de Comercio de Euskadi y en definitiva, a Iberduero, Petronor, la industria de Aceros especiales, la industria electrónica y la metalúrgica de alta precisión, etc. directamente vinculados con el Banco de Vizcaya y a otro nivel con el Banco de Bilbao.

Decir que el PNV está dominado por los capitalistas de Neguri es verdad, pero a medias. Pues no ayudaría a comprender las diferencias políticas entre el PNV y otros agrupamientos políticos del gran capital español como la UCD o CD.

El PNV comparte plenamente el objetivo del gran capital español que es el de mantener la Monarquía y las bases fundamentales del aparato de Estado, siempre y cuando esto no le impida hacer frente a la grave crisis del capitalismo vasco y a la maduración de la crisis prerevolucionaria en Euskadi.

Con el proyecto de Estatuto, el PNV pretende dotarse de los instrumentos políticos que le permitan hacer frente a esta situación, siendo respetuosa con la Constitución y la Monarquía.

Hacer frente a la crisis económica mediante una política encaminada a desarrollar la industria energética nuclear en Euskadi, la petroquímica, revitalización del capital privado en la siderúrgica, a costa de reestructuraciones que permitan una mayor productividad y aumento de las tasas de beneficio, en la industria de alto valor añadido, etc. abriendo mercados internacionales, no sólo en la CEE sino también en América Latina, especialmente Venezuela.

Una política económica de gran alcance cuya aplicación comportaría tremendos costes para la clase obrera, especialmente en el terreno de un aumento del paro, y también para determinados sectores de la pequeña burguesía y la pequeña y mediana industria, es decir, la burguesía media.

Un plan de estas características requiere lanzar, paralelamente, una ofensiva política, contra el proletariado vasco y sus organizaciones, de gran envergadura. Y para ello necesita instrumentos políticos adecuados.

El PNV, consciente de la profundidad de la crisis social y política de Euskadi, lanzó en un principio el proyecto de Estatuto cocinado en Gernika con el apoyo, más o menos matizado, del PSOE, Euskadiko Ezkerra y PCE.

En su versión original, este proyecto comportaba una modificación sustancial de los mecanismos institucionales y políticos de dominación del Régimen sobre las nacionalidades. Trabajaba con ello de levantar un gobierno y un parlamento vasco con poderes políticos reales para hacer frente a la crisis prerrevolucionaria que conoce en Euskadi su punto más avanzado. La experiencia "preautonómica" era sobradamente ilustrativa para predecir un fracaso estratégico de cualquier proyecto político que ignorase la necesidad de modificar los mecanismos del Régimen y del gobierno de la UCD en este terreno. Así, este proyecto, aunque respetuosos con la Constitución y la Monarquía, introducía, sin embargo, una grave contradicción en el sistema institucional. De hecho, suponía levantar un sistema parlamentario autónomo, políticamente controlado por el PNV, en el marco de un Régimen profundamente centralista y basado en mecanismos franquistas de dominación.

Ante esto, ciertos sectores del propio Gobierno —los cristiano-franquistas—, Coalición Democrática e importantes sectores del Estado localizados fundamentalmente en el Ejército y las FOP, así como otros del gran capital, lanzaron una campaña de presión sobre el Gobierno para que éste rechazara el Estatuto del PNV o lo modificara sustancialmente. Además del golpe político que ese Estatuto suponía para estos sectores y la distorsión institucional que introducía, tales concesiones no les ofrecían ninguna garantía de que sirvieran para derrotar políticamente a las masas vascas y cortar el proceso de maduración de la crisis prerrevolucionaria.

La oleada terrorista que se desató en esos días, así como las provocaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Tudela, Pamplona y Rentería, las amenazas y bravatas de Fraga y Aizpún en las Cortes, etc. iban en ese sentido, así como algunas actuaciones del Gobierno, inspiradas en esos sectores, como fueron el decreto de incompatibilidad para Garaikoetxea y la prohibición del acto constitutivo de Euskal Herriko Batzarre Nazionala.

Una vez más, el Gobierno se enfrentaba a un dilema decisivo. Todas las contradicciones del proceso de Reforma volvían nuevamente a ponerse encima de la mesa, condicionando toda la situación política.

Si la UCD aceptaba los presupuestos de los sectores más recalcitrantes del aparato de Estado, hubiera significado una declaración de guerra contra el PNV y, más allá, contra Euskadi y el resto. Sus consecuencias políticas hubieran sido tremendas. No sólo hubiera quedado cuestionada cualquier posibilidad de acuerdo con los partidos obreros, sino que más allá de esto hubiera provocado la ruptura del PNV con el Régimen. Pues no hay que olvidar que a pesar de sus vínculos con un sector del gran capital, el PNV, como partido burgués vasco, tiene una misión política que cubrir en Euskadi, como es impedir la apertura de una situación revolucionaria en aquella nacionalidad, para lo que necesita instrumentos políticos adecuados, aunque entren en contradicción con la estructura del Régimen.

Por otra parte, un enfrentamiento del Gobierno con el PNV no hubiera quedado circunscrito a Euskadi. Se extendería al PSOE-PSC, PSUC y CiU.

Todo ello hubiese puesto a la orden del día la perspectiva de un choque frontal del movimiento de masas con la Monarquía, dejando en entredicho cualquier proyecto de colaboración de los partidos obreros y nacionalistas para salvar lo fundamental de la Constitución y la institución monárquica.

Pero por otro lado, entrar en el camino de la aceptación de los estatutos, tal cual fueron presentados por el PNV y los partidos catalanes, significaba para el Gobierno un nuevo choque con el aparato de Estado. Y esta vez de una envergadura muy superior a los hasta ahora conocidos. Es verdad que en todo el proceso de apertura de la crisis prerrevolucionaria el Régimen ha tenido que aguantar serios golpes, no sólo políticos (imposición de partidos y sindicatos obreros, etc.) sino

también institucional. (Fundimiento de la UNS, victoria obrera en los grandes ayuntamientos) Pero estos estatutos suponían un factor de desequilibrio institucional de incalculables consecuencias, lo que a su vez extremaría la crisis en el seno del Ejército y el aparato policial.

Tras las elecciones generales últimas, afirmábamos lo siguiente:

"A pesar de la bancarrota política de la Reforma protagonizada por UCD, y a pesar de su propia crisis interna, el peligro de una mayoría obrera ha empujado al grueso de las fuerzas franquistas y burguesas a aglutinarse tras esa misma UCD, a costa de un tremendo fracaso de CD-AP".

"....Y es con esa política (de preservación del aparato franquista y de sus mecanismos de dominación, rechazando el flirté con el PSOE).... como la UCD se ha asegurado el apoyo del grueso del aparato de Estado...."

"....la campaña electoral de la UCD.... ha sido una campaña explícita contra el gobierno de coalición con el PSOE, e incluso, contra la política de consenso".

"....esto no quiere decir que la UCD se haya convertido en una nueva AP. Esto lo que indica es que en una situación en la que el peligro de dislocamiento institucional era más que evidente, la UCD la ha enfrentado optando momentaneamente por soluciones de autopreservación política del propio aparato de Estado, a costa del consenso con los partidos obreros".

(Informe Político del C. Ejecutivo de LC, abril de 1977)

Pero como también anunciamos entonces, esta línea no podía sostenerse ni un solo día. El Gobierno de la UCD era y es perfectamente consciente de la imposibilidad de dar ningún paso serio sin buscar sistemáticamente el acuerdo con los partidos nacionalistas y obreros ó como mínimo evitar una actitud abiertamente beligerante.

Con estos condicionantes abordaron el Gobierno y el PNV la negociación sobre el Estatuto vasco, negociación que determinó, a su vez, los resultados del Estatuto catalán.

¿Cuál ha sido el resultado de todo ello? ¿de qué instrumentos políticos se ha dotado el PNV para hacer frente a la situación en Euskadi?

A la vista del proyecto aprobado por la comisión constitucional y presentado a Referendum, podemos decir que el PNV se ha echado para atrás en los puntos fundamentales en litigio. Más que un "Estatuto de Gernika" lo que ha salido es un "Estatuto de la Moncloa".

En primer lugar es un Estatuto totalmente respetuosos con la Constitución, cuyo principal motivo es negar el ejercicio de la soberanía a Euskadi. La negativa al derecho de autodeterminación imprime carácter a todos y cada uno de sus apartados.

Esto se manifiesta especialmente en la negativa a reconocer la unidad de Euskadi como nación. Este estatuto pretende imponer la división: excinde Navarra del resto de regiones vascas, refuerza las fronteras con Euskadi Norte.

El Gobierno y el PNV han comprendido que atacar la unidad de Euskadi es decisivo para impedir el ejercicio de su soberanía. Por eso este Estatuto establece que la incorporación de Navarra seguirá un procedimiento determinado por "el Congreso y el Senado en sesión conjunta" siendo además necesaria "la posteriori aprobación mediante Ley Orgánica por las Cortes Generales".

No sólo esto. Cualquier convenio o acuerdo de cooperación que pretenda establecer el Gobierno Vasco con Navarra u otras comunidades autónomas, sólo podrá realizarse "con autorización de las Cortes Generales".

Este Estatuto niega la soberanía de Euskadi en materia de orden público. Supone una burla a las masas vascas que llevan muchos años luchando por la retirada y la disolución de los cuerpos represivos. No sólo esto. El PNV ha aceptado que sean drásticamente recortadas sus aspiraciones a una mínima autonomía en este terreno. Pues "en supuestos de especial urgencia y para cumplir las funciones que directamente les encomienda la Constitución, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrán intervenir bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, dando éste cuenta a las Cortes Generales". Además, "en los casos de declaración del estado de alarma, excepción o

sitio, todas las fuerzas policiales del País Vasco quedarán a las órdenes directas de la autoridad civil o militar que en su caso corresponda, de acuerdo con la legislación que regule estas materias”.

Este Estatuto niega el derecho de las masas vascas a decidir sobre la utilización de sus recursos económicos ó a establecer el sistema económico que crean conveniente. De acuerdo con la Constitución consagra el régimen de propiedad burguesa y la explotación capitalista. Además recortta seriamente las aspiraciones del PNV a una autonomía financiera. El régimen tributario deberá atender “a la estructura general impositiva del Estado”. El desarrollo económico y la planificación de la actividad económica del País Vasco se harán “de acuerdo con la ordenación general de la economía”. Es decir, el gobierno de Madrid delega en el Gobierno vasco un conjunto de competencias en el terreno económico, sobre todo en la aplicación del programa económico UCD-CEOE.

Todo el resto de competencias, Seguridad Social, Enseñanza, régimen judicial, etc. además de establecerse de acuerdo con la Constitución, estarán sometidas a la alta inspección del Estado o a las diversas leyes orgánicas que emanen de las Cortes de Madrid,

En definitiva, este Estatuto, lo mismo que el catalán, no rompe con la actual Constitución ni con los contenidos fundamentales de la política de la UCD, pues no hay que olvidar que todas sus competencias están condicionadas al desarrollo de las leyes orgánicas de la Constitución, tarea que corresponde a estas Cortes de mayoría UCD, a la inspección del Gobierno.

Pero no podemos ignorar un problema de gran importancia. El continuismo del Régimen, la defensa del aparato y los mecanismos de dominación franquista, no es sólo la Constitución de la que este Estatuto se reclama. Es la constitución patroneada por un gobierno de franquistas de UCD y, en su caso, AP, apoyados en ese mismo aparato de Estado.

El Estatuto vasco, y también el catalán, si bien se desenvuelven en el respeto a la Constitución, y en consecuencia representan una negativa rotunda a las aspiraciones de las nacionalizadas, representan la delegación de determinadas atribuciones políticas y económicas del Régimen a nuevos organismos que no va a ser controlados directamente por los grupos políticos franquistas. El predominio político del PNV en Euskadi, así como el de PSC, PSUC, CiU en Catalunya significa que ellos, y no UCD o AP, asumen importantes responsabilidades de Estado en sus respectivas nacionalidades. Esto, en sí mismo, representa un serio golpe al propio aparato de Estado del que UCD y AP son “carne y sangre”.

B) LA LUCHA DE MASAS CONTRA EL ESTATUTO

La lucha de Euskadi por su soberanía, no sólo se está planteando en choque abierto con la Monarquía, y en cierto modo con el proyecto del PNV, sino que ha incorporado un conjunto de exigencias que entran en abierta contradicción con el plan del PNV. Es decir, la lucha de Euskadi tiene cada vez más claramente un contenido de clase determinado y como decimos incorpora reivindicaciones obreras y populares claramente contradictorias con los intereses sociales del PNV.

Euskadi se ha dicho, es una espina clavada en el corazón de la Monarquía, y esto no es simplemente una frase bonita: la maduración de la crisis prerevolucionaria en el conjunto del Estado que amenaza con barrer a la Monarquía, tiene su punto más avanzado en Euskadi. Valorar por tanto el proceso que ahí se está viviendo es fundamental para trazar unas mínimas perspectivas del curso de la revolución en el Estado español.

Decíamos al principio que el dato determinante para valorar el momento de la crisis en Euskadi era la profunda modificación que se estaba operando en las relaciones entre las masas y las direcciones, modificación que todavía no había afectado de manera sustancial en las demás nacionalidades (Catalunya) ni en el conjunto del Estado.

Frente al estatuto de Gernika y el Consejo General Vasco, frente al PNV, el PSOE y el PCE, se está levantando un movimiento de masas políticamente dirigido (?) por la coalición He-



Arzálluz (PNV).

La burguesía “vasca” se esfuerza por salvar a la Monarquía y lanzar a los trabajadores a la miseria con un Estatuto antivasco y antiobrero.

En esta coalición coexisten agentes del gran capital vasco como ANV-ESB y representantes políticos de la pequeña burguesía y la burguesía media vasca exasperados por la crisis económica y política y la línea promonárquica del PNV.

Junto a ellos, ETA(militar) políticamente representada por los miembros del KAS, especialmente HASI, organizaciones pequeño-burguesas radicales muy permeables a la enorme presión de ciertos sectores del proletariado vasco, especialmente la juventud. Hoy por hoy, es ETA(militar), a través de HASI, sobre todo, quien mantiene la iniciativa política en Herri Batasuna. Su línea de actuación se ha basado en la plataforma de puntos mínimos del KAS que, como se sabe, incluye la exigencia de amnistía total, retirada de las FOP, legalización de los grupos políticos del KAS, reconocimiento de un estatuto de autonomía cuyo primer punto es el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Euskadi, etc., puntos mínimos que fueron establecidos como condición para una intervención “institucional” del KAS y que ETA(militar) hizo suyos para cualquier negociación con el Gobierno de Madrid, encaminada a una paralización de la lucha armada. Junto a estos puntos Herri Batasuna ha incorporado normalmente la exigencia de disolución de cuerpos represivos cuando ésta ha estado planteada en la acción de masas en las sucesivas huelgas generales, la paralización de las obras de Lemóniz y otras centrales nucleares en proyecto, etc..

Esta plataforma política no constituye en sí misma una ruptura global con la Monarquía y su Constitución, ni tampoco se ha caracterizado Herri Batasuna por alentar una línea en ruptura con los Comités del Decreto Suarez en las empresas y de defensa de la independencia de los sindicatos con respecto a los organismos de participación estatal. Tampoco ha llevado la iniciativa en el impulso de formas organizativas de tipo soviético a nivel de los pueblos, etc. aunque normalmente cuando las masas las han levantado en momentos de huelga general Herri Batasuna haya participado en ellas a través de sus comités de apoyo.

Sin embargo, a pesar de este conjunto de problemas evidentes en la plataforma y actuación política de Herri Batasuna o los grupos a ella adscritos, la línea mantenida ante el referendun Constitucional y sobre todo, ante el Estatuto de Gernika y el Consejo General Vasco, en relación a un conjunto de problemas políticos en los que destaca el de la soberanía, han permitido a esta coalición arrastrar a su órbita política no sólo a sectores masivos de la pequeña burguesía vasca, en ruptura con el PNV, sino también a ciertos sectores muy significativos del proletariado vasco -incluso de zonas de arraigada tradición socialista como Hernani, Rentería Trinchérpe-Pasajes, y en menor medida como en Eibar, margen izq. de Bilbao, etc. y particularmente al grueso de la juventud.

La intransigencia política de Herri Batasuna con respecto a cuestiones como la amnistía, la autodeterminación, etc., a pesar de las lógicas ambigüedades y limitaciones de esta coalición a la hora de plantear alternativas políticas claras a la lucha de las masas vascas en todos los terrenos, si bien le ha permitido erigirse por el momento como la alternativa de las masas vascas frente al



PNV, etc., no es menos cierto que difícilmente puede jugar el papel de nuevo eje de la reorganización del proletariado y las masas vascas.

Es verdad que la ruptura de crecientes sectores de la pequeña burguesía vasca -tanto rural como urbana- con el PNV no es simplemente un fenómeno coyuntural que vaya a cambiar el signo en esta fase política. El PNV que históricamente ha jugado el papel de aglutinante y organizador de la pequeña burguesía nacionalista, hoy, por las razones sociales y políticas descritas anteriormente, se ve obligado a desarrollar una política cada vez más contradictoria con los intereses de estos sectores enormemente radicalizados por la crisis social y política. Herri Batasuna es, hoy por hoy, un marco de reorganización política de esas capas sociales en ruptura con el PNV. La línea política y los métodos de ETA (militar) han calado profundamente en ellos de la misma manera que la política del PNV y del PSOE en esta situación les empujan a una creciente exasperación. De otro modo, no sería posible entender ni el auge de Herri Batasuna, ni el apoyo de masas con el que cuenta ETA, ni tampoco fenómenos políticos que en este contexto guardan un gran significado como es el fracaso de EIA.

Sin embargo, este problema no puede verse al margen del fenómeno más general dentro del cual guarda una importancia determinante la ruptura con el PSOE de los sectores más significativos del proletariado vasco. Evidentemente, este fenómeno no ha culminado, pero tampoco es simplemente una tendencia que en última instancia se vaya a manifestar en la desaparición del PSOE en Euskadi como partido de masas. Ya hoy, la desafección de núcleos masivos de la clase obrera vasca con el PSOE es un hecho material de enormes consecuencias políticas. Se puede decir que este es el dato político fundamental para definir la situación de la lucha de clases en Euskadi y para valorar el momento concreto en el tránsito hacia la apertura de una crisis de carácter revolucionario en Euskadi. Este es un fenómeno que en el terreno político, aún con sus particularidades, responde a procesos más generales comunes al conjunto del proletariado y las masas de todo el Estado, habiendo adquirido en el terreno de la organización expresiones distintas y claramente más avanzadas. Nos explicamos. Los ejes políticos en torno a los que se desarrollan estos procesos son comunes a aquellos en torno a los cuales el proletariado del resto del Estado pugna por avanzar en su acción y organización: las reivindicaciones elementales (salarios, paro, condiciones de trabajo), los derechos sindicales, las consignas antirrepresivas, la exigencia de soberanía para las nacionalidades, la lucha contra la Monarquía.

Ahora bien, en el caso del proletariado vasco a diferencia del resto del Estado, siendo la lucha por la soberanía de Euskadi la que sistematiza el conjunto de ejes, se plantea ya hoy, a nivel de la propia acción de masas, en abierta ruptura con la Constitución y la Monarquía y en cierto modo, con las alternativas autonomistas de los partidos mayoritarios, cosa que no sucede en el conjunto del Estado incluida Catalunya, donde la exigencia de soberanía a nivel de la acción de masas no se ha planteado por el momento en ruptura con la estafa del PSOE-PSC, PSUC, CiU.

Se puede plantear que siendo Euskadi la vanguardia de un proceso más general que está desarrollando el proletariado del conjunto del Estado, es lógico pensar que en un período más o menos corto de tiempo, pero en cualquier caso en esta fase polí-

tica, el proletariado catalán, el andaluz, madrileño, etc. experimentarán procesos similares no sólo en el terreno político, sino también en el terreno orgánico, especialmente, en lo que se refiere a una modificación sustancial de las relaciones de las masas y las direcciones. En definitiva, que la lucha por el derrocamiento de la Monarquía que sintetiza el conjunto de reivindicaciones sólo culminará sobre la base de una ruptura masiva del proletariado con sus actuales direcciones.

Esta conclusión sería claramente errónea. Pues aún siendo absolutamente cierto que el desarrollo en la conciencia política del proletariado, que se está realizando en todo el proceso de lucha contra la Monarquía, implicará la asunción por las masas de consignas políticas de acción en ruptura con los actuales planteamientos de sus direcciones, lo que tendrá consecuencias en el terreno orgánico aunque sea a niveles parciales, es impensable que una extensión de la lógica política que preside hoy la acción de las masas vascas al conjunto del Estado o a sus centros fundamentales -Cataluña, Andalucía, Madrid- no vaya a tener efectos decisivos en las relaciones políticas y orgánicas del PSOE y el PCE con la Monarquía franquista. Especialmente del primero. Y por tanto una modificación de las relaciones políticas de esos partidos con las masas que no necesariamente se va a manifestar en una desafección masiva del proletariado de esos partidos, fenómeno que sin embargo es característico de la situación en Euskadi.

Esta apreciación de la marcha general de los acontecimientos a escala de Estado es fundamental para trazar una perspectiva correcta del curso de la revolución en el Estado español y en definitiva para comprender fenómenos políticos de la máxima importancia como es la crisis del PSOE.

Como luego veremos, es en definitiva la desigualdad que hoy existe entre Euskadi y el resto, desigualdad impuesta por la política de las direcciones, la que permite a éstas mantener una política de apoyo a la Monarquía, en todos los terrenos, que en el caso del PCE se expresa en un apoyo abierto al Gobierno de Suarez, a pesar de la grave crisis política del régimen y la maduración en el caso de Euskadi de condiciones políticas para la apertura de una crisis revolucionaria.

De ahí también la importancia central que concedemos a la campaña en solidaridad con Euskadi.

Ahora bien, el hecho de que el proletariado vasco esté experimentando procesos de ruptura abierta con sus viejas direcciones y que se esté moviendo a un nivel en la órbita política de Herri Batasuna, no quiere decir que esta coalición constituya el nuevo eje de reorganización del proletariado vasco a nivel político. Herri Batasuna es una organización obrera ni pretende serlo. Y eso se manifiesta en sus relaciones políticas con el proletariado vas-

co, en sus vínculos orgánicos y en definitiva en su origen y programa.

Los problemas organizativos del proletariado y las masas vascas, a todos los niveles, son de vital importancia y en definitiva el condicionante básico para el tránsito de la situación prerevolucionaria que hoy atraviesa Euskadi a una situación abiertamente revolucionaria.

Cuando todavía no ha culminado el proceso de desgaste y destrucción de los comités de empresa del Gobierno, se advierten, de manera más clara y avanzada que en el resto del Estado, desarrollos todavía incipientes de formas organizativas de tipo soviético a nivel de zonas y pueblos -a partir de huelgas de ramo como fue el caso de la última huelga de metal en Navarra y Vizcaya- o en torno a las tareas de organización de la última huelga general como fué el caso antes citado de Hernani y Rentería.

Estos incipientes desarrollos orgánicos no se reflejan por el momento en una reorganización masiva del proletariado en sus sindicatos. Por el contrario, UGT y CC.OO atraviesan momentos de seria desorganización que actualmente se están profundizando. Desorganización que no es ajena a la que atraviesan el PSOE y el PCE, aunque evidentemente no es idéntica.

Desconocemos el alcance real de estas tendencias disgregadoras en estos sindicatos, pero tampoco se advierten desarrollos serios de fenómenos de resistencia internos que indiquen el surgimiento y desarrollo masivo de tendencias de lucha de clases en su seno.

Por otra parte, está también muy avanzado, según todos los datos, el proceso de desorganización de los sectores obreros adscritos a ELA-STV.

Finalmente, LAB, sindicato en su mayoría vinculado políticamente a Herri Batasuna, si bien atraviesa un momento de masificación, aunque desigual por provincias y comarcas, ni de lejos recoge ni cubre las necesidades de organización a nivel sindical derivadas de la crisis política general y la misma crisis de la UGT y CC.OO. Evidentemente, LAB expresa a nivel sindical las limitaciones y contradicciones de Herri Batasuna a la hora de configurarse como polo de reorganización política del proletariado vasco.

Ahora bien, aún constatando la profundidad de la crisis de UGT y CC.OO, sería un tremendo error aventurar su destrucción como organizaciones de masas, a partir de una identificación de la crisis de estas organizaciones con la del PSOE y el PCE a nivel de Euskadi. Cualquier paso de envergadura en formas de organización superiores del proletariado y las masas de Euskadi, que irá unido a avances en la conciencia e independencia políticas del proletariado vasco, se tendrá que reflejar en desarrollos clasistas en el interior especialmente de la UGT y a otro nivel de CC.OO y eso es de suma importancia para la táctica de los comunistas. La desconfianza del proletariado vasco hacia Herri Batasuna en el sentido de que no lo reconoce como su partido a pesar de que lo apoya políticamente ante la traición del PSOE y el PCE, se reproduce a cierto nivel en el terreno sindical. Y esa desconfianza tiene bases políticas absolutamente reales que nosotros no debemos ocultar a través de una adaptación política a Herri Batasuna.

En definitiva, todo este conjunto de problemas remite a una cuestión fundamental, como es la inexistencia hoy para el proletariado vasco de un partido obrero con el que se vaya a reconocer política y organizativamente.

En la misma medida en que Herri Batasuna, ni ninguno de los grupos a ella adscritos, puede levantarse como alternativa de partido del proletariado vasco, no se puede descartar un resurgimiento del PSOE en otra fase política, es decir, a partir de una modificación sustancial de las actuales circunstancias políticas.

La única garantía de que esto no suceda, si es que se puede hablar de "garantías" a este nivel, es que la IV Internacional avance cualitativamente en Euskadi, y a otro nivel, a escala de todo el Estado, a partir de una táctica correcta que responda a las necesidades políticas del proletariado en una situación en la que la maduración de la crisis prerevolucionaria se está operando sobre la base de una ruptura creciente de las masas con las viejas direcciones, cosa que no sucede en el resto del Estado ni creemos que vaya a suceder en esta fase política.

La profundidad y el alcance de la crisis del Régimen se manifiestan en toda su dimensión en torno al problema de Euskadi. Tanto el Gobierno como el PNV, PSOE, PCE y también Euskadiko Ezkerra están volcados para imponer el Estatuto de la Moncloa mediante el Referendum. Se juegan mucho en ello. Esta batalla y, mas allá, la imposición del Parlamento y el nuevo Gobierno "vascos", adquieren una dimensión extraordinaria. Lo que tratan, en definitiva, es sentar las bases para dislocar el proceso de ruptura política con la Constitución y la Monarquía que tiene un carácter masivo en Euskadi. Proceso experimentado en el rechazo a la Constitución, en las sucesivas elecciones y sobre todo a través de numerosas acciones generales de masas.

Euskadi, igual que en mayo del 77 o julio y diciembre del 78, es hoy la piedra de toque de todos los proyectos políticos en presencia.

Si les falla la baza del estatuto se dispararán todas las contradicciones que a lo largo de estos años han amenazado con dislocar el precario equilibrio en el que se sostiene la Monarquía.

El Estatuto representa un mecanismo de primer orden en los proyectos pro-monárquicos del PSOE, PCE y PNV. Hoy no disponen de ningún otro recurso para evitar el enfrentamiento entre el Régimen y las masas vascas. Si esto les falla difícilmente conseguirán mantener aislada a Euskadi. Se desarrollaría un proceso rápido que modificaría profundamente las relaciones políticas entre las masas y sus direcciones. Se pondría a la orden del día la apertura de una crisis revolucionaria en Euskadi operándose masivos procesos de ruptura orgánica de las masas vascas con el PNV. Esto representaría un fracaso de la política mantenida durante todos estos años por el PSOE y el PCE.

De ahí que todos ellos protagonicen en la actualidad una ofensiva sin precedentes contra Euskadi. La campaña del Referendum está siendo también una campaña de aislamiento de



Euskadi, de abierta complicidad con el terrorismo del Gobierno, incrementado en las fechas próximas al Referendum.

Pero no solo esto. Asegurarse la imposición del Estatuto significa también dislocar al máximo la respuesta de masas, no solo a las agresiones represivas del Gobierno, sino también a los ataques económicos y anti-sindicales del mismo. La política rompehuelgas que protagoniza la UGT y las mascaradas de movilizaciones de CCOO encuentran su expresión más avanzada en Euskadi.

Las consecuencias de la crisis económica y de la aplicación del nuevo plan económico del Gobierno son especialmente graves en Euskadi. La oleada de cierres de empresas, expedientes de crisis, tasas de aumento del paro, etc., adquieren en Euskadi un nivel superior al resto del Estado. Los partidos obreros contrarrevolucionarios han comprendido que es necesario extremar su política de desmovilización y división en Euskadi para asegurarse la imposición del Estatuto. No solo dejan vía libre a este conjunto de agresiones económicas y sociales. Han tomado la iniciativa, junto con el PNV, en la preparación de un pacto social a escala de Euskadi. Pacto imprescindible para responder a ese nivel a las exigencias que comporta la aplicación del Plan Económico del Gobierno. Saben que necesitan del Estatuto y de los organismos que de él emanan para formalizar un pacto social que, por otra parte, es difícilmente realizable a escala de todo el estado.

La ofensiva del Estatuto tiene un carácter global. Pues saben que cualquier paso de las masas vascas para hacer frente al Plan Económico del Gobierno y el Estatuto del Trabajador es un paso adelante en la unidad del proletariado en todo el estado español, y un paso atrás del Estatuto y de aquellos que tratan de imponerlo.

Por eso la respuesta a la ofensiva desencadenada por el Gobierno contra Euskadi tiene un carácter global. La lucha por la soberanía está, desde el principio, vinculada a la lucha por la unidad de Euskadi, por la amnistía y la disolución de los cuerpos represivos, por el conjunto de las reivindicaciones sociales frente al Plan Económico del Gobierno.

Es en este terreno donde especialmente se manifiestan las limitaciones de Herri Batasuna. La presencia de sectores de la burguesía vasca en su seno es un claro obstáculo en este sentido. Las dificultades de Herri Batasuna para organizar una respuesta global de las masas vascas a la política de la Monarquía son también consecuencia de su negativa a organizar la lucha del proletariado por su independencia orgánica. Su negativa a batallar contra los comités de empresa va pareja a sus limitaciones a la hora de organizar en las fábricas, federaciones, etc., el sindicato LAB.

Pero más allá de esto, no es posible entender y consolidar las formas soviéticas de organización de masas al margen de la organización de los trabajadores en sus fábricas y sindicatos.



Giscard y Suarez contra la nación vasca.



Pintada de nuestro partido en Pamplona.

Este conjunto de cuestiones repercuten de manera decisiva el programa de acción de los trotskistas y la táctica que en esta situación es conveniente aplicar.

Los pasos adelante de las masas de Euskadi, manifestados en la reciente huelga general y en cierto modo, en la constitución del Euskal Herriko Batzarrea, exigen una actitud políticamente clara de la IV Internacional. Es un objetivo central de la Internacional responder correctamente a las exigencias de la lucha del proletariado y las masas vascas. Y esto significa hoy prepararse y preparar las condiciones para que el enfrentamiento de Euskadi con la Monarquía franquista se dé en las condiciones políticas y organizativas más favorables para el proletariado del conjunto del Estado. En este sentido, la campaña en solidaridad con Euskadi que cobra una importancia central, se debe enfrentar abiertamente, a los planes liquidadores del PSOE y el PCE, tomen estos la forma que tomen (campaña antiterrorista,...) La IV Internacional debe encabezar esta campaña de masas como primer paso para dar respuesta al reto planteado por la situación de la lucha de las masas, en especial en Euskadi.

Pero tanto la campaña de solidaridad como la propia intervención en Euskadi exigen más que nunca desarrollar una política que respondiendo a los intereses del conjunto del movimiento obrero se apoye en las expresiones más avanzadas de la tendencia general.

La ruptura de los sectores más avanzados del proletariado y las masas vascas con la Constitución monárquica y el estatuto del PNV, en torno a la lucha por la soberanía como punto político que actualmente ordena el resto de cuestiones, la dinámica de acción y organización que dan norma a esta lucha, constituyen la manifestación más clara de la maduración de las condiciones de la apertura de una situación revolucionaria en Euskadi. Organizar estos sectores de masas en la IV Internacional es la tarea que ordena todo lo demás. Pero esto quiere decir como primera cuestión prepararse políticamente a través de la acción de masas por el levantamiento insurreccional de Euskadi frente a la Monarquía. La Cuarta Internacional ganará la confianza del proletariado vasco si es capaz de encabezar la lucha por la soberanía mediante las consignas que le ayuden a organizar su acción.

En este sentido no basta con llamar a la ruptura con el CGV y el Estatuto del PNV. En el enfrentamiento entre la Monarquía, el CGV y el E.H.B., la IV Internacional debe estar del lado de éste último, sin subordinarse políticamente a él. Impulsar formas organizativas de tipo soviético es una tarea central que hay que desarrollar, independientemente y a través de los sindicatos en torno a las consignas de independencia política, especialmente las de la soberanía y el modo concreto de realizarla. Pero también es de todo punto necesario utilizar los ayuntamientos, las gestoras y el mismo EHB para proponer y luchar por el impulso de soviets, de los sindicatos, etc. Y unido a ello, proponer y preparar milicias obreras y populares para la defensa frente a las hordas de Ibañez Freire y Blas Piñar, apoyándose para ello en las importantes experiencias que sobre esto existen en Euskadi.



IV.— RESURGIMIENTO Y CRISIS DEL PSOE

A) LA CRISIS DE LA DICTADURA FRANQUISTA Y EL RESURGIMIENTO DEL PSOE

La resolución estratégica del II Congreso daba cuenta de un hecho fundamental para comprender las características esenciales del proceso de reconstrucción del proletariado español bajo la Dictadura franquista: la modificación sustancial que se opera en las relaciones entre la clase obrera y sus direcciones con respecto al período anterior al triunfo de la contrarrevolución militar fascista a finales de los años 30.

Esta modificación se expresaba en dos fenómenos característicos: por un lado, en el establecimiento por parte del stalinismo de unas relaciones hegemónicas con la clase obrera, unido al surgimiento y desarrollo de las CC OO que constituyeron el eje organizativo en torno al cual giró la reconstrucción del proletariado bajo el franquismo. Por otro lado, la marginación de la socialdemocracia y el anarcosindicalismo en ese mismo proceso.

Ambos fenómenos, en cierto modo simétricos, respondían a otros más generales de carácter internacional. En efecto, el enorme prestigio que alcanza el aparato stalinista del Kremlin a cuenta del heroísmo del proletariado soviético frente al imperialismo alemán en el período de 1941-1945, estimula la organización de sectores masivos del proletariado en los PCs, principalmente en los países ocupados por los nazis. Pero este proceso está plagado de contradicciones. Esta hegemonía del stalinismo soviéticos no impide un proceso paralelo de nuevo desarrollo de la socialdemocracia a la salida de la II Guerra Mundial.

El papel jugado por el stalinismo en la toma del poder por Hitler en Alemania, los acuerdos contrarrevolucionarios de Yalta y Postdam establecidos a la salida de la II G.M. entre el imperialismo y la burocracia del Kremlin, que afectan de manera especial al proletariado alemán, alientan, del mismo modo que se renuevan las ilusiones democráticas entre las masas con los regímenes fascistas, el resurgimiento y desarrollo masivo de la socialdemocracia alemana.

Pero el desarrollo de la socialdemocracia en esos años no queda circunscrito a Alemania, a pesar, como decimos, del enorme prestigio alcanzado por el aparato stalinista ante el proletariado mundial. En efecto, la política contrarrevolucionaria del stalinismo en los países de la Europa del Este—lo que posibilita un inicial resurgimiento de los partidos socialdemócratas, hasta su posterior liquidación por medio de las "fusiones" impuestas por la burocracia stalinista— y, sobre todo, la política de "unión nacional" practicada en Francia e Italia, permiten un desarrollo de la socialdemocracia a escala europea.

Felipe González



Alfonso Guerra



Enrique Múgica



Pablo Castellanos



Luis Gómez Lorén



Sin embargo, la guerra fría conduce a una modificación sustancial de las relaciones de esos partidos con las masas, en cuya base se encuentran los fenómenos resaltados en el proceso de reconstrucción del proletariado español bajo Franco.

Así es, mientras la burocracia del Kremlin se ve obligada a desarrollar una política de "presión" frente al cerco imperialista, la socialdemocracia se alinea a fondo con el imperialismo y contra las masas.

La marginación de la socialdemocracia española en el incipiente proceso de reconstrucción del proletariado español, no sólo obedece a su consustancial incapacidad para desenvolverse en condiciones de dictadura. El alineamiento total del PSOE con el imperialismo en la guerra fría, el anticomunismo visceral que alienta, se unen a un sectarismo cerril ante el fenómeno CC OO. De tal modo que, prácticamente hasta la muerte de Franco, el PSOE no cuenta más que con una reducida influencia y restringida a núcleos muy localizados de Madrid, Bilbao, Sevilla, Asturias, Eibar.

Si la guerra fría había permitido a los stalinistas practicar durante un tiempo una política de presión sobre el imperialismo, dejando en manos de la socialdemocracia la responsabilidad fundamental en el mantenimiento del orden imperialista en los países de la Europa occidental, el surgimiento de la revolución política con el levantamiento de las masas de Berlín-Este, marca un giro decisivo en la lucha de clases a nivel mundial. El levantamiento y aplastamiento de los trabajadores de Berlín por los tanques "soviéticos" revela el carácter profundamente contrarrevolucionario de la burocracia stalinista.

Pero más allá de esto, el levantamiento de los trabajadores berlineses reveló a la burocracia del Kremlin que la amenaza de la revolución no solo tomaba cuerpo en los países capitalistas sino también en los mismos estados obreros.

Así, la necesidad de hacer frente a la revolución política, impuso serias consecuencias a la política de la burocracia stalinista, lo que afectó a la misma evolución de la socialdemocracia en los años siguientes.

El reforzamiento del aparato burgués en los partidos socialdemócratas entre 1953-1963 se da principalmente como resultado de los golpes sufridos por el proletariado frente al stalinismo en esa misma época.

Ahora bien, si la política contrarrevolucionaria de Stalin posibilitaba un reforzamiento del aparato socialdemócrata, el carácter de clase de las organizaciones en las que se apoyan se mantiene, más allá de las afirmaciones programáticas de los Congresos y la política burguesa que despliegan.

Pues como dijera Trotski: "... la socialdemocracia no puede vivir, ni respirar —es decir, no puede utilizar la democracia, ni traicionar a los obreros— sin apoyarse en las organizaciones políticas y sindicales de la clase obrera".

Pero por lo mismo que la contrarrevolución fascista implicó la destrucción del PSOE, o que la subida de De Gaulle en 1958, subida preparada por la política de Guy Mollet al frente del Gobierno, acarrió la práctica desaparición política de la SFIO, los nuevos desarrollos en la lucha de clases anunciados por las huelgas de Francia en el 47, los levantamientos de Berlín y Hungría en el 53 y 56 respectivamente, las huelgas del 62 en España... culminando en las movilizaciones internacionales de 1968 (Francia, Checoslovaquia, Vietnam), 69 en etc. sientan las bases de un nuevo avance de la clase obrera en su acción y organización, y sobre ello en las particulares condiciones políticas del momento, el nuevo resurgir de los PSs y su crisis.

Este ascenso del proletariado mundial, en los países capitalistas, coloniales y también en los estados obreros burocratizados, determina una crisis sin precedentes del imperialismo y la burocracia stalinista.

El nuevo período de la revolución proletaria que se abre con las movilizaciones internacionales del 68, desencadena un proceso de crisis profunda de la V República francesa, de la Dictadura franquista, de la República Italiana... que se prolonga aún hoy. La caída del Régimen salazarista de Portugal, constituye el prólogo de un proceso más amplio de crisis y dislocamiento de los regímenes burgueses que afecta de manera

especial a los países del sudeste europeo. Teniendo su expresión particular en la crisis de los regímenes burocráticos del Este.

Las exigencias contrarrevolucionarias a nivel internacional que de todo ello se derivan, imponen a los PCs la asunción de las responsabilidades fundamentales en estos países.

Corre principalmente a su cargo la defensa de estos Regímenes en bancarrota aún a costa de serios quebrantos.

El nuevo ascenso del proletariado y la política de defensa a ultranza del orden imperialista, y más en particular de estos Estados en crisis, por parte del stalinismo, constituyen las bases objetivas del nuevo auge de la socialdemocracia.

Este es el contexto general en el que se produce una modificación sustancial de las relaciones masas-direcciones en las últimas fases de la crisis de la Monarquía franquista.

El II Congreso de la LC no fue capaz de comprender este fenómeno en gestación. Fenómeno, por otra parte, de la máxima importancia para establecer una táctica correcta.

El II Congreso pronosticó el resurgir de la socialdemocracia para una fase posterior al derrocamiento del franquismo. Indudablemente tenía a su favor la comprensión de los límites objetivos de estos partidos, en tanto que partidos obreros que necesitan de la democracia parlamentaria para vivir y desarrollarse. Pero esto no nos ayudó mucho en la comprensión de este problema.

El esquematismo, no superado en parte hasta el III Congreso, con el que se contempló la crisis y derrocamiento de la Dictadura, nos impidió comprender que la descomposición del Régimen y los avances de las masas en su conciencia, en su acción y organización sentaban y las bases para el resurgir y desarrollo de la socialdemocracia.

El III Congreso dió un paso de gran importancia al comprender este fenómeno como producto ante todo del desplazamiento de la correlación de fuerzas entre las clases.

Efectivamente, en el Congreso de Toulouse (1972) y posteriormente en el de Suresnes (1974) el PSOE abandona los postulados de la guerra fría y se orienta hacia una táctica de alianzas con el PCE y los sectores burgueses de la "oposición democrática". Pero desde posiciones globalmente a la izquierda del PCE.

Así, durante un período criticó a la Junta Democrática de alternativa interclasista que hipotecaba los intereses de la clase obrera. Por su claudicación ante puntos como: derecho de autodeterminación, disolución de cuerpos represivos, reconciliación, etc. Y por su negativa a impulsar la movilización independiente de la clase y ofrecer una salida de poder interclasista —"gobierno de coalición"— A ello oponía la Plataforma de Convergencia Democrática, que con fraseología izquierdista pretendía ocultar su tracción en esos mismos puntos.

Pero sobre todo es su política sindical la que le permite establecer unas relaciones privilegiadas con las masas.

Mientras el PCE destruía a las CC OO metiéndolas en la CNS, bajo una pretendida táctica de "transformación" del vertical en sindicato único, el PSOE enarbolaba la bandera de la libertad sindical. En su nombre defendió el boicot a las elecciones de la CNS y posteriormente su "vaciamiento". La defensa de la libertad sindical y el apoyo a la organización que la encarnaba —la UGT— le dieron una autoridad innegable ante el movimiento obrero.

Ello iba unido a la recomposición de los PSs en el sur de Europa. Tras su práctica desaparición política, antes explicada, experimentan importantes desarrollos al calor de la nueva situación. Con el abandono de los presupuestos de la guerra fría, se orientan hacia una táctica de alianzas con los PCs —Unión de la izquierda, etc.— presentándose como los abanderados de las libertades.

Así en el caso portugués, la subordinación del PC a los planes de encuadramiento corporativo de los militares en el po-



Reunión del Buró Político de la Internacional Socialista en Madrid.

der, dió la ocasión al PS de presentarse como defensor de las libertades en oposición al stalinismo, lo que redundó en un avance de su autoridad entre las masas, como se reflejó en las elecciones de 1975 y 1976.

Del mismo modo, las elecciones del 15 de junio del 77 en España y las de marzo del 78 en Francia, mostraron al PSOE y al PSF como partidos obreros mayoritarios.

Así nos encontramos con un fenómeno de la máxima importancia política:

*por un lado, el mantenimiento de los partidos socialdemócratas de Gran Bretaña, Alemania y Austria, como partidos únicos de la clase obrera en sus países.

*por otro, con un peso determinante de la socialdemocracia en los países escandinavos.

*finalmente, con la reconstrucción de los PSs en Francia, Portugal y España como primeros partidos de masas.

Sin embargo, el III Congreso, aún habiendo experimentado un importante avance con respecto al II en este punto, no acabó de llegar al fondo del problema. Y eso se manifestó claramente en las debilidades tácticas de las que adoleció en este punto.

Así, lastrado todavía por el esquematismo del Congreso anterior, el III C. no preveyó la posibilidad del surgimiento de una crisis prerrevolucionaria —con todas sus consecuencias políticas y organizativas— bajo el marco de la Monarquía franquista. Y en definitiva las mayores responsabilidades contrarrevolucionarias que el stalinismo tenía que asumir.

Decíamos entonces:

“Hay que prever que el crecimiento de la socialdemocracia va a tener unos topes. Los límites impuestos por las modificaciones operadas en el proceso de reconstrucción del proletariado bajo la Dictadura. No puede producirse un vuelco en esas modificaciones que son el resultado de un proceso de décadas —por ejemplo en el sentido de que el PSOE se transforme en el principal partido de la clase, no ya como en los años 30, ni siquiera es previsible un vuelco al estilo portugués. Hay que señalar la maduración política mayor de la situación en nuestro país que en el momento de la caída de la dictadura salazarista”

Cuando era precisamente la maduración política de la situación en nuestro país la anunciadora de un vuelco sustancial de las relaciones entre los partidos y las masas.

Nuestras habituales deficiencias en la comprensión de la dinámica de la organización obrera y nuestros retrasos en cuanto a la comprensión del proceso de destrucción de CC OO y desarrollo de la UGT, derivados de una práctica propagandista, nos volvían a jugar una mala pasada.

La falta de claridad y decisión política para asumir tácticamente el reto que esto representaba, lastraron enormemente la actividad del partido ante las masas y en la misma UGT, condicionando su propio desarrollo.

B) EL PAPEL Y EL LUGAR DEL PSOE EN LA CRISIS DE LA MONARQUÍA

Si asumimos el fenómeno del resurgimiento de la socialdemocracia como algo lineal, por encima de las contradicciones del momento actual de la lucha de clases, corremos el peligro de cometer un error que sería simétrico al incurrido por el III Congreso.

El desarrollo de la socialdemocracia está sometido desde su origen a enormes convulsiones derivadas de las exigencias contrarrevolucionarias del imperialismo en el momento actual de avance del proletariado y crisis de los regímenes en presencia. De manera especialmente violenta en el Estado español.

Que el PCE tenga que asumir las principales responsabilidades en la defensa de la Monarquía —al igual que el PCF o el PCI con respecto a sus propios regímenes— de ninguna manera significa que el PSOE esté exento de responsabilidades.

Del mismo modo que el actual ascenso del proletariado en Europa, que crea las condiciones para la caída de esos regímenes y que se manifiesta en el terreno orgánico y político en un reconocimiento de los PCs como principales partidos del proletariado para la apertura de situaciones revolucionarias, no significa que estos partidos vayan a tener ninguna iniciativa encaminada a minar las bases de esos regímenes y provocar su hundimiento.

Tanto la política de oposición democrática en los prolegómenos de la apertura de la situación prerrevolucionaria en el Estado español, como la política de Unión de la Izquierda en Francia, en la que se comprometen los PSs bajo la batuta política de los respectivos PCs, más allá de los desmarques por la izquierda, constituyen la contribución de estos partidos a la tarea de impedir la caída de los respectivos regímenes.

Pero ello desde posiciones distintas a las del stalinismo, determinadas por el papel fundamental que la socialdemocracia debe asumir en detrimento de las responsabilidades del stalinismo, en la tarea de reconstrucción de los Estados burgueses que más tarde o más temprano, con unas u otras acabarán por dislocarse y hundirse.

Así, la tarea de la socialdemocracia en la etapa presente no sólo viene determinada, en términos generales, por la necesidad de contribuir, codo a codo con el stalinismo, en la defensa de estos regímenes, sino también, y sobre todo, por la necesi-



El Pacto de la Moncloa: una traición a los trabajadores.

dad de impedir un desplazamiento "descontrolado" del sistema institucional que se transforme por la acción de las masas en crisis revolucionarias, en definitiva por situarse en favorables condiciones políticas para la "reconstrucción".

Estas contradicciones que la situación de Francia y España sobre todo las plantean de manera evidente y hasta violenta, son en definitiva la fuente de las pugnas burocráticas en el seno de estos partidos y de los distintos alineamientos de la burocracia.

Más adelante analizaremos con más detalle este problema.

Es ilustrativa la experiencia de estos dos últimos años en el Estado español. El desarrollo masivo del PSOE se da en circunstancias especialmente contradictorias:

* en medio de la apertura de una situación prerrevolucionaria que se expresa de forma característica en un desarrollo orgánico del proletariado —a niveles sindical y político— sin precedentes.

* y por otro lado sin haber conseguido la caída de un Régimen cuya misma esencia y razón de ser es la negación de todo tipo de organización obrera y de las formas de la democracia parlamentaria.

La dirección del PSOE tiene el mismo interés que la del PCE en impedir el desarrollo de esta situación. Pero curiosamente esto le lleva a alinearse de forma cada vez más clara y comprometida con un gobierno y unas instituciones que impiden su desarrollo como partido obrero y a la vez partido parlamentario.

Para mayor escarnio, el PSOE debe hacer frente en este período a dos problemas decisivos:

EUSKADI es la vanguardia en el proceso de crisis prerrevolucionaria en el que viven las masas de todo el Estado. Y a ese nivel, el PSOE se ve obligado a asumir las responsabilidades contrarrevolucionarias fundamentales. Además de ser el primer partido de Euskadi el 15 de junio, el PCE es "poco menos que nada".

Los resultados para el PSOE de la política que se ve obligado a llevar están a la vista. En todo caso sorprenden por su espectacularidad. Constituyen una clara advertencia para la misma burocracia de las consecuencias que para el PSOE puede tener la asunción de principales responsabilidades en orden a salvaguardar a la Monarquía, sin atentar de una u otra manera a la estructura del Estado franquista.

El otro problema al que debe hacer frente con especial "dedicación" es el de la UGT. Esta no es simplemente un constante problema para la burocracia socialdemócrata. Ha sido, en los momentos más delicados del Gobierno, fuente de numerosas y fundamentales contradicciones y en definitiva el bastión más importante con el que ha contado la clase obrera.

Si la UGT fue la base más sólida del resurgimiento y desarrollo del PSOE, ha sido y es, el obstáculo más importante para su política promonárquica.

En efecto, la UGT jugó un papel decisivo en la apertura y desarrollo de la crisis prerrevolucionaria. El desarrollo y generalización de los comités, característico de esa fase, tuvo su ref

reflejo orgánico en un desarrollo masivo de la UGT, principalmente. En esas circunstancias el desplazamiento del aparato verticalista era inevitable. La grave y profunda crisis originada por todo ello sólo podía ser atajada con la colaboración a fondo PCE y PSOE con el Gobierno de la Monarquía.

Con la firma de los Pactos de la Moncloa, la burocracia socialdemócrata inicia conjuntamente con el stalinismo, una ofensiva en toda la regla contra los comités y la UGT.

De esa época data la entrada de los USOs con el consiguiente reforzamiento que se opera en la burocracia de UGT. Además de lo que políticamente representaba esta corriente en el interior de la UGT, semejanza con los presupuestos stalinistas en el terreno sindical.

Pero a la socialdemocracia no le bastaba con echar mano de este tipo de mecanismos burocráticos para doblegar a la UGT. Pues la UGT, sus secciones y federaciones, encarnaba los grandes avances experimentados por las masas en la fase precedente al 15 de junio. Y por ello mismo era el mayor obstáculo al Pacto de la Moncloa.

En esta situación la socialdemocracia tuvo que alinearse con el stalinismo en su proyecto corporativo, a costa de provocar serios procesos de desorganización en la UGT. Y aún a costa de serias fricciones con sectores de su propia burocracia socialdemócrata. En definitiva, el alineamiento de la camarilla de Felipe González con los USOs venía exigido por la necesidad de hacer frente, en la línea de los stalinistas, al verdadero motor de la crisis política: los comités y la UGT.

La aplicación del decreto del Gobierno sobre "comités" tuvo indudables repercusiones negativas en la organización de la clase. En primera instancia, supuso un corte importante en la experiencia de comités independientes. Y más adelante, a caballo de ello, un golpe muy serio a la UGT, particularmente a sus secciones, con la consiguiente aceleración de los procesos de burocratización.

Sin embargo, ni esta política ni la de las "preautonomías" consiguieron hacer retroceder a las masas hasta posiciones anteriores a las conquistadas en el proceso de apertura de la crisis prerrevolucionaria.

El 1 de mayo y la oleada de huelgas y movilizaciones que se desató (Cataluña, Euskadi, etc.) patentizaban el fracaso de esa política metiendo por otra parte al Gobierno y a la misma Monarquía en un nuevo estadio de su crisis.

Esto es lo que expresaba, a su nivel, el I Congreso de CC OO. El stalinismo, incluso contando con el concurso total de la socialdemocracia, manifestaba así su incapacidad para avanzar de manera general en la configuración de un nuevo organismo corporativo de encuadramiento de masas que cubriera el vacío dejado por la CNS, a partir de los comités del gobierno.

Esto, como se sabe, obligó a un reajuste táctico de gran importancia. Tenían que levantar un sindicato hiperburocrático (CC OO) como pieza necesaria para sostener la línea de "comités", contra cualquier forma de organización de tipo soviético, contra las asambleas y las secciones sindicales. Tenían que atar a la UGT en la aplicación de ese proyecto, y

en ese sentido se formularon las propuestas de "unidad" (institucionalización de la unidad de acción "por arriba" y comités de enlace de la secciones).

El eco concedido a estas propuestas en el interior de la UGT por parte del ala USO no ha podido, sin embargo, embarcar a la UGT de manera plena en un proyecto que lo llevaría a su destrucción.

Más adelante analizaremos cómo vemos que se manifiestan en la actualidad estos problemas.

A partir de ahí, los sectores dominantes de la burocracia socialdemócrata se alinearon con el stalinismo, para forzar la firma del Pacto Social por la UGT.

La resistencia de la clase manifestada también a través de UGT y el rechazo masivo de Euskadi a la Constitución, colocaron al Gobierno y a la misma Monarquía en una situación enormemente crítica.

La disolución de las Cortes del 15 de junio expresaba crudamente el fracaso de la política de Reforma. Eran necesarias nuevas bases políticas para hacer frente a las nacionalidades y a la clase obrera organizada.

C) EL SIGNIFICADO DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL PSOE

El Congreso Extraordinario abre una nueva etapa en la crisis del PSOE y en su papel en la defensa de la Monarquía.

El paréntesis abierto con la disolución de las Cortes del 15-J ha expresado el agotamiento de la política de "consenso" tal cual fué practicada por la UCD, el PSOE y el PCE.

Sin embargo, la alarmante agravación de la crisis económica y del problema de las nacionalidades, especialmente Euskadi, hacen más perentoria que nunca la necesidad de aunar esfuerzos para salvar de este trance al Régimen.

Hoy, el PSOE y la UGT asumen una responsabilidad fundamental en la tarea de hacer viable la aplicación del plan económico del gobierno y el Estatuto del Trabajador.

Así mismo, no es menor su responsabilidad en la imposición de los Estatutos vasco y catalán. Ambos, el plan económico y los Estatutos, constituyen los ejes políticos fundamentales, en torno a los cuales se está operando el reagrupamiento de todas las fuerzas empeñadas en la defensa de la Monarquía, desde la UCD, hasta el PSOE y el PCE, pasando por los partidos burgueses nacionalistas.

La camarilla felipista abordó el XXVIII Congreso con la intención de imponer al PSOE las grandes responsabilidades que esta situación le planteaba. De hecho, antes de ese Congreso ya se habían iniciado algunos pasos fundamentales en ese sentido. Que luego, tras la momentánea caída de González, no hicieron más que acentuarse.

En efecto, con la mayoría obrera conseguida en las municipales iniciaron una política de subordinación de las uniones locales, provinciales y de algunas secciones a los ayuntamientos profundizando de esa manera la desorganización de la UGT y su control a esos niveles, por parte de los concejales del PSOE, en particular por los sectores más afectos a la camarilla de Felipe y Guerra. Y esto aún contando con los obstáculos que se derivan de la existencia de una Ley de Régimen Local franquista que no permite demasiado juego a proyectos "participacionistas" para la integración de los sindicatos en el Estado.

El acuerdo "municipal" con el PCE, que tuvo en Guerra a su máximo artífice y defensor, tenía, y tiene, esta motivación fundamental. Es decir, utilizar al máximo los ayuntamientos para propiciar la integración por esa vía de la organización obrera. Además de forzar al Gobierno a aceptar modificaciones aunque parciales de la estructura del Estado.

Internamente, esto tenía sus propias expresiones. Se inició una política de renovación de las direcciones locales de la UGT cuando no su disolución, de acuerdo con los resultados de las municipales.

Es obvio que éste no es más que un aspecto del proyecto. La caída de Felipe González en el XXVIII Congreso no fue óbice para que se profundizara, mucho más, en la misma línea. El acuerdo firmado entre la UGT y la CEOE sienta las bases

generales para la subordinación del sindicato a los planes del gobierno y la patronal. De hecho expresa la negativa de la dirección del PSOE y de la UGT a oponerse al plan del Gobierno. Sanciona las mayores agresiones contra las masas y sus derechos sindicales, contenidos en el Estatuto del Trabajador de la UCD. No responde a otra cosa la vergonzosa abstención de los diputados socialistas a la propuesta de Estatuto presentada por el Gobierno.

Pero esto no quedaba en el terreno de las intenciones. La hostilidad mostrada por la dirección de la UGT a casi todas las movilizaciones desarrolladas en esas fechas, es una muestra palpable de la voluntad de estos rompeduegas.



No fueron menos graves los pasos dados por la dirección del PSOE con respecto a Euskadi y Catalunya. Para ellos era de vital importancia propiciar un acuerdo con la UCD y con el PNV. Una posible ruptura del PNV en la negociación del Estatuto les hubiera colocado en una situación particularmente delicada. Pues no hay que olvidar que ello hubiera generado un problema similar en Catalunya, donde el PSOE-PSC tiene una responsabilidad política central. Pero, así como el PSOE, ha podido soportar su práctica destrucción en Euskadi tras la aplicación, en condiciones de máxima responsabilidad, de la política centralista encarnada en el Consejo General Vasco, un choque de la UCD con el PSC en el tema del Estatuto hubiera acarreado una modificación sustancial de las relaciones políticas entre el PSOE y la Monarquía. La inminencia de un choque frontal de las masas con el Régimen. En esas condiciones, hubiera imposibilitado la participación de la dirección del PSOE en un Gobierno de coalición con la UCD, encaminado a evitar el dislocamiento global del Régimen y a rescatar lo fundamental del mismo. En esas condiciones se plantearía la necesidad de nuevos agrupamientos políticos, con participación protagónica del PSOE, encaminados a asegurar una reconstrucción ordenada del Estado y a evitar el estallido de una crisis revolucionaria.

La dirección felipista asumió plenamente la tarea de sacar adelante el acuerdo sobre los estatutos, aún a costa de fricciones con los sectores más "nacionalistas" del PSOE-PSC, reticentes ante los importantes recortes sufridos por el Estatuto de Sau.

A pesar de los mecanismos antidemocráticos de preparación del Congreso, no pudieron evitar que en él se reflejara, aunque parcialmente, la repulsa de decenas de agrupaciones a la política de "consenso" practicada por la dirección en la fase anterior. En esas circunstancias la camarilla felipista constató las enormes dificultades que tenía imponer al PSOE las nuevas responsabilidades políticas que la defensa de la Monarquía le exigía en esta situación. La caída de la ejecutiva, a la vez que expresaba la resistencia de las bases socialistas a tragar con una política aún más contrarrevolucionaria, constituyó el inicio de una maniobra de mayor alcance para preparar las condiciones adecuadas para su imposición.

Junto a la puesta en práctica de la política de los estatutos y los acuerdos UGT-CEOE, la camarilla felipista se aseguró, el concurso de los llamados "críticos", las condiciones políticas y organizativas del Congreso Extraordinario. Ahogando cualquier posibilidad de expresión de la voluntad clasista de amplios sectores obreros del PSOE.

El Congreso Extraordinario ha sido muy claro en sus resoluciones. En primer lugar se proponen ayudar al Gobierno de la UCD para sacar adelante el plan económico y enfrentar el problema nacional mediante los Estatutos.

Saben que para esta tarea no cuentan con la posibilidad de formalizar un nuevo "consenso". El desarrollo de las contradicciones entre la Monarquía y las masas, que tiene sus propias expresiones en la crisis dentro de los grupos políticos franquistas, no da para nuevos "consensos".

Los obstáculos que impidieron la firma del Pacto Social el pasado año son hoy mayores. Sin embargo buscan nuevas formas para acabar en lo mismo, imponiendo a la UGT los acuerdos con la CEOE y el papel de principal rompehuelgas. Además de que quieren meterla, más a fondo, en los "comités" de empresa, quieren hacerle jugar el papel de aliado de la patronal y del gobierno ante los nuevos convenios, aceptando congelaciones salariales, aumentos de productividad, drásticas restricciones a los derechos sindicales. También quieren comprometerla a fondo en la aplicación de los planes de reestructuración, a través de las comisiones de seguimiento y la firma de pactos sociales al nivel de las nacionalidades.

Para todo ello necesitan echar por tierra las conquistas de una UGT levantada en la lucha contra el Vertical, que encarnaba la prolongada lucha de las masas por la libertad sindical.

Este Congreso ha expresado a la vez la decidida voluntad de la camarilla felipista para disciplinar a los obreros del PSOE en la aplicación de esta línea. El nombramiento de Almunia como secretario de acción sindical no tiene otro significado.

El desarrollo de este proyecto político sólo es posible a través de una creciente deorganización de la UGT. Convertir, en última instancia, la UGT en un sindicato "del Gobierno" sólo es posible dislocándola, destruyendo sus bases en fábricas y burocratizando al extremo sus federaciones y uniones. Atándola a los "comités" de empresa, a los ayuntamientos, a los organismos "autónomos" y en definitiva a la patronal y al Gobierno. Este es el verdadero alcance de las decisiones que en este terreno ha adoptado el Congreso extraordinario. Decisiones que amenazan la propia integridad de la UGT.

Para este Congreso, ayudar a gobernar a la UCD significa también imponer el Estatuto a Euskadi, Catalunya, etc. Apoyar el terrorismo del gobierno contra las masas vascas, aislar su lucha por la soberanía.

Ahora bien, el PSOE es consciente de las dificultades que conlleva la aplicación de un plan de estas características. Y sobre todo es consciente de la debilidad del gobierno de la UCD. Por eso, una vez más, es la perspectiva del gobierno de coalición la que preside todo. El PSOE prefiere consolidar su presencia en los ayuntamientos, en los gobiernos nacionales,

etc. antes de comprometerse en tareas de gobierno. Pero dada esa debilidad del gobierno, sabe que es altamente probable un fracaso del plan económico y de la baza de los Estatutos para dislocar el proceso de masas en Euskadi. Pero tanto una cosa como la otra provocaría la bancarrota de este gobierno desatando nuevamente las contradicciones que hasta ahora han sido contenidas a costa de mayores compromisos con la Monarquía por parte del PSOE y el PCE.

Por un lado, las fuerzas franquistas apoyándose en el grueso del aparato de Estado, pugnarían por imponer soluciones políticas que precipitarían un choque frontal con las masas.

Por otro lado, se precipitaría la apertura de una crisis revolucionaria en Euskadi que no tardaría en repercutir profundamente en el conjunto del Estado.

El derrocamiento de la Monarquía, por medio de acciones generalizadas de masas, de creciente extensión y envergadura adquiriría plena actualidad en todo el Estado. La huelga general política de masas se pondría a la orden del día.

Pero esto es lo que, tanto el PSOE como el PCE, quieren evitar a toda costa. Pues eso significaría el desplazamiento del Estado, la imposibilidad de rescatar la Constitución y la Monarquía de la acción directa de masas. En definitiva, representaría la apertura de una situación revolucionaria en un contexto internacional, en el que la V República francesa tendría sus días contados, comenzando la cuenta atrás del estallido de la revolución en todo el continente.

Por ello, el Congreso extraordinario del PSOE ha decidido prepararse a acceder al Gobierno, si la UCD, con la ayuda del propio PSOE, como "oposición constructiva", del PCE, etc. no consigue aplastar la respuesta de masas a los planes del gobierno.

Guerra fué particularmente claro cuando afirmó que tras el Referendum, si las cosas no cambiaban en Euskadi, el PSOE apoyaría una intervención del Ejército para "defender el estatuto". Pero es impensable que a corto plazo eso fuera a dislocar la lucha de las masas vascas. Choques de tipo semisurreccional se pondrían a la orden del día en Euskadi, además de debilitar mortalmente la eficacia política del propio Estatuto para profundizar la división de las masas vascas.

En definitiva, una intervención del Ejército en Euskadi u otras medidas de este tipo, harían más perentoria la necesidad un gobierno de coalición para evitar el desencadenamiento de la huelga general política.

Esto es en suma, el lugar político del PSOE en esta fase. Y este es el espacio político de la camarilla felipista. Es decir, evitar la bancarrota del gobierno de la UCD, entanto sea posible. Asumir responsabilidades de gobierno si la situación lo reclama, para impedir un desplazamiento de la Monarquía y manos de las masas, tratando de rescatar partes fundamentales de este Régimen para una posterior reconstrucción, lo más ordenada y garantizada posible, del Estado.

Ahora bien, la adaptación de una solución de este tipo pondría a la orden del día la necesidad de nuevas alternativas, dentro del aparato socialdemócrata, que pudieran asegurar la reconstrucción del Estado, ante la inminencia de una crisis abiertamente revolucionaria. A la vez que actuaran como factor de integración de los sectores obreros en ruptura con la política de su dirección a través de un gobierno de coalición.

Como se sabe éste es un problema de palpitante actualidad en el PSF, y lo será también en el PSOE. En el reciente Congreso celebrado por el PSF, se han puesto de manifiesto la existencia de dos corrientes claramente enfrentadas en el seno de la burocracia. Por un lado la corriente encabezada por Rocard y Mauroy, minoritaria, partidaria de un acercamiento a Giscard. Por otro, la corriente encabezada por Mitterrand, ligeramente mayoritaria, partidaria de una política de Unión de la Izquierda y contraria a la participación del PSF en los proyectos "aperturistas" de Giscard.

Ambos proyectos tienen un mismo objetivo: impedir la caída de la V República y asegurar que no estallen situaciones revolucionarias por la irrupción política de las masas. Mientras Rocard trata de evitar esto mediante la formación de una "nueva mayoría" con Giscard, siendo apoyado por el PCF, que es quien asumen la responsabilidad fundamental en el sostenimiento de la V República en crisis, Mitterrand, consciente de la



inevitabilidad de la caída del régimen, pretende asegurar la salvación de la burguesía manteniéndose "distanciado" del régimen y preparando una salida de tipo frente populista —la Unión de la Izquierda— donde el PSF jugaría el papel protagonista con la misión de reconstruir un nuevo Estado burgués e impedir la maduración de la crisis.

En el desarrollo de la crisis en el Estado Español, el gobierno de coalición representa un hito fundamental, que necesariamente tendrá sus expresiones internas en el aparato socialdemócrata. Pues en el terreno político no es idéntica la misión de aquellos sectores cuya razón de ser es la de evitar el dislocamiento del Régimen, de aquellos otros cuya misión es la de encarar la reconstrucción del Estado.

El papel jugado por los "críticos" en este Congreso, está tejiendo una opción de tipo "mitterandista". Ellos no sólo se han manifestado en apoyo de la Constitución y la Monarquía, sino que afirman suscribir las resoluciones políticas del Congreso. Antes, impidieron que se desarrollara la contestación de los sectores obreros del PSOE. Ahora, pretenden enmascarar la realidad de las decisiones adoptadas, para dar tiempo a la ejecutiva para que aplique sus proyectos sin que choque con demasiadas resistencias. Este es el papel que están jugando.

Pero el hecho de que estos "críticos" hayan tendido este comportamiento no significa que esté cortada la posibilidad de que nazcan en esta fase opciones de tipo "mitterandista" desde el propio aparato socialdemócrata. Con toda probabilidad, surgirá esa necesidad política.

Otra cosa es que importantes sectores obreros afincados principalmente en la UGT, cuyas aspiraciones han sido descaradamente estafadas por los "críticos", se ven hoy enfrenta-

dos a la grave situación creada en el PSOE y la UGT a cuenta de los proyectos de la burocracia. Conscientes de que es necesario levantar una resistencia no sólo en el sindicato sino también en el partido. Resistencia que hoy parte de posiciones opuestas a los "comités" de empresa y a la política de convenios que la burocracia trata de imponer, etc. La gestación de estas alas obreras que tienen su base en la UGT constituye una de las expresiones políticas y orgánicas más avanzadas de la actual situación.

Por otra parte, las contradicciones a las que se ve sometido el PSC-PSOE en la actual situación, son un caldo de cultivo para un desarrollo de corrientes críticas a partir del rechazo del compromiso que la dirección de su partido se ve obligado a adquirir en Catalunya. La radicalización de las masas catalanas en torno al problema nacional, encontrará su expresión orgánica fundamental en el desarrollo de estas corrientes. Tras el descalabro del proyecto Suárez-Tarradellas, el PSC-PSOE se ve obligado a asumir la responsabilidad fundamental de cara a impedir la reproducción en Catalunya de los fenómenos políticos desarrollados en Euskadi. Pero una agravación de la situación en Euskadi o una radicalización de las masas catalanas en el sentido de rupturas, aunque parciales, con la Constitución a partir de la exigencia de sus derechos nacionales o por desarrollo de la movilización frente al plan económico, necesariamente repercutirá en una creciente desconfianza en el Estatuto, lo que introduciría serias modificaciones en las relaciones políticas que las masas mantienen con sus partidos, especialmente con el PSOE-PSC.

El desarrollo y maduración de estos sectores, lo que va estrechamente vinculado al proceso de UGT y del PSOE-PSC, es de una importancia decisiva en la evolución del PSOE y, más allá de eso, en la evolución de la situación política.

V. — POR UNA POLÍTICA DE ALIANZA OBRERA



A) UNA LÍNEA DE DEFENSA FRENTE A LOS ATAQUES DEL GOBIERNO

El esfuerzo fundamental de la burguesía y sus agencias en el movimiento obrero se ha concentrado en los últimos años en quitar de la vista de los trabajadores el objetivo político en torno al que se centró la ofensiva de masas que condujo a una situación prerrevolucionaria: el derrocamiento de la Monarquía.

Soltando el lastre de las libertades recortadas han utilizado la legalidad conquistada de las organizaciones obreras para montar un escenario de "participación" de las masas y de sus organizaciones, de los trabajadores y nacionalidades, en la gestión del país.

Es verdad que con la victoria obrera en las municipales y, sobre todo, con la imposición de los estatutos "autonómicos" se introducen modificaciones, aunque parciales, en el aparato institucional del Régimen, en sus mecanismos de dominación. Agravando, por otra parte, el precario equilibrio institucional y profundizando la crisis en el aparato de estado franquista.

Las direcciones del PSOE y del PCE tratan de utilizarlos para impedir el desarrollo de la acción independiente de las masas frente a la Monarquía. Profundizando la política de desorganización. Pretenden utilizar los organismos "autonómicos" como una barrera entre la lucha de las masas y la Monarquía, ahogando y estafando sus aspiraciones nacionales y convirtiendo los gobiernos "autónomos" en vanguardia de la aplicación del Plan Económico del Gobierno, mediante la firma de pactos sociales al nivel de las nacionalidades. Por otro lado,

a pesar de las limitaciones que les impone la imperancia de leyes franquistas en el terreno de los ayuntamientos y en las relaciones laborales, tratan de utilizar la mayoría obrera para imponer el control de las uniones locales de los sindicatos desde los ayuntamientos, buscando dotar a los mismos de atribuciones de arbitraje en los conflictos sociales.

Sin embargo, el choque entre las necesidades de las masas y el aparato franquista, en lugar de aliviarse, tiende a hacerse mas agudo.

El enfrentamiento masivo de los trabajadores y el pueblo de Euskadi con el centralismo dificilmente va a ser sofocado con la imposición del Estatuto. Este va a nacer "tocado del ala" por el rechazo de amplios sectores de la población vasca. No sólo ésto. La inminencia de mayores agresiones en el terreno social y económico, provocaran respuestas de masas, esta vez de carácter general, que minarán aún mas seriamente las bases del proyecto "autonómico" de las direcciones mayoritarias.

En los últimos dias especialmente, importantes sectores del aparato franquista, principalmente acantonados en el Ejército, desarrollan una fuerte ofensiva encaminada a provocar una intervención militar en Euskadi. Para ellos, el mismo Estatuto supone un golpe político, pues implica la delegación en manos de sectores no franquistas de una serie de competencias hasta ahora intocadas. Pero sobre todo, esa "concesión" no les garantiza, ni mucho menos, la resolución del problema político que representa Euskadi. Aún sin contar con un proyecto político capaz de aglutinar en torno al mismo al grueso de la burguesía, ellos se han estado oponiendo de diversas maneras a la política de consenso de Suárez. Ahora tienen más razones que nunca para esa oposición, pues el acuerdo de Suárez con los partidos nacionalistas y obreros en torno a los estatutos, a pesar de su carácter eminentemente centralista, representa un nuevo "abandono", mucho mas importante que el de los ayuntamientos, de parcelas del Régimen. Fraga ha sido muy claro al respecto. Para él solo es aceptable el proyecto de Estatuto Gallégo. Pero, ¿cuáles son las diferencias sustanciales entre ese proyecto y el vasco o catalán?. Aparte de ciertos matices, solo hay una diferencia de fondo: mientras que el Estatuto Gallego va a ser gestionado por la UCD y AP, los estatutos vasco y catalán lo serán por partidos obreros y nacionalistas. Fraga votó la Constitución. No existen diferencias formales entre ella y los estatutos. La diferencia, también a ese nivel, es que Fraga votó una Constitución gobernada por franquistas, cosa que no sucede con los estatutos, a pesar de que éstos estén fuertemente sometidos al Gobierno y a la Monarquía.

La UCD, apoyándose en las direcciones de los partidos obreros y nacionalistas, ha aguantado hasta el momento las presiones del aparato para una intervención en Euskadi. Todos ellos necesitan jugar la baza del estatuto. Pero tampoco tienen la seguridad de que vaya a tener la eficacia precisa. Saben que si les falla no tendrán otro recurso que mandar al Ejército para aplastar a las masas vascas. Esta es una opción que ya hoy interviene en la actuación política de todos los partidos. El Congreso Extraordinario del PSOE lo ha dejado claro: están dispuestos a asumir esa responsabilidad si hace falta. Metiéndose

en el Gobierno con la UCD para tratar de evitar un enfrentamiento frontal entre las masas y el Régimen. Tratarán con ello de aislar mas a Euskadi, buscarán el enfrentamiento de las masas del resto del Estado con las de Euskadi, para evitar que la situación evolucione rapidamente hacia una crisis de carácter revolucionario.

Por eso es mas importante que nunca desarrollar una política de solidaridad con las masas vascas, de alianza obrera. Esta política tiene hoy como punto de arranque fundamental la solidaridad con la lucha de las masas vascas contra la imposición del Estatuto y frente a la represión que le acompaña:

1) ¡Abajo el Estatuto de la Moncloa!

¡Abajo el Referendum antidemocrático y secesionista!
¡Abajo el Consejo General Vasco y todas las instituciones anti-nacionales impuestas por el Gobierno de Madrid!

2) ¡Por el derecho de Euskadi a la unidad: abajo las maniobras secesionistas sobre Navarra!

3) ¡Por el derecho de Euskadi a la autodeterminación: Derecho a la independencia!

¡Por una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE VASCA, libre y soberana!

4) ¡Por el derecho de Euskadi a dotarse de los organismos que libremente decida!

5) ¡Contra la represión!

¡Abajo el decreto ley "antiterrorista", etc.!

¡Por el derecho de los refugiados vascos a vivir y trabajar en Euskadi!

¡Amnistía total!

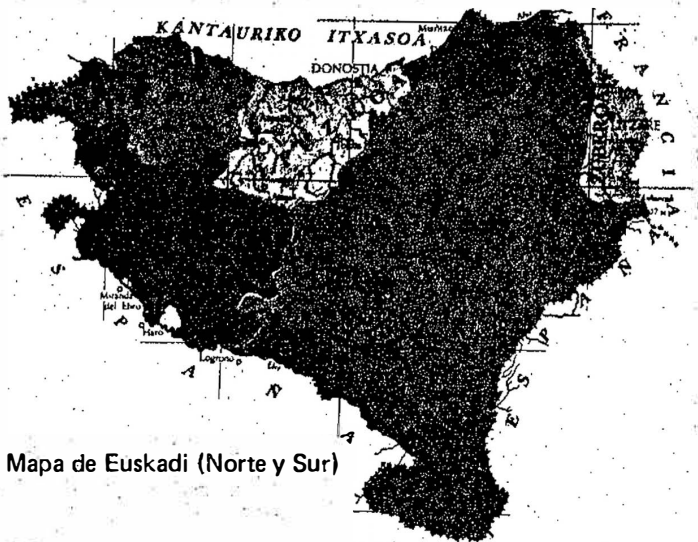
¡Disolución de los cuerpos represivos, de las bandas fascistas y "paralelas"!

La lucha en solidaridad con Euskadi debe extenderse a la exigencia de libertades y derechos de todas las nacionalidades oprimidas, en particular de la nación catalana. Reivindicación tradicionalmente defendida por el movimiento obrero de todo el Estado y que es hoy una bandera irrenunciable.

Mañana, cualquier avance de las masas frente a los estatutos o el Plan Económico del Gobierno, será respondida con la intervención del Ejército en Euskadi o medidas represivas similares. Los Estatutos de la Moncloa dejan las puertas abiertas a ello. La voluntad de los dirigentes no es otra. Temen como el diablo la confluencia de las movilizaciones masivas en torno a los convenios y expedientes, con la de las masas de Euskadi. Dificilmente podrían evitar que se transformara en una huelga general de carácter abiertamente político. Se pondrían a la orden del dia los mismos problemas que en los primeros meses del año 1977, con la particularidad de que ahora las posibilidades de control de los dirigentes son mucho menores que entonces. Sería mucho mas difícil para ellos sumir en la confusión a unas masas que tienen sobre sus espaldas mas de dos años de experiencia sobre lo que da de sí la colaboración de sus partidos con la Monarquía.

Cualquier amenaza en este sentido debe encontrar una respuesta contundente, no solo de las masas vascas sino también de todo el estado. La solidaridad con Euskadi cobraría en esas circunstancias la máxima importancia en la política de alianza obrera y de movilización de masas. Preparar a las masas para ello debe ser una tarea fundamental, ya hoy, de los socialistas revolucionarios.

El Plan Económico del Gobierno y el Estatuto del Trabajador, pieza básica para su aplicación, reflejan de forma concentrada las dificultades para articular mecanismos de dominación económica y laboral distintos a los tradicionales del franquismo. Salvo la mayor facilidad de despido que ofrece este estatuto a la patronal —de hecho instaura el despido libre— expresa la incapacidad de este estado para integrar a las secciones sindicales en las tareas de "participación" en la gestión de los empresas. Este estatuto representa un enfrentamiento frontal con las masas y sus organizaciones en torno a la aplicación de medidas antiobreras de envergadura superior a las hasta ahora conocidas. La enorme depreciación sufrida por el poder adquisitivo de los salarios —cerca de un 30 por ciento desde los convenios de 1977— es respondida con una política de congelaciones salariales en torno al establecimiento de topes del orden de un 12 por ciento, además de imponer fuertes incrementos en la productividad. Las enormes cifras de paro —cerca de dos millones— se enfrentan con una política de desmantelamiento de sectores básicos de la producción —side-



Mapa de Euskadi (Norte y Sur)



"Disolución de los cuerpos represivos"

rurgia y naval— abriendo el grifo de los expedientes de crisis y cierres de empresas, el Estatuto del Trabajador posibilita al empresario declarar expediente de crisis con el único trámite de informar con 30 días de antelación a los "representantes de los obreros" y tratando de imponer la jornada de 43 horas y la jubilación obligatoria a los 69 años. Esta política de mas paro, se acompaña de drásticas medidas de recorte y eliminación del seguro de paro, y mayores facilidades a los empresarios para firmar contratos eventuales y temporales.

Pero estas agresiones a los salarios y al trabajo, no pueden por menos de ir acompañadas de serias restricciones al derecho de huelga y en general a los derechos sindicales. Negando poderes reales a las secciones sindicales, el Gobierno y la patronal saben que necesitan renovar los mecanismos de integración de los trabajadores, contra las asambleas y los mismos sindicatos. De ahí que las elecciones a comités de empresa constituyan un eslabón imprescindible dentro de este plan general. Sin embargo, la permanencia de los tradicionales mecanismos de dominación sobre los trabajadores y sus organizaciones en el marco de la empresa, y mas en general, impiden dotar a esos comités de reales atribuciones que les permitan abordar con mayores garantías una política contra los sindicatos y las asambleas en el marco de la empresa.

El PSOE y el PCE han sostenido durante esos dos años y medio a un Gobierno y un Régimen que impedían dar pasos serios en la integración de las masas, sus organizaciones, las nacionalidades, al Estado, a la empresa, etc. Sin embargo no han renunciado a su política de modificación parcial de esos mecanismos e instituciones para dotarse de cauces eficaces de "participación". Hoy, con mayores costes que en la fase anterior, se ven obligados a aceptar en los hechos un plan económico y de ataques a la organización obrera básicamente franquista. El conjunto de la burguesía y de la patronal se han alineado en torno a este plan lanzado por el Gobierno. Las direcciones de CCOO y de UGT, empeñadas hasta las cejas en una política de sostén del Gobierno de UCD saben que no existen posibilidades objetivas para establecer acuerdos generales al estilo del Pacto de la Moncloa. Pero por ello levantan una política de oposición frontal al plan del Gobierno, porque eso daría al traste con el mismo Gobierno y la política seguida durante estos años.

La dirección de UGT está mandando las responsabilidades mas serias de cara a dejar vía libre a ese plan. Los acuerdos con la CEOE representan una aceptación global de los planteamientos básicos del Plan Económico del Gobierno y del Estatuto del Trabajador. Establece mecanismos sectoriales y de empresa para la aplicación de los contenidos sustanciales del plan del Gobierno. Los principios con los que quieren establecer los

convenios marco responden a las bases de la política de congelaciones salariales, aumentos de productividad, despido libre, expedientes, recortes a los derechos sindicales y reforzamiento de los comités de empresa en detrimento de las propias secciones sindicales. Los acuerdos con la CEOE y los convenios marco que pretenden establecer según esos presupuestos, constituyen una agresión sin precedentes a la independencia e integridad de la UGT. En consecuencia, UGT aparece como abandonada de la desmovilización y desorganización. La sistemática política de rompedor y de división que protagoniza, es el corolario a su subordinación a los planteamientos y exigencias del Gobierno y de la patronal. Esta política no puede entenderse al margen de la línea de defensa a ultranza del Gobierno Suárez y la preparación del Gobierno de coalición, si la situación lo requiriese, decidida por el Congreso Extraordinario del PSOE.

En este contexto, la oposición del PSOE y la dirección de la UGT a los planes del Gobierno y de la CEOE, se reduce a la exigencia de mas dinero para el seguro de paro y mas dinero para el sector público, cosas por otra parte difíciles de aceptar por el Gobierno.

En este contexto la dirección de CCOO establece una línea de acción que no difiere sustancialmente de la de UGT, aunque es verdad que la matiza en puntos de importancia. La agitación sobre la necesidad de un pacto de solidaridad nacional a cuatro bandas no representa una oposición global a los contenidos del Plan Económico del Gobierno y del Estatuto del Trabajador. De hecho se está aplicando también una línea de dejarles vía libre, sin renunciar, a la vez, al intento de introducir algunas modificaciones que permitan una co-gestión de la empresa pública y una participación en el marco de la empresa. En línea con los presupuestos políticos trazados por el IX Congreso del PCE y por el I Congreso de CCOO, ya analizados.

Aparte de la introducción de matices al estatuto del Gobierno en puntos de cierta importancia como la jornada de 40 horas, la prohibición de los contratos temporales o la jubilación a los 60 años, el punto de fricción básico es el que se refiere a los comités de empresa.

Como antes hemos visto, la posición del Gobierno y la CEOE en este punto no permite dotar a los comités de atribuciones reales que encaucen la "participación" de los trabajadores y sus organizaciones en la empresa. La dirección de CCOO busca arrancar el máximo de competencias para los comités, aún a sabiendas de las graves distorsiones que una concesión de este tipo podría acarrear en todo el sistema de "relaciones laborales" básicamente franquista.

Pero del mismo modo que el apoyo al Gobierno ha impedido en los hechos arrancar serias modificaciones en el

aparato institucional (los únicos precedentes de importancia lo constituirían la destrucción impuesta de la CNS y la ordenación de los estatutos de "autonomía"), la situación de crisis del Gobierno de la UCD y la perspectiva próxima de choques entre las masas y el Gobierno y la CEOE en torno a los convenios, expedientes de crisis, etc., obliga a las CCOO a deterrar cualquier veleidad que amenace con disparar las movilizaciones aún contenidas. Desde este punto de vista, nuevamente, esa táctica que pone en primer plano el sostén del Gobierno Suárez, termina por hacer imposible la imposición al Régimen de reformas reales en el terreno de las relaciones laborales.

Así, apoyándose en la política abiertamente liquidadora y divisionista de la dirección de UGT, la dirección de las CCOO se ha permitido lanzar una campaña de agitación sobre el Gobierno, campaña culminada en la concentración del 14 de octubre, y precedida por una política de quiebra de movilizaciones en el seno de las fábricas y zonas, contraponiendo las necesidades de extensión, organización y generalización de las luchas a la concentración de Madrid.

Sectores cada vez mas importantes de los trabajadores inician estos días movilizaciones, aún parciales, frente a las consecuencias de la crisis económica y los proyectos del Gobierno y de la CEOE. Frente a la cadena de cierres y expedientes, se desarrolla un movimiento que adquiere creciente envergadura. Extender este movimiento, organizarlo y unirlo con las próximas movilizaciones de convenios constituye una tarea de la máxima importancia política. Pero la unidad y extensión de estas acciones exige objetivos claros frente a los obstáculos que tienden los burócratas de los sindicatos.

Tanto CCOO como UGT proponen establecer, en el marco de los acuerdos UGT-CEOE, convenios marco siguiendo los criterios básicos formulados por el Gobierno, con matices. Topes salariales, aumentos de productividad, aumentos de horas, despido libre o poco menos, restricciones a los derechos de huelga, de asamblea, no reconocimiento de las secciones sindicales fuera del marco de los comités de empresa, son algunas de las bases en torno a las que pretenden imponer estos acuerdos marco. Acuerdos dirigidos, por otra parte, a evitar la confluencia no sólo de las luchas frente a los expedientes con las luchas de convenios, sino también de unos convenios y otros. En definitiva tratando de asegurar "paz social" en el período próximo.

Son necesarios convenios marco. La clase obrera tiene el mayor interés en unir a todas las fábricas en la lucha de los convenios. Pero no los acuerdos que pretenden firmar UGT y CCOO. Los mínimos necesarios para recuperar la pérdida sufrida en el poder adquisitivo de los salarios y para defender el puesto de trabajo son estos:

1.- Ningún salario inferior a las 35.000 ptas mensuales. Aumentos lineales de 12.000 ptas. Escala móvil de los salarios establecida según los índices elaborados por las centrales sindicales, que deben incluir las consecuencias en el coste de la vida de las alzas del petróleo y no, como pretende el Gobierno, que quiere establecer un índice del que se excluyan los efectos de las alzas del petróleo.

2.- Defensa incondicional de los puestos de trabajo: ningún expediente de crisis ni cierre. Fuera los planes naval y siderúrgico. No aceptar regulaciones de empleo camufladas en jubilaciones anticipadas, etc. Apertura de libros de cuentas. Expropiación y nacionalización bajo control obrero de las empresas cuyos patronos se nieguen a tirar adelante en esas condiciones. Por las 35 horas de trabajo a la semana, sin aumento de ritmos ni disminución de salarios, cubriendo las horas restantes con compañeros en paro. Por la escala móvil de horas de trabajo, según la evolución de los índices de paro.

3.- Plenos derechos sindicales: de huelga, información, asamblea, reconocimiento de secciones sindicales.

Estos tres son puntos mínimos para la defensa del poder adquisitivo de los salarios y del empleo. Junto a otras reivindicaciones como el 100 por cien de retribución para el seguro de paro, o en caso de baja o jubilación, etc., debieran constituir la base mínima para cualquier convenio marco.

La lucha por esos convenios mínimos, choca con los planes del Gobierno y de la CEOE. También con los proyectos de los burócratas de UGT y CCOO. Hay que preparar desde abajo, en los sindicatos y en las fábricas, la movilización fren-

te a todos estos problemas. Pasando por encima de los obstáculos que quieren imponer los burócratas. Dar pasos reales desde abajo significa organizar a las asambleas fuera de los marcos que el Gobierno quiere imponer por medio de los comités de empresa. Organizando a las secciones sindicales en torno a estas plataformas y para levantar planes de acción de las masas. Esto quiere decir que en aquellos sitios en donde no se haya hecho, hay que preparar la dimisión de los comités de empresa, y poner en el centro de las asambleas a las secciones sindicales. Significa lucha por que sean las secciones sindicales las que negocien el convenio al nivel de la empresa y las que impongan tareas de control y veto sobre los temas antiobreros del patrono. Frente a los patronos y sus comités, secciones y asambleas, movilización en la fábrica, y de ahí hacía fuera.

Luchamos por la negociación de los convenios marco, por parte de los sindicatos. Pero siempre sobre unos mínimos y bajo control de las secciones y afiliados. Fuera todos aquellos convenios marco que no tengan unos mínimos de lucha. Ninguna firma a espaldas de los afiliados y secciones.

Todos los pasos que se den en la unificación y organización de las acciones de masas, pondrán a la orden del día la necesidad de organizar una respuesta general al Plan Económico del Gobierno y al Estatuto del Trabajador. Su preparación pasa hoy por dar los pasos que permitan superar los obstáculos que tiende la burocracia, apoyándonos en las asambleas, en las secciones, etc., que sea posible. Hay que reivindicar la ruptura de los acuerdos de la UGT y la CEOE. Hay que exigir, y preparar desde abajo, la alianza obrera de los sindicatos y partidos obreros para organizar la respuesta que requiere echar abajo los planes del Gobierno, la huelga general, preparada en la lucha de los convenios y frente a los expedientes.

Todo esto significa también prepararse para desarrollar una línea de boicot a las próximas elecciones a comités de empresa que prepara el Gobierno.

En definitiva, aquí lo que está planteado es un recrudecimiento enorme de los choques entre el aparato de estado, tras el que sigue cobijándose la patronal, y las masas, sobre la base de su movilización frente a las consecuencias de la crisis económica o el problema de las nacionalidades.

Pero con la particularidad de que tras dos años y medio de colaboración con la Monarquía y en un momento en que las direcciones sindicales se comprometen todavía mas a fondo en la línea de apoyo al Gobierno de Suárez, las masas desarrollarán su respuesta sin esperar a un cambio de actitud de los sindicatos. La componente claramente soviética de ésta movilización, que incluiría inevitablemente elementos de rechazo sindical, debe ser la base de apoyo fundamental para una política de alianza obrera fuera y dentro de los sindicatos. Las líneas de resistencia que ya se están desarrollando especialmente en la UGT, frente a la política de destrucción y desorganización de las burocracias, se apoya basicamente en el rechazo orgánico a los comités de empresa y un plan de acción unida ante los convenios. Estos son puntos fundamentales para un desarrollo de la línea de masas que la situación requiere y para un reorganización de los sindicatos. Pero ésta línea de resistencia chocará con la misma resistencia de la burocracia. El enfrentamiento entre ambas es inevitable. Solo habrá garantías de éxito en tanto se apoye en la propia movilización de las masas.

Ayudar a las masas a centralizar sus combates actuales sólo es posible entendiéndolos como parte de la lucha por abatir a la Monarquía franquista y su Constitución. Y así será mientras ese aparato permanezca intacto.

La independencia del movimiento obrero frente a la burguesía es la primera condición para unir todas las filas contra la Monarquía, para conseguir los objetivos obreros, para organizar la movilización sin cortapisas. ¡Que los partidos y sindicatos obreros rompan con la burguesía y su Monarquía! ¡Que formen la Alianza Obrera!

¡Fuera partidos obreros de las Cortes de Suárez y del Rey!

¡Abajo la Constitución!

¡Abajo la Monarquía!

Estas son las bases políticas de la Alianza Obrera y la alianza revolucionaria con la pequeña burguesía nacionalista radical y con el campesinado.



Pero el contenido político de ésta lucha, muestra hoy mas claramente su carácter de clase: Se plantea crudamente la cuestión de quien debe mandar, que intereses de clase han de prevalecer.

La tarea de echar abajo los planes centralistas del Gobierno sobre las nacionalidades, así como sus planes económicos y contra la organización obrera, en definitiva la tarea de echar a los franquistas del Gobierno, aparece cada día mas identificada con la formación de un Gobierno de las únicas fuerzas que pueden representar una alternativa al poder franquista y capaz de realizar las tareas urgentes, revolucionarias, de dismantelar el aparato monárquico franquista, armar a las masas, poner en pie un plan económico obrero, convocar elecciones libres a Cortes Constituyentes, y el ejercicio del derecho de autodeterminación de las nacionalidades. Estas son las organizaciones obreras. Por tanto los comunistas que luchamos por organizar la acción de masas para derrocar a la Monarquía, vinculamos ésta consigna con la consigna central del programa de acción: el Gobierno Provisional de los Trabajadores.

B) EL GOBIERNO PROVISIONAL DE LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO ESPAÑOL

Todas las necesidades elementales de las masas han chocado en el Estado Español con el muro de la Dictadura de Franco. La lucha por métodos revolucionarios por esas necesidades se ha centralizado políticamente en la lucha frontal contra la Dictadura. La LC ha formulado "Abajo la Dictadura", precisando luego "Ni Franco ni Juan Carlos" y, más tarde, ha utilizado como fórmula precisa "Abajo la Monarquía franquista" (aunque muchas veces concentramos fuego en la institución monárquica que es clave de esa continuidad franquista: "¡Abajo la Monarquía!").

Desmantelar el aparato franquista, los mecanismos franquistas de dominación capitalista y satisfacer las necesidades de las masas (esas necesidades elementales por las que los trabajadores han venido luchando) exigía un instrumento, un gobierno provisional revolucionario que para satisfacer esas necesidades tenía que abordar unas tareas no sólo democráticas sino anticapitalistas. Sólo las organizaciones obreras, rompiendo con la burguesía podían realizarlo. No se podía plantear otra alternativa a la Dictadura.

Un programa de acción revolucionario contra la Dictadura tenía que incluir esta alternativa. Sólo así podían los comunistas expresar la dinámica de la lucha de las masas y no ir a remolque de las alternativas burguesas "democráticas", y, a la vez, evitar quedarse en frases socialistas.

Pero centrar el programa de acción de esta forma no garantizaba una intervención correcta de los comunistas organizando la lucha de masas. Es más, tenía un peligro, que pesó

fuertemente (sobre todo en determinadas épocas) en la práctica de la LC: dedicarse a hacer propaganda del gobierno de los trabajadores —ligada a un planteamiento abstracto del derrocamiento de la Dictadura— y eludir con ello tanto la propaganda y la agitación por el socialismo, como sobre todo la agitación concreta para organizar en concreto la lucha de las masas contra el franquismo.

No basta con que el programa tenga un centro correcto. Tiene que articularse de manera ajustada a la dinámica de lucha de las masas. Una lucha que se desarrollaba sobre todo en torno a consignas elementales (democráticas y económicas), con un nivel político más bajo en muchos aspectos que en países "democráticos". No partíamos de un proletariado que fuese ya a la toma del poder, sino de un proletariado que en su lucha contra el franquismo debería entrar por ese camino. Porque la crisis del franquismo es la crisis de la burguesía, que no tiene capacidad en la relación de fuerzas internacional para recomponer su aparato de Estado ni establecer otros mecanismos de dominación económica, que le permitan estabilizar su poder. El derrocamiento de la Dictadura planteaba la apertura de una crisis política, económica y social global. Y en ese sentido estaba planteada la cuestión del poder, la cuestión del gobierno.

Para participar en primera línea del combate de las masas y no esperarlas en el primer piso con nuestra propaganda, los comunistas debíamos impulsar la movilización y organizar a los trabajadores, partiendo de las diversas reivindicaciones centralizando esta lucha en torno a la cuestión clave del derrocamiento. Esta, y no tanto la cuestión del gobierno, era la que estaba en primer término. Aunque al mismo tiempo debíamos plantear la exigencia del gobierno provisional de los trabajadores remitiendo también a ella la solución de las diversas reivindicaciones.

Era en primer lugar para esta cuestión clave del derrocamiento para lo que debíamos exigir el frente único de todas las fuerzas de la clase: la Alianza Obrera. Por eso a fines de 1976 se clarificó que, si bien proponíamos la Alianza Obrera contra la Monarquía y por el Gobierno de los Trabajadores, debíamos poner el peso en lo primero. Dentro de un Frente Único por el derrocamiento de la Monarquía franquista, los comunistas tendríamos las mejores posibilidades por luchar por la única alternativa: el Gobierno de los Trabajadores.

Y por supuesto, la lucha por la Alianza Obrera no era simplemente ir repitiendo esto en la agitación y propaganda, sino organizar pasos concretos en la acción revolucionaria de masas, a partir de cualquier necesidad.

Sin embargo, hoy, cuando el aparato franquista se ve sometido a una prueba decisiva en su crisis, hay una innegable desconfianza en grandes sectores de las masas trabajadoras. La perspectiva de un Gobierno de sus organizaciones no tiene el potencial movilizador de otras épocas. Esto se debe a que los dirigentes de las grandes formaciones obreras de masas están dentro del marco franquista de la Monarquía y su Constitución. Sigue pesando en el proletariado el esfuerzo de los aparatos por arrancar a la clase sus objetivos políticos centrales. El choque que en los hechos en la lucha diaria se da entre las masas y el aparato franquista, va acompañado de un retraso en la recuperación del objetivo centralizador de echar abajo la Monarquía y la Constitución. Plantear la lucha por un Gobierno de organizaciones obreras de otro modo que como Gobierno Provisional revolucionario, es incapaz de ayudar a la clase a centralizar su lucha. La propuesta de Gobierno de organizaciones obreras debe ir acompañada de las exigencias de ruptura política con la Monarquía y poniendo en el centro las exigencias de autodeterminación, expropiación de los capitalistas, la disolución de los cuerpos represivos, la abolición de la Monarquía y su Constitución.

El problema al que se enfrenta el movimiento obrero en este terreno es de una dimensión extraordinaria. Si bien, en estos momentos la política del PSOE y del PCE se basa en un apoyo global a los planes de Suárez sobre las nacionalidades y en el terreno económico y de la organización obrera, ambos juegan en la perspectiva de un gobierno de coalición UCD-PSOE como recurso extremo ante la eventualidad de un fracaso general de la política de Suárez.

La entrada del PSOE en el Gobierno se daría para evitar el choque de las masas con el aparato franquista a costa de unas cortas reformas del mismo, como único medio de evitar que las masas lo barran. El papel de los miembros burgueses del Gobierno de coalición sería el de garantizar que se vaya a salvar lo mas posible, y que se darán esos pasos contando con el visto bueno del propio aparato. Por lo que representa para las masas este programa, y por lo que representa de ataque a organización obrera, nuestra lucha es a muerte contra la coalición, que en realidad sería una coalición con sectores del aparato franquista. Y cuando se forme ese Gobierno será una lucha a muerte para echar a todos los ministros burgueses de él.

Pero ésta maniobra burguesa agudizaría la crisis que pretende resolver:

a) Dislocaría objetivamente al aparato franquista, con tanta mayor fuerza cuanto mas elevado sea el grado de movilización obrera. El PSOE no podrá renunciar a intentos de reforma del aparato franquista. Pero sectores fundamentales del mismo ven con cierta hostilidad la entrada en el Gobierno de una fuerza que lejos de ser su representante político (como son UCD y AP) se apoya en la organización obrera —que no puede coexistir con ese aparato—.

b) Pero, por mínimas que sean, esas reformas difícilmente evitarán nuevos enfrentamientos de las masas con el aparato de Estado.

Los dirigentes del PSOE y parte de los de UCD pueden ponerse de acuerdo en unas reformas mínimas y en mantener tal cual lo máximo posible. Pero las masas y el aparato no pueden ponerse de acuerdo.

En cualquier caso, el resultado de las próximas batallas (convenios, expedientes, Euskadi) configurará decisivamente

las perspectivas políticas a medio plazo.

No hay que descartar en este contexto (de Gobierno de Coalición imposibilitado para hacer frente a la situación), intentonas golpistas de sectores del aparato. Pero eso precipitará el enfrentamiento con las masas, con resultados enormemente onerosos para el propio Régimen, pues comportaría:

a) El desmantelamiento parcial del aparato y de los mecanismos de dominación franquistas, con lo que quedaría seriamente cuestionada y comprometida la propia Monarquía.

b) Un salto adelante del movimiento obrero, en la acción revolucionaria, que comportaría una fuerte recuperación organizativa del mismo y un empujón, en el marco de la empresa, a la dinámica de control obrero.

Ante la eventualidad, nada improbable, de formación de un Gobierno de coalición sobre la base de una intervención militar en Euskadi o el fracaso de la política económica del Gobierno Suárez, la perspectiva de enfrentamientos mas profundos entre las masas y el aparato de Estado, de ningún modo debe entenderse como una perspectiva de desarrollo lineal y automático. La situación girará en torno a la solidaridad con la lucha de las masas vascas, donde las modificaciones profundas operadas en las relaciones con el PSOE, recortarán enormemente el margen de maniobra de cualquier Gobierno de coalición.

Es fundamental comprender, en cualquier caso, que ese Gobierno lejos de suponer una estabilidad para el Régimen va a desatar una dinámica de fuertes convulsiones sociales que desembocarán en la dislocación del aparato franquista, es decir de la Monarquía franquista.

Es en ésta perspectiva en la que toma todo su valor la articulación actual de nuestro programa, establecida a partir del antagonismo irreconciliable que hoy se desarrolla entre las masas trabajadoras y las nacionalidades de un lado, y de otro el aparato franquista y sus mecanismos (incluidos los que han aglutinado a una patronal en crisis), es decir, la Monarquía heredera de Franco.

Como subproducto de ésta intervención revolucionaria de las masas y la derrota decisiva del aparato franquista, la burguesía tendrá que lanzarse a reformas de mayor envergadura, intentando remodelar y restaurar el aparato de Estado. PSOE y PCE tendrán que desempolvar puntos de su programa de reforma ("ruptura") hoy olvidados, aparte de realizar incluso puntos que hoy se proponen y que no podrán llevar adelante en la actual situación.

En medio de la dinámica revolucionaria abierta, tarde o temprano para canalizar al movimiento de masas ambos aparatos —estalinista y socialdemócrata— deberán asumir conjuntamente —aliados con cualquier deshecho burgués— una alternativa de Gobierno de "izquierdas", el frente popular.

Esto corresponderá a una situación en la que las cuestiones centrales del programa de transición —el gobierno de los trabajadores y los soviets— se plantearán de manera inmediata como los objetivos y tareas centralizadores del movimiento de masas. Entonces articularemos nuestro programa de otro modo. Podremos mantener en el programa la abolición de la Monarquía —si ésta subsiste— o el desmantelamiento de restos del aparato franquista o la autodeterminación, pero ya no se tratará de derrocar la Monarquía franquista. La consigna clave será directamente el gobierno obrero (combinado en una u otra forma con la concreción de la dinámica soviética). Entonces podremos exigir la Alianza Obrera frente a las formas concretas que adopte la reacción, y podremos plantear la Huelga General en otra perspectiva. Hoy la exigencia es la Alianza Obrera contra la Monarquía franquista (y esto comporta que situemos la Huelga General en esta perspectiva) y el gobierno que —ligado a ello— se necesita es un gobierno provisional que —además de tareas más generales como la expropiación, el control y el armamento— tiene la labor de desmantelar el aparato franquista, abolir la Constitución y la Monarquía, y garantizar los procesos constituyentes nacionales y las Cortes Constituyentes Revolucionarias. Es más aquellas tareas generales se concretan en armamento para estas tareas y acabar con los mecanismos franquistas antisindicales en el terreno económico.





Tropas coloniales francesas capturadas por las fuerzas de Giap en 1955, tras la caída de Dien Bien Phu.

LA CUARTA INTERNACIONAL Y LA REVOLUCION INDOCHINA

(Crítica de las posiciones de la mayoría y de la minoría del Secretariado Unificado de la IV Internacional)
INFORME AL COMITE CENTRAL DE LA LIGA COMUNISTA (IV INTERNACIONAL)

ALGUNOS DATOS SOBRE EL ÚLTIMO PERÍODO DE LA REVOLUCIÓN INDOCHINA

LA DERROTA DEL IMPERIALISMO YANKI

1968 — Primavera. El Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur (FNL) lanza la ofensiva del Tet. Esta, junto con el Mayo francés y la "Primavera de Praga", cambian la relación de fuerzas mundial. USA ha de abandonar su proyecto político en Asia, que apuntaba directamente contra China, para rehacer el cuadro mundial de la coexistencia pacífica.

A finales de año, Mao hace un

llamamiento a los USA para que se reconcilien con Pekín.

1969 — Junio. Formación del Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur (GRP). Lucha por un gobierno de coalición sobre la base de sustituir al títtere Van Thieu por fuerzas burguesas "nacionales".

1970 — Marzo. Golpe de la CIA en Camboya derroca al príncipe Sihanuk. Objetivo: expulsar las tropas vietnamitas de sus bases en Camboya una vez el Ejército yanqui ha controlado la mayor parte de Vietnam del Sur. Moscú reconoce al nuevo régimen títtere de Lon Nol. A

partir de esto la guerrilla camboyana cobra gran auge, con fuerte respaldo en las movilizaciones campesinas. Sihanuk forma un frente con el PC de Camboya (PCK), el FUNK. Pero será desplazado, retirándose a Pekín mientras el PCK controla la guerrilla del Jmer Rojo.

Mayo. Invasión masiva de Camboya por tropas USA. Nuevo estallido del movimiento antiguerra en los USA, que obliga a ir reduciendo desde este momento las tropas USA en Indochina.

1972 — Febrero. En medio de la escalada de bombardeos USA sobre Vietnam del Norte, Nixon es recibido en Pekín.

Primavera. La primera ofensiva importante del FNL desde el Tet.

Junio. A pesar de que USA ha minado el puerto fundamental de Vietnam del Norte, Haifong, Nixon es recibido en Moscú. Moscú y Pekin decididos a imponer a Vietnam una capitalación.

En este año se producen levantamientos en las ciudades de Camboya.

1973 — Enero. Acuerdos de París. El FNL deja todos los puntos importantes de Vietnam del Sur en manos del régimen títere de Thieu y el enorme ejército que le han construido los USA (que retiran el grueso de sus tropas). Se dice que se va a formar un Consejo de Reconciliación y Concordia Nacional con el régimen títere, el GRP y las "terceras fuerzas" burguesas. Se promete ayuda económica americana a Vietnam del Norte. Y la liberación de los cientos de miles de prisioneros. Los stalinistas vietnamitas presentan ese tratado como una victoria. La Tendencia Mayoritaria Internacional también. Nada de lo prometido se cumple. El régimen títere y la aviación yanqui lanzan la ofensiva más salvaje. El FNL es diezmado y acorralado, sosteniéndose sólo por el apoyo (material y de nuevos cuadros) de la República Democrática de Vietnam (el estado obrero de Vietnam del Norte).

El PCV presiona a los camboyanos para que formen un gobierno de coalición con el régimen títere. El PCK se niega. Hanoi le retira su ayuda, mientras los combatientes camboyanos tienen que hacer frente al mayor bombardeo yanqui. El PCK purga a los provietnamitas. Septiembre. Gobierno de coalición en Laos (en la línea de París). Octubre. Cae la dictadura de Thailandia.

1974 — Febrero. El X Congreso Mundial de la IV Internacional (IV desde la reunificación) aplaza la discusión sobre Indochina para el XI Congreso, que debe celebrarse antes de dos años.

Julio. El PCV considera fracasados los acuerdos de París e iniciada la tercera guerra de liberación.

1975 — Primeros meses. Ofensiva limitada del FNL en Vietnam del Sur. Forma parte de un plan iniciado en el 74 de acciones de presión para conseguir negociaciones políticas. No tiene ni de lejos la envergadura de las ofensivas del 68 o 72. Pero el ejército títere se desmorona y hay fuertes levantamientos de masas. Sorprendidos, los stalinistas se encuentran con la victoria al alcance de la mano y.... exigen el cumplimiento de los acuerdos de París. También lo exigen dirigentes de la IV Internacional

En Camboya se suceden nuevos levantamientos en las ciudades y el régimen títere también se desmorona.

LOS STALINISTAS EN EL PODER

1975 — 17 de abril. Cae Pnom Penh. El PCK, dirigido por Pol Pot, Thieu Sampan, Ieng Sary" lanza al ejército a

deportar a los habitantes de las ciudades al campo. Desmantela el aparato de estado y lanza una política de nacionalización y colectivización a ultranza.

29-30 de abril. Insurrección en Saigón, con protagonismo de los comités de fábrica y de barrio. Fuga de los últimos yanquis y los títeres. Se instala en Saigón el Comité de Gestión Militar, que monta una red de "comités revolucionarios" para controlar el proceso y anuncia la formación de un nuevo sindicato.

15 de abril. El secretario del PCV, Le Duan, declara que el Norte ha de continuar la "construcción socialista", pero en el sur la tarea es levantar un "régimen nacional" y una prospera "economía nacional". Se considera que no habrá unificación por lo menos en cinco años.

6 de junio. El GRP asume funciones.

30 de agosto. Nacionalización de la banca, seguida por las primeras medidas para coordinar las monedas del Norte y del Sur.

Noviembre. Conferencia Consultiva sobre la reunificación. Decide convocar elecciones a una asamblea nacional de todo Vietnam. Paralelamente se hacen llamamientos a la Michelin y otras multinacionales para que reanuden sus actividades en el Sur.

Diciembre. Dirigentes del PCV hablan de la "dictadura proletaria" de todo el Vietnam.

En Laos se rompe el gobierno de coalición. El Pathet Lao en el poder. Movilizaciones antiyanquis.

1976 — 25 de abril. Elecciones estilo stalinista para la Asamblea Nacional.

Julio. Se reúne la Asamblea Nacional. Se forma un gobierno único para todo Vietnam.

Octubre. Golpe militar en Thailandia. El PC y el PS unidos en la

Diciembre. El IV Congreso del PCV aprueba un plan quinquenal 76-80 para todo Vietnam, que va a chocar con el sabotaje capitalista en el Sur.

1977 — 18 de julio. Tratado de amistad y cooperación Vietnam-Laos. Septiembre. Choques militares abiertos en la frontera Camboya-Vietnam.

31 de diciembre. Ruptura de relaciones de Camboya con Vietnam.

Este año se han producido expropiaciones de Michelin y otras empresas extranjeras en Vietnam del Sur.

En Thailandia se ha producido otro golpe de estado militar que pretende hacer concesiones a las masas.

1978 — 7 de febrero. Hanoi propone a Camboya un acuerdo de paz. Rechazado.

23 de marzo. Expropiación de 30.000 capitalistas en Vietnam del Sur, comerciantes fundamentalmente.

16 de abril se acaba con los mercados donde dominaba el mercado negro.

3 de mayo. Se unifica la moneda del Norte y del Sur. Ya hay una econo-

mía unificada en todo Vietnam, liquidado el dominio capitalista en el Sur.

Primavera. Escalada en la guerra de Vietnam con Camboya. Hanoi dedica gran esfuerzo a la ofensiva.

Julio. China niega la entrada a los capitalistas chinos expropiados e intensifica la campaña contra Vietnam. Al mismo tiempo, corta la ayuda económica a Vietnam y acumula tropas en la frontera común.

Agosto. El senador USA McGovern pide la intervención militar en Camboya.

Septiembre. Carter confirma el bloqueo a Vietnam (agobiado por las malas cosechas....) Establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre Japón y Camboya (tres semanas después del tratado chino-japonés patrocinado por los USA).

Otoño. El primer ministro de Vietnam, Phan Van Dong, y el ministro de exteriores de Camboya, Ieng Sary, realizan giras por los países capitalistas de la zona, apoyando a esos regímenes y buscando establecer o mejorar las relaciones. Es un giro brusco por parte de Camboya, hasta ahora aislacionista.

Noviembre. Solemne firma del tratado de amistad URSS-Vietnam. Se desarrolla la ofensiva vietnamita contra Camboya y el apoyo a los burócratas camboyanos disidentes. Prosiguen los levantamientos contra el régimen de Pol Pot.

Australia apoya a Camboya contra el expansionismo vietnamita.

Primeros de diciembre. Hanoi anuncia la formación del Frente Unido Nacional Kampucheano de Salvación Nacional (FUNKSN).

Diciembre. Ofensiva masiva del ejército vietnamita contra Camboya.

15. Carter anuncia el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con China.

29. Carter pone tres condiciones para las relaciones con Vietnam. Una de ellas la paz con Camboya.

1979 — 7 de enero. Pnom Penh cae en manos de un ejército regular de 100.000 soldados vietnamitas y de los rebeldes camboyanos armados por Vietnam (se dice que son 20.000).

28 de enero. Teng Siao Ping en Washington.

1 de febrero. Declaración del SU (publicada en COMBATE). Aprobada por mayoría (la de enero de 1978 era unánime).

12 de febrero. En Intercontinental Press M.A. Waters lanza un planteamiento distinto al del SU y descarta tajantemente la intervención militar en gran escala de Pekin contra Vietnam. (Ya las publicaciones a cargo del SWP habían defendido una línea distinta, en enero. Hubo una interrupción de dos semanas, cuando se publicó la posición del SU).

17 de febrero. China ataca a Vietnam.

20 de febrero. Carter exige la retirada de Vietnam en Camboya para que China se retire de Vietnam.

21 de febrero. Declaración (mayoritaria) del SU sobre la guerra.



1. Lai Chau
2. Hoang Lien Son
3. Ha Tuyen
4. Bac Thai
5. Cao Lang
6. Son La
7. Vinh Phu
8. Ha Son Binh
9. Ha Bac
10. Quang Ninh
11. Hai Hung
12. Thanh Hoa
13. Ha Nam Ninh
14. Thai Binh
15. Nghe Tinh
16. Binh Tri Thien
17. Quang Nam-Da Nang
18. Gia Lai-Kontum
19. Nghia Binh
20. Dac Lac
21. Phu Khanh
22. Song Be
23. Tay-Ninh
24. Lam Dong
25. Kien Giang
26. An Giang
27. Long An
28. Dong Nai
29. Thuan Hai
30. Dong Thap
31. Tien Giang
32. Hau Giang
33. Cau Long
34. Ben Tre
35. Minh Hai

LA CUARTA INTERNACIONAL Y LA REVOLUCION INDOCHINA

1.— LAS ALTERNATIVAS DE LA MAYORIA DEL SECRETARIADO UNIFICADO

La declaración de la IV Internacional "La crisis chino-indochina" afirma que la derrota imperialista de 1975 dió lugar al triunfo de un proceso de revolución permanente que hizo posible el surgimiento de estados obreros en Vietnam, Laos y Camboya, e impulsó las luchas de liberación en Tailandia y otros países. Pero que hoy esas revoluciones se encuentran debilitadas por los conflictos interburocráticos (básicamente el conflicto chino-soviético) y amenazadas por las maniobras imperialistas. Para defenderlas y acabar con las guerras entre estados obreros hay que movilizar al proletariado mundial contra las agresiones imperialistas, y al mismo tiempo luchar por el internacionalismo proletario y la democracia socialista. En concreto, por la revolución política en la URSS y en China, por la retirada de las tropas vietnamitas de Camboya y la formación de una Federación Socialista Indochina Libre, con derecho de autodeterminación.

Este planteamiento sitúa a la IV Internacional en posiciones correctas en una serie de puntos, tan importantes como la lucha contra las agresiones imperialistas y la exigencia de retirada de las tropas vietnamitas de Camboya. Pero estas mismas tomas de posición pueden quedar desvirtuadas por algunos errores:

a. Hay una negativa a luchar por la revolución política en Vietnam, y por la ruptura de los tratados que subordinan Vietnam a la burocracia de Moscú (luchando en cambio, por la ayuda incondicional de la URSS a Vietnam y el frente único contra el imperialismo —de éste sí se habla—).

Sin embargo, la agresión vietnamita a los obreros y campesinos en Camboya ha puesto sobre el tapete la necesidad de derrocar el régimen burocrático de Hanoi. Y oponerse a la forma burocrática en que Hanoi quiere "unificar" Indochina, proponer una federación libre exige plantear la necesidad de la revolución política en Vietnam.

Coherentemente, el llamamiento a construir una internacional revolucionaria no se concreta en la lucha por construir una sección vietnamita de la IV Internacional, enfrentada al PCV. Esto implica que habría que construir la internacional revolucionaria junto con el Partido Comunista de Vietnam. Frente a esto afirmamos que el PCV es un aparato burocrático de estado, stalinista, que oprime a las masas de Vietnam subordinando ese estado al imperialismo.

b. Afirma que hay que ayudar a los trabajadores de Camboya a construir comités y organizaciones de masas, satisfacer sus necesidades materiales y armarse, para que ante una "indispensable" (?) retirada vietnamita no sean el imperialismo y Pol Pot (la fracción stalinista derrocada por el ejército de Vietnam) los beneficiarios. Pero nada dice sobre la necesidad de independencia de las masas camboyanas frente al actual gobierno del FUNKSN, impuesto por Hanoi. Esto abre las puertas a la conciliación con esa fracción stalinista que apoyándose en los tanques de Hanoi está levantando un nuevo aparato burocrático de estado. El hecho de que los burocratas del FUNKSN busquen hoy base de masas en nada altera la relación fundamental que han establecido con ellas, definida no sólo por esos tanques sino sobre todo por ese esfuerzo por imponer a los obreros y campesinos su dictadura de casta. Contra esta posición afirmamos que hay que levantar, frente al FUNKSN, la sección de la IV Internacional, de que tampoco se habla.

c. Defiende la retirada de las tropas vietnamitas, pero no dice qué han de hacer las masas camboyanas ante ellas, que son el auténtico poder en Camboya. Bien está que los trabajadores se organicen para prepararse al enfrentamiento con las guerrillas imperialistas y de Pol Pot en caso de esa "indispensable" retirada. Se supone que ya hoy han de combatir a esas guerrillas. Pero pensamos que la tarea central para la que hoy han de organizarse es la resistencia contra las tropas de la República Socialista de Vietnam, buscando la confraternización con éstas contra la burocracia de Hanoi. Y que los obreros y campesinos de Vietnam han de hacer de la lucha por la retirada bandera fundamental del combate contra el régimen y contra Moscú.

Entre otros (sobre todo omisiones) estos errores en las propuestas comprometen a nuestro entender la independencia de la IV respecto de burocracias stalinistas. Son, pues, un serio obstáculo a la construcción de la IV en todo el mundo

Pero tras esas propuestas políticas hay una comprensión de la lucha de clases en Indochina y en el mundo que, pensamos, contiene errores no menos graves.

2.- EL PCV, ¿UNA BUROCRACIA REVOLUCIONARIA?

La resolución habla de "burocracia vietnamita". Critica su actuación en Camboya y también su monopolio de la información y las decisiones políticas en Vietnam. Dice que, en relación con Moscú, "busca" su orientación internacional dentro del marco de la coexistencia pacífica.

Pero no está por derrocar a esa burocracia (cuestión central planteada por la invasión de Camboya). Hay que suponer que se trata de una burocracia reformable, que puede abandonar esas actuaciones reaccionarias, por ejemplo, en caso de que se alivie la "dependencia objetiva" de Vietnam respecto de Moscú. No estaríamos, pues, ante una casta pequeñoburguesa privilegiada que, junto con la de Moscú y subordinada a ésta, es una agencia imperialista asentada sobre las bases socialistas y los elementos burgueses del estado vietnamita. No habría una burocracia stalinista, sino una dirección con deformaciones burocráticas de origen stalinista, como la teoría del socialismo en un sólo país, y un nacionalismo derivado de esa teoría.

Así, el 16 de enero de 1978, el SU hablaba de que "el peso del stalinismo internacionalmente y la educación stalinista de las direcciones vietnamitas y camboyanas explican en parte el resurgir del nacionalismo en Indochina". El nacionalismo de los gobernantes de Vietnam y Camboya, por tanto, no expresa los intereses nacionales de dos castas, sino los vicios stalinistas que aún quedan en dos direcciones que ya no lo son.

Pareció que el c. Mandel iba a rectificar esta posición, cuando el 15 de marzo del 79 escribía "cada una de esas fracciones de la burocracia —la del Kremlin como la de Pekín y también, ¡ay!, la de Hanoi— sacrifican los intereses generales del proletariado mundial (.....) a los propios intereses particularistas, estrechos y conservadores de defender su propio poder y privilegios". Aunque esta definición tiene problemas, si la burocracia de Hanoi tiene intereses específicos, privilegios, como la de Moscú; si es una fracción de la burocracia, y la de Moscú es otra fracción, entonces es una casta, una fracción de la burocracia stalinista.

Pero la mayoría del SU no ha rectificado. Mantiene la posición de la antigua Tendencia Mayoritaria Internacional, expresada en un proyecto (retirado) sobre Indochina para el próximo Congreso: que el PCV ha roto con el stalinismo, es centrista y ha aplicado una política fundamentalmente revolucionaria. Se necesita una reforma, no una revolución. La actual declaración no saca de manera tan clara como aquel proyecto la conclusión lógica: el PCV debe jugar un papel importante en la recomposición de la vanguardia revolucionaria internacional. Pero luego veremos afirmaciones en ese sentido.

La posición de la mayoría del SU significa: a) que puede haber, sin democracia obrera un estado obrero en que el poder no lo usurpe una casta ajena y hostil al proletariado, sino que lo ejerza la clase obrera directamente, por medio de una burocracia que en lo fundamental representa los intereses obreros; y b) que un partido stalinista puede, bajo la presión de las masas, dejar de serlo para convertirse en un instrumento de la revolución, y por tanto no hay que construir la IV Internacional contra los PCs sino contar con que puede tener esta evolución.

Esta teoría se aplicó antes a Yugoslavia, China, y en varios aspectos a Cuba. Es el viejo pozo envenenado que hoy emponzoña de nuevo a la IV a la hora de dar una alternativa ante los importantes hechos de Indochina. En todos los casos esta posición se ha basado en algo falso: que un PC no se ha opuesto a la revolución, sino que la ha hecho.

Es falso en Vietnam como lo fue en los otros casos. El PCV tiene una negra tradición: tras la Segunda Guerra Mundial concilió con el imperialismo y machacó a los sindicatos y a los trotskistas que los defendían, favoreciendo que la burguesía francesa ocupase de nuevo Vietnam. Después de la derrota del imperialismo francés en 1954 se opuso a la revolución adoptando (en el marco de la coexistencia pacífica) el establecimiento de un régimen títere de los USA en el Sur y oponiéndose a la destrucción del capitalismo en el Norte. Cuando tuvo que expropiar a la burguesía en el Norte impidió la toma directa del poder por el proletariado imponiéndole su aparato burocrático y subordinando el nuevo estado obrero al imperialismo.

Durante la guerra en el Sur (1960-1975) contra los USA marginó (como anteriormente) a la clase obrera y buscó hasta el fin la "unidad nacional" lo que le llevó a ser un obstáculo y a numerosas capitulaciones. Pero además, aunque en el Sur jugaba en parte el papel de partido de masas (campesinas, sobre todo), en esta época el PCV era ya parte del aparato burocrático del estado de Vietnam del Norte. Desde la derrota USA de 1975 se enfrentó a los comités de fábrica y a sus exigencias revolucionarias, mantuvo el capitalismo, desmovilizó. Extendió a Vietnam del Sur todo el aparato burocrático de Vietnam del Norte, imponiéndolo e integrando en él y en consecuencia destruyendo

Si a la mayoría del SU le parece que la invasión de Camboya contradice la acción "revolucionaria" de Hanoi en Vietnam del Sur es porque atribuye a los stalinistas de Hanoi lo que éstos no tuvieron más remedio que hacer (expropiar a la burguesía) para evitar "males peores" (nuevos avances de la revolución obrera), en la relación de fuerzas establecida por la victoria revolucionaria sobre el imperialismo USA. Esta expropiación de la burguesía se hizo por esa victoria y por las relaciones de producción que ya había en el Norte, con el respaldo fundamental de las conquistas sociales obreras en la URSS y en China: ninguno de esos cuatro factores corresponden a ningún mérito de los stalinistas.

En cambio, la mayoría del SU ignora prácticamente lo que sí hicieron los stalinistas de Hanoi, respaldados por Moscú (y también por Pekín): desmovilizar, desorganizar y atomizar al proletariado y campesinado pobre, imponiéndoles un aparato burocrático y subordinando Vietnam al imperialismo. La resolución les embellece al decir que "buscan" una orientación internacional de coexistencia pacífica. Y habla de monopolio de la información y decisión política sin dar relevancia a esto en el análisis.

La resolución no define el proceso por el que se estableció en el Sur de Vietnam un estado obrero (en realidad se extendió al Sur del estado existente en el Norte). Pero buena parte de los firmantes han defendido anteriormente que hubo estado obrero en el Sur desde el 30 de abril de 1975, y así lo defiende todavía el cda. Mandel. Esto quiere decir que desde el momento en que el poder armado está en un país en manos de un partido como el PCV y unas bandas armadas de base campesina y dirección burocrática hay que dar por supuesto que el capitalismo ha sido virtualmente derrocado, y la transformación en estado obrero es segura. Lo mismo que hablamos en Rusia de estado obrero desde el 17 porque había partido bolchevique en el poder. Esto es contrario a los hechos (por ejemplo Austria después de la II Guerra Mundial) y a la tradición de la IV Internacional que habiendo una dirección pequeño-burguesa considera que en todo caso puede darse un proceso de gobierno obrero y campesino que al final conduzca a la formación de un estado obrero. Pero además, en el caso de Vietnam, lo que hay es una asimilación estructural de Vietnam del Sur en otro estado obrero ya existente. Con lo cual, la teoría de estos cda. (que hay que suponer es también la de la resolución) abandona conceptos trotskistas básicos, como el de gobierno obrero y campesino, y el de asimilación estructural.

Es falso que hubiese primero un triunfo de la revolución permanente con surgimiento de estados obreros, pero ahora, ¡ay!, "conflictos interburocráticos". Cuando la burguesía fue expropiada pesaba ya sobre Indochina la actuación contrarrevolucionaria que luego se ha expresado en la invasión de Camboya. Nunca ha habido en Indochina "estados obreros", sin más, sino estados obreros deformados, en que las conquistas revolucionarias se encuentran aprisionadas y minadas por el mar-

co contrarrevolucionario establecido por la burocracia. El PCV no ha sustituido a un partido trotskista, sino que ha actuado ante la revolución de forma diametralmente opuesta. Y para eso se pasaron por la piedra en su día a la sección de la IV.

3.— EL PCV.CONTRA LA REVOLUCION CAMBOYANA

Según la resolución mayoritaria, Hanoi invadió Camboya porque chocó con la negativa de Pol Pot a la unificación de Indochina, y por la agresión militar camboyana inspirada por Pekín (en respuesta a los proyectos unificadores y lazos de Hanoi con Moscú). Comitió el error de emplear un método incorrecto. Hubiera debido apoyar a los burócratas del FUNKSN para que consiguiesen base de masas y derribasen a Pol Pot.

Dice que la invasión no tuvo nada que ver con peligros de revolución política en Camboya; ni parece que tuviese que ver con la coexistencia pacífica. Tampoco se dice que Moscú tuviese parte en el asunto. Pensamos que esos tres factores son la clave para explicar la invasión.

Examinemos los diversos motivos que se presentan para explicarla:

a) **LOS MOTIVOS MILITARES.**— Los ataques del ejército camboyano y el ataque de Pekín en todos los terrenos del que aquellos formaban parte, son graves. Es claro que un motivo fundamental de la invasión ha sido quitar de en medio al régimen camboyano, que desgastaba al estado y al régimen de Vietnam. Como dice la resolución, desde el punto de vista obrero el remedio es peor que la enfermedad. La solución adoptada es la forma más radical de suprimir la agresión fronteriza de Camboya, pero tiene unos costes políticos, económicos y militares muy elevados. No hay ninguna prueba de que la agresión militar determinase ese tipo de respuesta militar. Todo parece indicar lo contrario.

b) **LOS FACTORES ECONOMICOS.**— En cuanto al proyecto de Hanoi de "unificar" Indochina (que según un artículo de "Combate" de la LCR hace jugar a Vietnam un papel objetivamente revolucionario), no son sólo los métodos los que fallan. En el terreno económico, una cosa

sería avanzar hacia una planificación conjunta en beneficio de los trabajadores, que robusteciese su unidad, y otra, opuesta, la pretensión de Hanoi de controlar Indochina para aliviar las tensiones económicas de Vietnam y así preservar su dominación burocrática conteniendo a las masas vietnamitas. Esto es un plan de "pillaje", al que los cc. de la OCI dan mucha importancia. Debería quedar clara la contraposición. El cda. Mandel plantea serias pegas a que estos motivos económicos fuesen los decisivos. Y efectivamente, parece claro que la invasión tuvo:

c) **MOTIVOS POLITICOS**, que son los fundamentales, y forman parte del proyecto "unificador" de la burocracia vietnamita, que no es sólo económico. Pero, ¿cuáles son esos motivos?. En su artículo del 15 de marzo, el cda. Mandel había apuntado lo siguiente:

"Cualquier forma de desarrollo político e ideológico autónomo en cualquier estado obrero, independientemente del nivel inmediato de movilizaciones de masas en él, es visto por el Kremlin como una amenaza a su dominación. Cualquier forma de desarrollo político e ideológico autónomo en cualquier estado de Asia es visto igualmente por Pekín como una amenaza a su dominación, en última instancia también a su dominación en China. Y cualquier desarrollo de autonomía política e ideológica en cualquier país indochino o fronterizo es visto también por Hanoi como amenaza a su dominación, incluso en Vietnam. En esto, y en nada más, están las raíces políticas objetivas de guerras potenciales entre estados obreros burocratizados".

La resolución no ha recogido esto ni nada de lo que en el artículo del c. Mandel indicaba la existencia en Vietnam de una casta. Sólo atribuye motivos de este tipo a los actos de China y la URSS (ver más adelante).

Pero ésta explicación no es suficiente. (1). Hanoi no ha atacado solo a un estado que no aceptase su ley sino que ha invadido otro estado cuyo régimen burocrático estaba en crisis. La mayoría del SU reconoce que el régimen de Camboya había venido a depender (en grado extremo) del ejército y el aparato, por la pérdida de respaldo social. Sin embargo, atribuye a las masas camboyanas una total pasividad. En realidad, la enajenación aguda de las masas respecto del régimen da una especial significación a los levantamientos locales ocurridos —y es difícil separar las escisiones del aparato de esos procesos de masas—. De la constatación de la crisis de Pol Pot los trotskis-



tas deberíamos concluir ante todo la actualidad de la revolución política que esos levantamientos anunciaban. Nos tememos que Hanoi haya sido más consciente de esto que la mayoría del SU. Intervino para cortar una dinámica de movilización de masas imponiendo el gobierno de otra fracción de la burocracia, sometida a Hanoi y dispuesta a hacer algunas concesiones a las masas para dar estabilidad al poder burocrático. El proyecto "unificador" de Hanoi pretende asegurar el orden burocrático en Indochina con más firmeza que pueden hacerlo las burocracias más débiles de Laos y Camboya. (2).

Aunque no considera que esto fuese un motivo de la invasión de Camboya, la declaración no ignora el objetivo de instalar al FUNKSN en el poder. Pero, de nuevo, critica los métodos, no al FUNKSN. Lamenta que Hanoi no haya impulsado la reconstrucción del PC de Camboya como partido de masas organizando la lucha popular contra Pol Pot. El c. Mandel lo desarrollaba:

"Habría sido correcto que el PCV apoyase movimientos populares que expresasen los deseos de la mayoría aplastante de los obreros y campesinos camboyanos. Con este método habría podido cristalizar una auténtica nueva dirección del PC de Camboya que, aunque teñida por sus orígenes stalinistas y fuertemente inclinada a una posterior burocratización, podría al menos haber jugado un papel similar al de la dirección de Nagy en Hungría o la de Dubcek en Checoslovaquia, es decir, abrir el camino a genuinas movilizaciones de masas y con ello a una auténtica revolución política"

Pensamos que la IV I. no debe promover direcciones stalinistas (qué no es tinte) enemigas de la movilización de masas y de la revolución política, como la de Dubcek, la de Nagy o la del FUNKSN. Otra cosa es que si tales direcciones se encuentran al frente de movimientos revolucionarios de masas, la IV I. lleve una política de frente único.

En cambio, hasta cierto punto, el c. Mandel admite lo que él y la mayoría del SU niegan: que la crisis de Camboya planteaba una alternativa: o la revolución política o ... Hanoi halló otra solución, la invasión, que era un servicio al imperialismo por cortar la lucha de masas contra Pol Pot. Es, pues, insuficiente, decir que el imperialismo se aprovecha de un método incorrecto. El mismo plan político de "estabilización burocrática" de Indochina, está al servicio del imperialismo.

Esto no significa que el imperialismo se contente con la solución de Hanoi. Esta es sólo un paso. El imperialismo ha de explotar la división obrera que esta solución crea, para su propio plan, que no es hoy el de Hanoi, no es controlar el área por medio de una burocracia fuerte ligada a Moscú, sino hacer retroceder la revolución Indochina.

Ignorar la invasión va contra la revolución política y es un servicio directo al imperialismo (parte de la coexistencia pacífica que Hanoi practica —y no sólo "busca"—) es ignorar los elementos fundamentales de lo ocurrido.... aunque permite evitar la lucha por derrocar una burocracia a la que no se quiere reconocer como casta hostil al proletariado.

Como es ignorar un elemento fundamental el llamativo silencio de la resolución sobre el papel de Moscú en la invasión a Camboya.

4.— COEXISTENCIA Y CONFLICTOS INTERBUROCRATICOS

Según la mayoría del SU:

a) La revolución indochina choca con dos obstáculos que se combinan: los conflictos interburocráticos y las agresiones imperialistas. Estos dos factores ya se habían combinado antes de 1975.

b) El imperialismo además de emplear sus propias fuerzas interviene directamente en azuzar los conflictos entre burocracias (respaldo a la invasión de Vietnam por China).

c) En el centro de los conflictos burocráticos de Indochina se sitúa el conflicto chino-soviético. Moscú atacó primero a China. Pekín ataca ahora a Vietnam, entre otros motivos por los lazos entre Vietnam y Moscú. Y en este ataque utiliza al régimen camboyano de Pol Pot. Vietnam se defiende incorrectamente, invadiendo Camboya. Moscú no ha intervenido directamente en los recientes choques armados, pero tiene la responsabilidad de haber iniciado y mantener el conflicto con China y la de no haber defendido a Vietnam ante la agresión china.

d) Tanto Moscú como Pekín buscan: 1. mantener el monopolio político y el control de sus propias esferas de influencia, para asegurar el monopolio de poder que ejercen en sus propios países, y del que se derivan los privilegios de la burocracia. 2. También buscan adquirir medios (influencia, control) para desarrollar su política de coexistencia con el imperialismo, asegurándose bases para jugar un papel directo en el mantenimiento del status quo internacional.

El conflicto entre Moscú y Pekín deriva de la competencia en asegurarse zonas de influencia y capacidad de negociación con el imperialismo y de la distinta forma en que la política de cada uno de ellos encaja con los planes imperialistas. En este caso con la contraofensiva imperialista en Indochina.

e) No se puede considerar que entre Moscú y Pekín hay uno de ellos más progresivo o reaccionario que el otro. En el Este de Asia el imperialismo confía fundamentalmente en Pekín, mientras que Moscú no tiene peso ahí. Pero el superior peso internacional de Moscú hace que el imperialismo le necesite y no esté dispuesto a sacrificar los pactos con Moscú por darse con Pekín. No hay una alianza global Washington-Pekín contra Moscú.

Este enfoque presenta dos problemas fundamentales. Uno de ellos se refiere al papel de Vietnam y Moscú. Otro a la caracterización de la política de las burocracias y su relación con el imperialismo.

Empezamos por esto último. Si las burocracias buscan en primer lugar asegurar el monopolio de poder en sus países, del cual derivan sus privilegios, hay que lamentar que la resolución se mantenga una y otra vez a ese nivel, sin explicar contra quién se ejerce fundamentalmente ese monopolio y se defienden esos privilegios. Habría que subrayar precisamente que no es un problema de democracia formal, ni de desigualdades sociales secundarias, sino una lucha entre fuerzas sociales antagónicas: la casta burocrática pequeñoburguesa frente al proletariado, a la revolución política. Ese es el enemigo fundamental, y en vez de vagas referencias a la "crisis interna china" habría que referirse al salto adelante dado por la movilización y conciencia de las masas chinas desde 1976. Por supuesto, el monopolio de poder se ejerce también contra las fuerzas directas y propiamente restauracionistas, pero en la relación de fuerzas existente desde 1943, y mucho más desde 1968, no es la amenaza fundamental para la burocracia.

Para impedir la revolución proletaria en sus países, las burocracias stalinistas tienen que oponerse a la revolución proletaria en todo el mundo. La resolución señala que Pekín quiere restablecer el status quo en la región, limitar lo más posible las repercusiones de la victoria de las revoluciones indochinas, debilitar por todos los medios al estado vietnamita. Que lleva en el Este de Asia una política contrarrevolucionaria. Efectivamente, la revolución indochina, cambiando la relación de fuerzas mundial, amenaza a Pekín. Y a Moscú.

Esta oposición a la revolución alinea a la burocracia con el imperialismo como agencia de éste en su propio país y fuera de él. (Por supuesto, la burocracia defiende las bases en que se asienta —las bases socialistas y los elementos burgueses del estado obrero deformado o degenerado— pero la propia forma de realizar esa defensa contribuye a minar las bases socialistas. La política global de la burocracia es siempre contrarrevolucionaria, trabaja para la restauración capitalista en última instancia). La revolución indochina, como en general el ascenso mundial de la lucha obrera, empuja a Pekín y Moscú a estrechar la colaboración con el imperialismo. Todos los planes y toda la intervención de Moscú y Pekín hay que verlos en relación a los planes y las ofensivas del imperialismo, que es la cabeza del bloque contrarrevolucionario.

Sólo dentro de esta definición global de la política stalinis-

ta pueden y deben situarse aspectos parciales de la misma a que se refiere el documento, como la búsqueda y defensa de áreas de influencia, del monolitismo en el movimiento obrero.... para contener la revolución. Y los intentos de mejorar su posición negociadora con el imperialismo, que también exigen ese control de sectores del movimiento obrero. Y el choque entre distintas burocracias por las desigualdades en las tácticas respectivas, debidas a situaciones objetivamente distintas en que se encuentran, etc. Por ejemplo, hemos visto cien veces a Moscú sacrificar áreas de influencia por exigencias superiores de la contrarrevolución.

Por tanto, desorienta profundamente que la resolución defina la política de la burocracia como mantener el monolitismo para salvar su monopolio de poder.... y también adquirir bazas para la coexistencia pacífica. Parece que la colaboración contrarrevolucionaria con el capital sea un aspecto de la política de la burocracia; que los stalinistas al buscar el monolitismo no están actuando como agencias del imperialismo mundial. Hay que situar claramente el monolitismo en relación a la política contrarrevolucionaria, evitando un planteamiento formal, lo mismo que hemos dicho sobre el monopolio de poder. Es muy cierto que "cualquier desarrollo autónomo" es visto como una amenaza independientemente del nivel inmediato de movilización de masas (siempre se ve en él la amenaza obrera). Pero la gravedad de esa amenaza sí depende de la movilización de masas. No sería tan grave para la burocracia china la negativa de Hanoi a someterse a su ley si no estuviese al medio la revolución indochina.

Desorienta también profundamente que se diga que se combinan como obstáculos a la revolución indochina los conflictos interburocráticos y la agresión imperialista. Sobre todo cuando esos conflictos se atribuyen a la búsqueda del monolitismo, y también exigencias de la coexistencia, en lugar de ver los conflictos como un aspecto de la colaboración contrarrevolucionaria con el imperialismo. Todo esto separa el imperialismo de la actuación burocrática, en lugar de presentar al imperialismo y las burocracias que colaboran con él. Habría que decir que contra la revolución indochina se conchaban los imperialistas, Moscú, Pekín.... Que las burocracias stalinistas llevan una política de agresión a la revolución indochina, en la que el papel de Moscú y el de Pekín se complementan, y situar el conflicto entre Moscú y Pekín como un aspecto de esto. Porque antes y después de 1975 Moscú y Pekín han coincidido en aspectos fundamentales de la política indochina.

Esta confusión que puede dar pie a pensar que la colaboración con el imperialismo es sólo un aspecto de la política stalinista puede dar la idea de que la burocracia no pertenece plenamente al campo burgués, como si oscilase entre imperialismo y revolución, y en parte fuese obrera. No es que queramos estirar malévolamente las cuestiones, sino que tenemos en cuenta que la antigua Tendencia Mayoritaria Internacional

había defendido que la burocracia era una fracción de la clase obrera con aspiraciones pequeñoburguesas. El fragmento antes citado del c. Mandel acusa a los stalinistas de contraponer sus intereses particulares a los intereses generales del proletariado, frase que puede ser entendida en el mismo sentido.

Si partimos de la importancia mundial de la revolución indochina, que ha alterado la relación de fuerzas mundial, es claro que Moscú ha de sentir fuertemente este impacto y reaccionar contra él.

¿No tiene posibilidades?. Es falso, pues precisamente la burocracia de Moscú tiene un peso privilegiado sobre Vietnam, país clave.

Moscú ha jugado un papel decisivo: SOLO SU RESPALDO HA PERMITIDO A LA BUROCRACIA DE HANOI IMPONER A LAS MASAS SU APARATO BUROCRATICO Y CONSEGUIR QUE EL ESTADO OBRERO UNIFICADO NACIESE DEFORMADO. Y ESTE HA SIDO PROBABLEMENTE EL LOGRO MAS IMPORTANTE DE LA CONTRARREVOLUCION EN EL ASIA ORIENTAL EN LOS ULTIMOS AÑOS. Al no aceptar esto, la mayoría del SU tiene que concluir en el absurdo de que Moscú se haya casi desentendido de la terrible amenaza que es el foco revolucionario indochino.

El respaldo de Moscú ha sido también fundamental para la invasión de Camboya, (ver mas adelante), y —como dice la resolución— su actitud es cómplice de la agresión militar China contra Vietnam.



5.- EL PAPEL DE MOSCÚ EN INDOCHINA

Es correcto que la resolución se oponga a considerar la política del Kremlin ea menos reaccionaria que la de Deng Siao-ping, y a cualquier división del mundo en dos campos: USA-Pekín por un lado, y del otro lado URSS, Cuba y Vietnam.

Es cierto que Pekín juega un papel fundamental en mantener el orden burgués en el Este de Asia.

Pero se dice: "Aunque la URSS actualmente no ejerce un peso decisivo en el Este de Asia, ha demostrado su buena voluntad, por ejemplo dando garantías al régimen Thai".

En conjunto, la resolución mayoritaria del SU comporta graves obstáculos a la construcción de la Internacional. Su alternativa para Indochina ignora puntos centrales de independencia de clase y abandona la tarea de construir secciones de la Cuarta. Estos errores se desprenden de un planteamiento político que no se enfrenta al proceso contrarrevolucionario que determinó que el estado obrera vietnamita naciese deformado. No sólo ignora el objetivo contrarrevolucionario de la invasión de Camboya y su lugar en la coexistencia pacífica, sino que incluso la definición de la política de Moscú y Pekín padece a otro nivel, de deficiencias similares al no establecer claramente la política globalmente contrarrevolucionaria de ambas burocracias. Todo ello lleva a que en la cuestión crucial de los conflictos indochinos la IV no aparezca como una fuerza consecuentemente independiente del stalinismo.

permitieron este comportamiento, que habría sido imposible de todo punto en otros países.

La resolución de la minoría del SU reconoce que se suprimió la propiedad privada —incluso de los pequeños campesinos— y se destruyó el aparato de estado burgués, pero pretende que Camboya siguió siendo capitalista. Porque, dice, para que surja un estado obrero no bastan nacionalizaciones, es necesaria una revolución social profunda (mejoras para las masas trabajadoras, de forma que la transformación de las relaciones de producción se realice en beneficio de ellas, y ellas sean las defensoras de la propiedad nacionalizada). Esto se demostró "con toda claridad en las revoluciones rusa y cubana, donde direcciones revolucionarias dirigieron conscientemente el levantamiento de masas. También se mostró en las revoluciones socialistas deformadas por direcciones stalinistas —desde los derrocamientos del Este de Europa y China hasta las transformaciones sociales que alcanzaron un punto de inflexión decisivo el año pasado en Vietnam—". Sin esto, las expropiaciones sólo pueden conducir a una acumulación primitiva privada por parte de la pequeña burguesía del aparato estatal. Las nacionalizaciones de Camboya se equiparan a las de otros países capitalistas, y no son ninguna conquista de los trabajadores.

A esto hay que objetar:

a. Si además de nacionalizaciones hay monopolio estatal del comercio exterior, sustitución de la economía de mercado por la planificación.... esas relaciones de producción tienen un carácter de clase obrero. Tienen una dinámica, que no es la acumulación de capital privado. La burguesía no puede recurrir a establecer esas relaciones de producción para preservar y reestructurar su dominación. Sobre estas bases sólo se puede dar una acumulación de otro tipo, y es normal que desde distintos ángulos del movimiento trotskista se haya señalado que la posición asumida por la minoría del SU sobre Camboya está a un paso del capitalismo de estado. (Se puede añadir que es por lo menos insólito que el capitalismo se mantenga en un país apoyándose en unas relaciones comerciales centradas en China, Corea del Norte, etc.). Es eludir por completo la cuestión marxista básica de las relaciones de producción el salir por la tangente con la afirmación de que la existencia de nacionalizaciones no determina que un estado sea obrero. Estamos haciendo referencia a unas relaciones de producción globales, a los distintos elementos que, conjuntamente (y no sólo nacionalizaciones) determinan el carácter de clase del estado. Elementos cuya existencia va pareja en Camboya a:

b. La destrucción del aparato estatal burgués fue en Camboya probablemente más completa que en ningún otro caso salvo la URSS. Según la tesis de la minoría del SU, en unas condiciones de auge revolucionario en toda Indochina (1975), la burocracia militar del Jmer Rojo, montada sobre el torrente revolucionario de las masas camboyanas, habría tenido la suficiente fuerza como para levantar de raíz un nuevo aparato de estado burgués. Es más, este se habría levantado sin apoyarse para nada en fuerzas sociales, ni políticas, burguesas en Camboya, ni siquiera campesinos acomodados (ya antes de 1975, el JR había expropiado campesinos). Y sin apoyarse tampoco en el imperialismo, con el que se había cortado prácticamente toda relación. Sólo con el apoyo de la burocracia de Pekín y la la Hanoi. Esto contradice toda la experiencia de las revoluciones de nuestro siglo: si los stalinistas se aferran desesperadamente a coaliciones, aparatos de estado burgueses, es porque saben que por sí mismos no pueden sustituir a la burguesía. La lucha de clases deja de ser lucha de clases, o bien.... esa burocracia es ella misma una fracción de la burguesía, como dicen los capitalistas de estado.

c. La minoría del SU no menciona los "otros estados capitalistas" con los que se puede equiparar a Camboya. El c. Feldman y el c. Clark han mencionado Egipto, Mozambique, Angola.... Pero en esos países no sólo se mantuvo la propiedad privada de la pequeña burguesía, sino también el comercio y los mecanismos fundamentales de mercado. Y en el caso de Egipto, que es el más típico por sus extensas nacionalizaciones, fue precisamente el viejo aparato de estado burgués el protagonista claro del proceso de modificación de las estructuras burguesas. El "estatismo" de estos países se da en el marco del predominio de las leyes de mercado, coexistiendo con un fuer-

te peso de propiedad privada, y precisamente por ello en definitiva sirve para fomentar la acumulación privada. (4).

d. Por suerte, la resolución no se hace eco, al menos expresa y claramente, de las opiniones expresadas por el c. Feldman en numerosos artículos en el sentido de que para que surja un estado obrero las expropiaciones deben realizarse mediante grandes movilizaciones de masas. En realidad, en el surgimiento de estados obreros deformados han jugado un gran papel los métodos burocrático-militares (presencia del Ejército soviético en el Este de Europa, peso de ejércitos campesinos dirigidos por el PC en otros países). Trotski señaló que no se podía destruir el poder burgués sólo con esos métodos, sino que había que recurrir a la movilización de las masas (aunque fuese limitada). La experiencia desde la II Guerra Mundial ha mostrado que cuando las masas, mediante luchas revolucionarias de gran envergadura, han dejado en ruinas el poder burgués, no siempre es preciso para darle la puntilla recurrir a nuevas movilizaciones de masas. Cuando en abril de 1975 las tropas del Jmer Rojo entraron en Pnom Penh, el poder económico y político burgués estaba hundido con el régimen títere de la CIA, por el levantamiento de masas. Y en ese mismo momento el nuevo gobierno emprendió el desmantelamiento de los restos de ese poder. En Camboya hubo mucha más continuidad entre la acción revolucionaria de las masas y la transformación revolucionaria que en la gran mayoría de los demás estados obreros deformados. Precisamente para contrapesar esto tuvo la burocracia que emprender también una acción más enérgica contra el proletariado. (5).

e. En definitiva, el argumento decisivo para los cc. de la minoría del SU es que la expropiación de la burguesía no fue acompañada de una mejora en las condiciones de vida y trabajo de las masas que haga que éstas consideren suya la propiedad nacionalizada y la defiendan. No hay ninguna relación, se pretende, entre las expropiaciones y las masas trabajadoras, y por tanto las relaciones de producción no pueden ser obreras (cayendo entonces en la contradicción de atribuir a la burguesía esas relaciones de producción antagónicas con el capitalismo).

Sin embargo, el establecimiento de relaciones de producción que representan bases socialistas, realizado por métodos burocrático-militares, ha representado también en otros casos ataques a las condiciones de vida y trabajo de las masas. Antes de que estallase en la IV I. la actual polémica, el c. Victor, en su Informe al Comité Central del 6 de enero de 1979, describía así el proceso de transformación de los estados del Este de Europa en estados obreros deformados en 1947-49:

"El apoyo inicial real con que contaban los PCs por parte de las masas trabajadoras (después de la II Guerra Mundial) desapareció en el último período (el de expropiación de la burguesía). La industrialización fue realizada a costa de una reducción de los salarios obreros, los pequeños campesinos, que apoyaron la lucha contra los terratenientes y kulaks, fueron brutalmente expropiados en las colectivizaciones forzosas. Las aspiraciones nacionales de esos países, fuertemente desarrolladas además en la lucha contra el invasor nazi, fueron salvajemente aplastadas, así como ahogadas todas las libertades bajo el terror policiaco." (subrayados del original, paréntesis añadidos)

En la URSS y en China se produjeron también ataques en gran escala contra las condiciones de vida de obreros y campesinos que fueron ligadas a procesos no de surgimiento sino de consolidación burocrática del estado obrero.

Tampoco es original que una burocracia stalinista acompañe la expropiación de la burguesía de una fuerte represión. El propio c. Feldman los explicaba así en noviembre de 1976 hablando de las perspectivas entonces planteadas en Vietnam:

"El peligro de que los stalinistas giren hacia la represión política en gran escala será especialmente grande cuando el régimen realice su promesa de actuar contra los restantes capitalistas y terratenientes".

"En los países de Europa Oriental y China el período equivalente vio la imposición de estrictos regímenes policia-

cos, que eliminaron la estrecha libertad de disenso que se había permitido anteriormente. La tarea de reprimir a los contrarrevolucionarios procapitalistas activos se usó como pretexto para atacar los derechos democráticos con el objetivo de preservar la dominación burocrática contra las masas."

"En Europa Oriental, una vez destruido el capitalismo, Stalin lanzó purgas generales dirigidas a eliminar toda posible disidencia. En 1952, cuando los maoístas empezaron a tomar las medidas que condujeron finalmente a la eliminación del capitalismo, ordenaron el arresto y encarcelamiento sin cargos o juicio alguno de decenas de trotskistas."

"Si los stalinistas vietnamitas realizan represiones similares, se puede esperar que las víctimas, cualquiera que sea su verdadera orientación política, serán acusados de ser colaboradores y agentes de los imperialistas y de sus antiguos clientes de Saigón. Los disidentes de Vietnam del Norte que criticaron las prácticas burocráticas tuvieron que enfrentarse a las acusaciones de ser 'espías-cuadros' para la guerra psicológica de la camarilla USA-Diem' y recibieron condenas de prisión para su 'reeducación'." (Contra la Corriente n 3, febrero 77, pag. 32)

Esto nos puede ayudar a comprender que en Camboya el surgimiento de un estado obrero deformado se haya realizado enajenando al proletariado y masas oprimidas de los que en realidad eran conquistas ganadas con su lucha contra el imperialismo, e imponiendo a obreros y campesinos un régimen policial. Obligada por la relación de fuerzas a acabar con la burguesía so pena de que se produjese una victoria proletaria completa, la burocracia emprendió una represión feroz y buscó afirmar su propio poder "resolviendo" burocráticamente las contradicciones económicas agudísimas en que se encontraba Camboya al día siguiente de la guerra antimperialista. Con ello provocó enormes distorsiones económicas y la hostilidad de sectores de masas cada vez más amplios. Pero la burocracia no puede emplear el método proletario de resolver esas contradicciones económicas: reforzar la unidad del proletariado y la alianza con los campesinos pobres mediante la mejora mayor posible de sus condiciones de vida y trabajo y el desarrollo de la democracia socialista, y sobre todo recurriendo a la solidaridad del proletariado internacional y su lucha revolucionaria. Los cc. de la minoría del SU señalan que el aplastamiento de las fuerzas sociales capaces de desarrollar la lucha anticapitalista por Pol Pot tuvo un efecto destructivo para la alianza entre obreros y campesinos. Era precisamente esta la acusación de la Oposición de Izquierda de la URSS a Stalin. Es patrimonio del trotskismo la defensa de una concepción internacionalista y política de la Dictadura del Proletariado, que pone por delante la lucha revolucionaria mundial y el reforzamiento de la unidad del proletariado y su alianza con el campesinado.

Esta imposición del aparato burocrático y enajenación de la clase es el motivo de que cuatro años después de la supresión del capitalismo en Europa del Este se levantasen los obreros de Alemania Oriental contra el régimen stalinista. Y de que apenas tres años después de un proceso más brutal empezasen los levantamientos de masas en Camboya contra el régimen de Pol Pot.

Sin embargo, es abusivo y simplista pensar que ese proceso de enajenación de la clase respecto de sus conquistas sea total. Mediante un proceso de este tipo estableció Stalin la planificación a largo plazo —reivindicada por la Oposición de Izquierdas—, y en la II Guerra Mundial el proletariado soviético defendió heroicamente, como suyas, esas conquistas. Esto ha ocurrido también en países que nunca tuvieron una revolución de Octubre. El c. Hansen señalaba:

"Pero las masas no estaban enteramente ausentes cuando Stalin dio al fin la orden de llevar adelante el derrocamiento del capitalismo en el Este de Europa....."

"Sin embargo, desde el exterior no era posible todavía estar completamente seguros de que la conciencia socialista de las masas no hubiese sido destruida por el stalinismo. Hasta que el levantamiento húngaro de 1956 confirmó de una manera decisiva su existencia continuada. Las masas

mismas, en un levantamiento espontáneo, organizaron consejos revolucionarios que a la cabeza de las consignas de la revolución política colocaron la defensa de la economía nacionalizada y planificada". (Carta a Bob Chester, 1969)

"Desde el exterior", los cc. de la minoría del SU pueden haberse apresurado demasiado al afirmar que "las 'nacionalizaciones' y 'colectivizaciones' del régimen de Pol Pot no tenían nada que ver con la expropiación de los capitalistas y terratenientes por la que habían luchado los obreros y campesinos" y que las "nacionalizaciones y los campos de trabajo forzoso (1) de Camboya no eran una coquista de los trabajadores ni constituían en modo alguno un paso hacia la solución de los problemas sociales y económicos a que se enfrentan las masas camboyanas". Hay indicios de todo lo contrario: la crisis del régimen de Pol Pot no ha sido rentabilizada seriamente por las guerrillas pro-imperialistas del Jmer Serai. Es decir, que la lucha de masas contra Pol Pot se había iniciado en el marco de la defensa de la economía nacionalizada y planificada. Los ejércitos de Hanoi han impedido probablemente que las masas camboyanas nos diesen una "confirmación decisiva" como la de Hungría. Hanoi tenía todos los motivos para impedir una Hungría en sus propias fronteras.

Las escisiones de burocratas del Partido Comunista de Camboya durante el año pasado, en un marco de levantamientos de masas locales sin duda responden a la convicción de que no se podía mantener indefinidamente una línea como la de Pol Pot, que la burocracia tenía que hacer concesiones. Se ha plasmado en el programa del FUNKSN. Esto corresponde a lo ocurrido en todos los estados obreros deformados o degenerados. En todos ellos, en mayor o menor grado ha habido ataques brutales a las masas por la planificación burocrática, y en todos ellos se han producido oscilaciones, alternando ataques con obligadas concesiones para contener la dinámica de la revolución política (la nueva política china es el último ejemplo). Normalmente, esas "reformas" incluyen elementos correctos, pero tienen una dinámica de reforzamiento de los elementos de mercado, que no hace sino agravar las contradicciones económicas y, a medio plazo, exigir nuevos ataques a los trabajadores. Una y otra vez, aparece como único defensor de la economía planificada la clase que con su lucha internacional determinó que se implantase, consciente de que esas bases socialistas son bases para unas mejoras en sus condiciones de vida y trabajo que la burocracia le escamotea. Aunque hubiese podido parecer que el proletariado estaba ausente de la economía de esos países, cosa falsa.

EN CONCLUSION, pensamos hay que afirmar que el gobierno de Pol Pot, obligado por las victorias de la revolución obrera en Indochina, adoptó una serie de medidas anticapitalistas —destrucción del aparato de estado, expropiación de la burguesía, establecimiento de unas relaciones de producción que comportan bases socialistas— en ruptura abierta con el imperialismo, que son propias de un gobierno obrero y campesino, y dieron lugar al surgimiento de un estado obrero, cuyas características nada tiene que ver con las de un estado burgués en bancarota o descomposición. Sin embargo, ese gobierno de una burocracia militar stalinista se nos muestra como un gobierno contrarrevolucionario. Ese estado no es un estado obrero, sino un estado obrero burocráticamente deformado, que se ha levantado mediante el enajenamiento del proletariado y de crecientes masas del campesinado pobre. El proceso de surgimiento de ese estado no puede entenderse al margen de factores internacionales decisivos: la relación de fuerzas impuesta por la revolución vietnamita, el respaldo de la existencia de los estados obreros de China y Vietnam del Norte, la vinculación del PC de Camboya con las burocracias de China y de Vietnam del Norte.

La extrema represión de Pol Pot (no más brutal que la de Stalin, sin embargo) y la manifiesta enajenación entre el proletariado y sus conquistas (idéntica en lo sustancial a la que se da en otros estados obreros deformados) ilustran claramente que la palabra "deformados" no es un matiz ni un complemento, sino que define una realidad sustancialmente distinta a un estado obrero sano. Que ante esa realidad camboya-

na surjan en las filas trotskistas protestas airadas negando que ese estado sea como la URSS o China... o Vietnam, objetivamente constituye un embellecimiento de los regímenes stalinistas antiobreros.

En cuanto al gobierno que dió a luz ese engendro que incluye conquistas obreras, recordaremos que el c. Hansen definía de esta forma los rasgos característicos de un gobierno obrero y campesino: "Lo más decisivo es la práctica en relación a la estructura del estado capitalista sobre la que se asienta. Si un gobierno que se llama "socialista", como es el caso del régimen de Nasser, se limita a restablecer la vieja estructura estatal e interviene en la estructura económica siguiendo las líneas del "estatismo", la dirección de su movimiento claramente no es hacia el establecimiento de un estado obrero. También es de importancia capital el contexto social: se requiere la implicación de las masas a escala revolucionaria, porque esto es lo que determina básicamente la dirección del movimiento. También son muy indicativas las relaciones con las potencias imperialistas. En el caso de Argelia, por ejemplo, fue muy revelador el papel jugado por el imperialismo en el derrocamiento de Ben Bella y el apoyo a Bumedíán. Los capitanes del capitalismo mundial son exquisitamente sensibles sobre estas cuestiones". (Texto antes citado, subrayados nuestros)

Sin estatismo burgués ni restablecimiento de la vieja estructura estatal, actuando acto seguido de una aplastante victoria de la lucha revolucionaria contra el imperialismo, y con un corte muy radical de las relaciones con las potencias imperialistas, el gobierno de Pol Pot no pudo mantener el capitalismo en Camboya. Lo derrocó rápida y drásticamente. Y por eso se convirtió en "el enemigo número uno" según Carter y todos los gobiernos capitalistas desde 1975 hasta mediados de 1978. La "exquisita sensibilidad" de los imperialistas desmiente la versión de la minoría del SU según la cual mientras en Vietnam y Laos había gobiernos obreros y campesinos que avanzaban en dirección a establecer estados obreros, en Camboya había un gobierno que iba en dirección contraria.

Ahora bien, la dirección del movimiento de ese gobierno no era simplemente realizar medidas anticapitalistas. No era identificarse con la dinámica de las masas como indica la consigna de gobierno obrero y campesino, sino todo lo contrario. Al final del proceso nos encontramos, como en todo estado obrero deformado, con un PC de Camboya que es simplemente un aparato de opresión de las masas, y ha perdido (de manera más completa y rápida que en otros casos) los lazos que anteriormente tenía con los trabajadores como partido basado en ellos. Es más, y en 1975 el PC de Camboya, conservando en parte esa relación con las masas (fundamentalmente campesinas) era sobre todo una burocracia militar y una burocracia estatal en las zonas liberadas, forjada a lo largo de los ocho años de guerra. El embrión de la burocracia estatal sta-

linista se había forjado en esos años. Por ello hablar de gobierno obrero y campesino puede ocultar una confusión. Por lo menos, hay que decir que no era simplemente un gobierno obrero y campesino. Aunque ese gobierno burocrático cumplió, precisamente para preservar su propio aparato y servir lo mejor posible en medio de una revolución los intereses del orden burgués mundial, tareas de gobierno obrero y campesino.

Como hemos dicho en el capítulo 2 al hablar de Vietnam, este tipo de gobiernos stalinistas, aunque cubran una serie de tareas de gobierno obrero y campesino, de ningún modo sustituyen la labor que haría un partido trotskista. No hay una etapa en la que la burocracia stalinista sustituya al partido revolucionario. El peso contrarrevolucionario de la actuación stalinista en los mismos procesos de surgimiento de un estado obrero se manifiesta muy concretamente para las masas enajenándolas de sus propias conquistas, con la represión y con repercusiones negativas en sus condiciones de vida. La teoría de que sin partido revolucionario, sin que el proletariado ejerza directamente el poder, el surgimiento de un estado obrero se refleja automáticamente en una mejora de las condiciones de vida de las masas, constituye un proceso progresivo en todo lo fundamental, no se ajusta a la realidad histórica ni de Indochina, ni de los demás estados obreros deformados.

B) LA CRISIS DEL REGIMEN, LA GUERRA Y LA APROXIMACION AL IMPERIALISMO

Las extremadas contradicciones del proceso camboyano, dado el atraso de ese pequeño país, la fuerza de la revolución indochina, la debilidad del proletariado, la brutal política de deportaciones, colectivización y acumulación basada en un "desarrollo autosuficiente" constituyen una expresión extrema, casi caricaturesca, del "socialismo en un solo país" y provocan una rápida y profunda dinámica de enfrentamiento entre el régimen y las masas. El régimen y las conquistas de la revolución tenían una gran precariedad. Las contradicciones habían llegado a un punto de estallido, de bruscos trastornos en los que se jugaría la consolidación del estado obrero.

El régimen inicia en 1978 un acentuado viraje: industrialización y apertura política y económica al imperialismo. Como todos los regímenes stalinistas, a lo que más se resiste es a hacer concesiones políticas a los trabajadores. Mas estos no aguardan a ver si el giro burocrático alivia a medio plazo su situación. Tanto más cuanto que Pol Pot no está en condiciones de revertir de la noche a la mañana el colectivismo irracional sin desatar un proceso de masas incontrolable. Política y económicamente, se apoya en el mantenimiento de ese colectivismo para desarrollar la industrialización. Entretanto, el propio aparato stalinista se encuentra dislocado. La reorientación, la consolidación del estado obrero sólo podía realizarse a través de enfrentamientos de gran envergadura. Ante esta situación de crisis aguda, no podían permanecer de brazos cruzados el imperialismo, ni Pekín ni Hanoi.

Esta es la situación en que el choque armado con Vietnam se hace irreversible y se produce el cambio de relaciones de Pol Pot con el imperialismo.

Las relaciones con Vietnam son una cuestión central en la política camboyana, por el peso abrumador de la revolución vietnamita en la zona y por la potencia relativa que representa Vietnam al lado de un país pequeño y atrasado como Camboya. Si el estado obrero de este país había nacido a la sombra de la revolución proletaria vietnamita, el apoyo del Estado obrero vietnamita debía ser el soporte lógico del mantenimiento y desarrollo del camboyano. Sin embargo, los intereses nacionales de dos burocracias se interponen. Hanoi sólo entiende la relación de "cooperación" en términos de subordinación de Camboya y Laos a los intereses de la burocracia vietnamita, que tienen base nacional. La burocracia camboyana se excita en relación a esta cuestión central. El supercolectivismo de Pol Pot pretende conseguir un desarrollo casi autárquico como forma de buscar la mayor independencia frente a Vietnam. Otra fracción de la burocracia camboyana considera inviable



ese curso y prefiere el sometimiento a Hanoi, la sucursalización.

El nacionalismo exacerbado y el militarismo antivietnamita son recursos de la fracción dominante para cortar puentes con Vietnam. Cuando en el 78 la burocracia de Pnom Penh da un viraje político busca apoyos en sus tradicionales aliados de Pekín y en el imperialismo, pero rechaza la oferta de paz realizada por Hanoi en el mes de febrero. La situación de crisis en que se encontraba hacía particularmente peligroso para Pol Pot un estrechamiento de las relaciones con Hanoi, que trataría de aprovechar esa crisis.

Este terror obsesivo de Pol Pot a Hanoi tiene precedentes. El régimen de Albania, otro estado minúsculo —y por tanto extremadamente deformado— ha hecho durante treinta años centro de toda su política las maniobras para contrarrestar las ansias absorcionistas de la burocracia de Yugoslavia (al calor de cuya revolución se produjo también la albanesa). Enver Hoxha participó en primera fila en la agresión de Stalin contra Yugoslavia, porque Tito quería establecer una Federación Balcánica (como Vietnam quiere la Federación Indochina). Rompió con Moscú cuando Moscú se reconcilió con Tito. Ha roto con Pekín al reconciliarse Pekín con Tito.

Defendiendo con uñas y dientes la base nacional de sus privilegios a costa de tremendos sufrimientos de las masas y distorsiones de la economía, la burocracia de Pol Pot prolongó con las agresiones a Vietnam el papel contrarrevolucionario que juega en Camboya. Lo mismo que la intervención militar de Hanoi prolonga el papel contrarrevolucionario de esta burocracia en su propio país.

Evidentemente, la agresión de Pol Pot contra Vietnam, fomentada por Pekín, es en beneficio del imperialismo. Sin embargo, ello no significa que Pol Pot fuese más "proimperialista" que cualquier otra burocracia stalinista. Y el ataque militar de China contra Vietnam, descartado por la c. M.A. Waters cinco días antes de que se produjese, arroja luz sobre el caso.

La búsqueda de relaciones con las potencias imperialistas por parte de Pol Pot no podía verse sino facilitado por la negativa de Pnom Penh a aceptar la paz ofrecida por Hanoi en febrero del 78.

Tal como señala la resolución, "a pesar de un alejamiento temporal, el régimen de Pol Pot vió que necesitaba el respaldo imperialista como última arma contra los obreros y campesinos". Es una constatación que han hecho, tras Stalin, los burócratas de todos los estados obreros.

La política de apertura al imperialismo por parte de Pnom Penh no presenta ningún rasgo particular. No se tienen noticias de ningún ofrecimiento ligado a la reforma económica que pudiese suscitar grandes expectativas al capital internacional. Si bien Japón consideró la posibilidad de realizar inversiones, esto parece ocupar el lugar secundario que en muchas ocasiones tienen los intercambios y relaciones económicas en la mejora de las relaciones por parte del imperialismo con los estados obreros deformados. Esos proyectos —bastante vagos— de penetración económica capitalista habría que situarlos sobre todo como bazas de la política imperialista orientada a desestabilizar los estados indochinos, y, en particular, a incidir en la crisis del régimen de Camboya.

A mediados de 1978, precisamente cuando se evidencia esa crisis y el enfrentamiento con Vietnam se muestra irreversible, se produce una polémica. El senador Mc Govern promueve una carta de ochenta senadores USA al secretario de Estado lamentando que el gobierno americano no haya respondido con suficiente fuerza al terror de masas que ejerce el gobierno de Camboya. En agosto, dos meses antes de esa carta, Mc Govern había pedido expresamente una acción militar para derrocar al régimen de Pnom Penh. Sin embargo, por esas mismas fechas el gobierno japonés había iniciado un camino distinto, sin duda acordado con Washington en las conversaciones Japón-USA que precedieron a la firma del tratado chino-japonés. Tres semanas después de firmar ese tratado, en septiembre, se establecían relaciones diplomáticas y comerciales entre Camboya y Japón, a las que seguiría un cambio de actitud de los países capitalistas de la zona y de las potencias imperialistas en general. El slogan imperialista era mantener un sistema estable de estados en Indochina, frente al "expansionismo" vietnamita.

Según la tesis de la minoría del SU, el senador Mc Govern debería estar mal informado y creer, todavía en la segunda mitad de 1978, que el régimen camboyano era anticapitalista. Parece mucho más lógico pensar que ante la crisis abierta del régimen de Camboya, Mc Govern propone un tipo de intervención y el Departamento de Estado otro, ambos orientados al mismo objetivo: rescatar Camboya para el mercado capitalista, derrocar el precario estado obrero. Consciente de que a pesar de todo el régimen camboyano tenía raíces en la lucha antiimperialista y el derrocamiento del capital, el imperialismo consideró más realista minarlo y minar sobre todo a Vietnam, apoyando a Pol Pot en su enfrentamiento con Hanoi, apoyando la guerra. Y aumentando al máximo la dependencia directa del débil estado camboyano respecto de los USA, fomentando el desarrollo de fuerzas burguesas en Camboya, cuyo símbolo sería Sihanuk. Esto muestra que el imperialismo era consciente de las raíces de las "expropiaciones" que la minoría del SU considera ajenas a las masas, y no confiaba en poder imponer al Jmer Serai ni con todo el apoyo del ejército thailandés y de otros estados capitalistas.

Esta intervención imperialista en la crisis de Camboya y en el enfrentamiento con Vietnam tiene también sus precedentes. Así actuó Washington con Yugoslavia tras el choque de Tito con Stalin. Y Tito correspondió con actitudes tan reaccionarias como el militarismo antivietnamita de Pol Pot: apoyando la invasión americana de Corea.

Por lo demás, la actuación imperialista se sitúa en el marco del estrechamiento de lazos con China, como parte de un mismo esfuerzo para enfrentar y dividir a los estados obreros en Asia, para mejor penetrar en ellos, debilitarlos y restaurar el capitalismo si puede en los más débiles y menos consolidados.

La resolución afirma que "además de la ayuda que Pnom Penh recibía de Pekín, Hanoi tenía buenas razones para suponer que Pol Pot recibiría pronto ayuda económica, diplomática y militar de los USA, como parte del esfuerzo imperialista para presionar a Vietnam". Es muy verosímil, pero nada permite suponer que esta ayuda fuese más allá de la limitada que el imperialismo ofrece a las burocracias de los estados obreros frente a las masas y para fomentar enfrentamientos entre ellos. En cambio, la propia resolución reconoce que en



todo momento el imperialismo se volcó en reforzar sus propias fuerzas en el área: los regímenes capitalistas de la zona, en particular Tailandia, y las guerrillas derechistas de Laos y Camboya —el Jmer Serai—.

Ni en el aspecto interior ni en el exterior la política contrarrevolucionaria de Camboya se diferencia sustancialmente de la de otras burocracias stalinistas. En cambio, es imposible explicar esa política interior y las relaciones con el imperialismo dentro de la hipótesis de la minoría del SU. La peste de Pol Pot es la "sífilis del movimiento obrero", y el estado camboyano es un "estado obrero contrarrevolucionario", como llamaba Trotski a la URSS en "La revolución traicionada".

8.-- CONCESIONES POLITICAS A LA BUROCRACIA VIETNAMITA

La valoración que hemos hecho del proceso camboyano nos lleva a considerar que la invasión de Camboya por las tropas de Hanoi no tiene nada de defensa de la revolución vietnamita. Es responder a la agresión burocrática de Pol Pot con otra agresión igualmente burocrática y contrarrevolucionaria. Esta intervención, además, no puede explicarse simplemente a partir de la necesidad de Hanoi de acabar con los conflictos fronterizos, sino que responde a un plan político más amplio. Hanoi decidió intervenir según sus intereses en la crisis del estado obrero camboyano. Buscaba en primer lugar cortar una dinámica de turbulentos enfrentamientos en Camboya que ya se había iniciado, y en la que no tenía tanto la fuerza que pudiesen tomar las guerrillas proimperialistas del Jmer Serai como la amenaza fundamental: la movilización obrera y campesina y su impacto en las masas vietnamitas. Otro objetivo perseguido por Hanoi: aprovechar la crisis para imponer sus proyectos de "federación indochina".

Por tanto, esa intervención no significaba para las masas camboyanas la apertura de la vía hacia un gobierno obrero y campesino, o al menos remover el obstáculo de Pol Pot y crear condiciones para la movilización en dirección a un gobierno obrero y campesino. Hanoi impuso un gobierno, que, haciendo algunas concesiones a las masas, asegurarse el orden burocrático y subordinase el estado obrero camboyano al imperialismo, como Pol Pot.

Sin duda, los trabajadores pueden aprovechar las pugnas entre burocracias y los revolucionarios han de aprovechar esas pugnas para desarrollar la acción independiente de masas. Pero la intervención vietnamita como tal lejos de favorecer esta acción independiente de masas es un obstáculo, desarrolla la división dentro de los obreros y campesinos camboyanos, y entre éstos y las masas vietnamitas. Lo mismo que Pol Pot, el PCV ha ido con su actuación en contra de la dinámica de lucha revolucionaria solidaria cuajada por la lucha antiimperialista en Vietnam y Camboya.

Si esto es así, como pensamos, el apoyo a la invasión de Camboya colocaría a la IV Internacional objetivamente en el bando de la burocracia de Hanoi contra las masas vietnamitas y camboyanas.

Però ni siquiera partiendo de la idea de que Camboya fue un estado capitalista puede justificarse la posición de la minoría del SU.

Si bien en un choque entre estado burgués y estado obrero hay que apoyar a éste, los cc de la Minoría del SU, que caracterizan Vietnam como deformado, no deberían callar el objetivo de Hanoi. Cuando Stalin invadió Polonia --estado burgués-- afirmando que iba a unificar a la Ucrania soviética con la dominada por Polonia, Trotski denunciaba: "Si la invasión logra su objetivo, el pueblo ucraniano se encontrará 'unificado', no en la libertad nacional sino en la esclavitud burocrática (...). Porque no se trata de emancipar a un pueblo oprimido, sino de extender el reinado de la opresión burocrática y el parasitismo". Si realmente se cree que en Hanoi hay una burocracia stalinista, hay que entender que la presencia de sus tropas en Camboya no es, en ningún caso, simplemente una supuesta defensa del estado obrero vietnamita, sino también la bota de la esclavitud burocrática.

Ahora bien, la resolución señala que la orientación política de Hanoi y del FUNKSN es mantener el capitalismo (?) en Camboya. Sin embargo, "como respuesta a la presión de los imperialistas y las exigencias de las masas, pueden verse obligados a ir más allá de lo que originariamente pretendían y tomar medidas anticapitalistas". Aunque no entendemos contra qué capitalistas van a tomar medidas si el capitalismo se gestaba en el aparato burocrático de Pol Pot que ha sido barrido, esta actitud no es correcta. Bajo la bota de los ejércitos de Hanoi, una supuesta expropiación del supuesto capitalismo iría acompañada inevitablemente de la imposición de un régimen burocrático stalinista. Hay que decir, que para imponer un go-

bierno obrero y campesino y una genuina dictadura proletaria los obreros y campesinos camboyanos tienen que echar a patadas a esas tropas. Y tienen que derribar al FUNKSN. Sin embargo, aunque la resolución habla de la necesaria independencia y la construcción de un partido revolucionario, no plantea esto claramente. Por tanto, aunque se diga que no hay que confiar en el FUNKSN y Hanoi, eso es totalmente insuficiente y no expresa claramente la posición trotskista de no confiar ninguna tarea histórica a una burocracia stalinista. Después de la II Guerra Mundial, el IV Internacional reclamaba la retirada de las tropas de la URSS de los países del Este --entonces eran capitalistas--. Aunque también era la consigna del capitalismo.

También en el caso de Laos la minoría del SU ignora el carácter burocrático y contrarrevolucionario de la política indochina del PCV. Presentando el tratado de "amistad y cooperación" entre ambos regímenes simplemente como un logro de la revolución, encubre que la burocracia de Hanoi, como toda burocracia stalinista, no puede entender las relaciones con otros estados más que en términos de favorecer sus propios privilegios, y la base nacional de esos privilegios. Y que ese tratado no es simplemente, un instrumento de apoyo de la revolución laosiana por el estado obrero vietnamita, sino un instrumento de subordinación de la revolución laosiana al poder burocrático de Hanoi y un apoyo a los stalinistas laosianos contra las masas de su país.

Sin embargo, ni en Camboya ni en Laos quieren ver los cc. de la minoría del SU un empeño de Hanoi de subordinar la revolución indochina a sus intereses de casta. Atribuyen a las falsedades de la propaganda imperialista cualquier planteamiento en este sentido, aunque admiten "que mientras gobiernen los stalinistas en Hanoi existe la posibilidad de una dominación vietnamita de gran potencia" (subrayado nuestro).

Esto equivale a plantear la "posibilidad" de que los stalinistas de Hanoi puedan actuar prácticamente como stalinistas en sus relaciones con Camboya y Laos, ignorando los hechos y asumiendo la peligrosa posición antitrotskista de que en el curso de los procesos revolucionarios los stalinistas no pueden actuar como contrarrevolucionarios.

Más allá de la caracterización de Camboya y las graves consecuencias que de ella se derivan, la resolución de la Minoría del SU entiende aspectos fundamentales de la política exterior de Hanoi de manera no coherente con la caracterización que hace, correcta, del régimen vietnamita.

Lamentablemente, problemas parecidos se dan en la apreciación de la política interior de Vietnam:

a) ¿Por qué Hanoi mantuvo el capitalismo en Vietnam del Sur durante tres años?

En su artículo de 1976, el c. Feldman lo explicaba así: "La política de mantenimiento del capitalismo durante cierto tiempo en Vietnam del Sur (...) puede haber estado motivada en parte por el temor hacia las iniciativas que pudieran tomar los obreros, que podrían ir mucho más lejos que los objetivos de los stalinistas (...)

" (...) es coherente con su intento de conseguir la 'coexistencia pacífica' en el campo internacional. Retrasando todo lo posible el derrocamiento del capitalismo en el Sur, la dirección vietnamita indicó su voluntad de coexistir con el capitalismo en otras partes. Además, tal vez hayan concebido la esperanza de que la protección de los intereses capitalistas daría confianza a los posibles inversionistas extranjeros sobre la determinación de los nuevos dirigentes de proteger las inversiones futuras.

(el subrayado es nuestro; Contra la Corriente n. 3, febrero 77, pp. 26 y 27) (6).

En cambio la resolución de la Minoría del SU dice: "Los dirigentes del PCV al principio buscaron preservar un gobierno separado y relaciones de propiedad capitalistas en Vietnam del Sur. Esperaban que esto les permitiese obtener ayuda y establecer relaciones comerciales con los imperialistas, y que los capitalistas que quedaban en el Sur se viesen inducidos a yudar a reanimar la trastornada economía."

Esta explicación sigue planteando que la política del PCV era de colaboración de clases, que perjudicaba a la revolución, se enfrentaba a las aspiraciones de las masas y tenía resultados desmovilizadores. Pero no permite comprender claramente que la actuación de los stalinistas se guiaba por el miedo a la revolución obrera, por su hostilidad hacia los obreros y los campesinos pobres. Y que era eso, y no sólo razones económicas, los que les hacía buscar respaldo imperialista.

b) Destrucción del movimiento obrero.

La minoría del SU nos dice que el 30 de abril de 1975, "los obreros tomaron las fábricas para impedir el sabotaje y el pillaje de los capitalistas que huían. Se formaron comités de fábrica y de barrio para organizar la vida económica y social, normalmente bajo la dirección de cuadros del PCV".

A continuación señala que la política de colaboración de clases perjudicó, pero no aplastó ni suprimió la movilización de las masas trabajadoras. Y que en marzo del 78 "millares de personas fueron organizadas bajo la dirección de cuadros del ejército para apoderarse de los establecimientos y bienes de los grandes comerciantes (....) Poco después se organizaron manifestaciones de masas para acabar con el mercado negro", terminando así con el capitalismo en el Sur.

Este análisis es por lo menos confuso. Como señalaba el c. Feldman en sus artículos, particularmente en el de 1976, hay una oposición entre los comités de fábrica que reclaman la abolición del capitalismo y los esfuerzos del Comité de Gestión Militar y siguientes organismos de gobierno de la burocracia del PCV, que pugnan por establecer un sistema de "comités revolucionarios" que les dé el control de la situación y acabe con todo movimiento independiente de los obreros.

El análisis de la resolución no da una idea clara del contraste entre la situación de 1975 y la de 1978. Entre los obreros de Saigón tomando la capital —con influencia del PCV que allí aparece como partido de masas— y las acciones totalmente controladas, a golpe de pito, encuadradas por la oficialidad del ejército..... entre esas dos situaciones hay la imposición de un aparato burocrático stalinista y la destrucción de toda organización obrera, incluido lo que el PCV tenía en el Sur de partido de masas.

La resolución no incluye ni una sola crítica explícita de esto. Sólo se viene a indicar cuando se afirma que no se concedieron derechos democráticos.... para señalar que a pesar de todo no hubo represión extrema.

c) La represión.

Se trata exclusivamente de esta forma; polemizando con el imperialismo para decir que no hay un Gulag, que no hay represión extrema porque el régimen tiene suficiente prestigio entre las masas y no hay una dirección anticapitalista alternativa.

Sin embargo, ha habido represión, primero, para imponer el aparato burocrático y negar a las masas sus derechos y su organización libre. Y es muy probable que haya habido más represión al expropiar a la burguesía, tal como preveía el c. Feldman en 1976, en la cita que hemos dado antes. Es posible que no haya datos de esto último. Ello no nos puede hacer suponer que no la ha habido.

Ante este hecho los trotskistas no podemos limitarnos a polemizar con las campañas capitalistas sobre el grado, más o menos extremo o brutal, de esa represión. Además de denunciar el terror capitalista y las responsabilidades del imperialismo en la situación de Indochina, cosa que la resolución hace, debemos tomar nosotros la iniciativa en denunciar la represión stalinista contra el movimiento obrero, que además es apoyada por el imperialismo como se vió en Hungría y Checoslovaquia.

d) El gobierno de Vietnam del Sur.

Fue, según la resolución, desde agosto de 1975, un gobierno obrero y campesino, que desarrollo medidas anticapitalistas en dirección a la unificación de Vietnam en un sólo estado obrero.

En cuanto a las tareas, es cierto que en Vietnam del Sur se

han dado esas medidas anticapitalistas desde agosto y noviembre de 1975. También hay que considerar que los mismos gobiernos que las abordaban eran gobiernos dedicados a impedir la toma del poder directamente por la clase obrera aliada con los campesinos pobres, y a imponer un aparato burocrático. Y que se orientaron a unificar Vietnam como estado obrero deformado. Si se quiere utilizar el nombre de gobierno obrero y campesino, por lo menos debe quedar claro el contenido. A nosotros nos parece mejor no utilizar ese nombre sino decir simplemente que ese gobierno abordó las tareas de un gobierno obrero y campesino (no todas) sin dejar de ser también un centro contrarrevolucionario.

Pero además, desde el 30 de abril de 1975 no ha habido nunca un gobierno de Vietnam del Sur, hablando propiamente. Tanto el Comité de Gestión Militar como el Gobierno Provisional eran fundamentalmente órganos de la burocracia de estado de Vietnam del Norte (porque eso era el PCV) que además tenían el apoyo de las masas del Sur (como el PCV). Y de hecho, las medidas anticapitalistas que en 1977 y 1978 han llevado a la abolición del capitalismo en el Sur fueron tomadas por el gobierno unificado que existió en Vietnam desde julio de 1976, y que suponemos todo el mundo en el movimiento trotskista reconoce como órgano de la burocracia de Hanoi.

Por tanto, el proceso de transformación de Vietnam del Sur entre 1975-78 no puede explicarse como un proceso en que partidos de base obrera y campesina, apoyándose en la movilización de masas, establecen la dictadura obrera. Que lo que expresa la consigna de gobierno obrero y campesino. Los elementos que hay de esta dinámica se insertan en un proceso que es básicamente la asimilación estructural del Sur en el Estado obrero deformado de Vietnam del Norte, es decir, la extensión de las relaciones de producción, el aparato, el régimen de Vietnam del Norte al Sur. Un proceso conocido por la IV Internacional y definido claramente por ella: el mismo que se dió en los países bálticos, en una franja fronteriza de Polonia, etc. al incorporarse estos territorios a la Unión Soviética.

En conjunto, el análisis de Vietnam por la resolución presenta serias deficiencias. A diferencia de la posición de la mayoría del SU, establece claramente que en todo momento la orientación del PCV se ha opuesto a la de las masas y es una política de colaboración con el imperialismo. Sin embargo, al no definir claramente los resultados de esa política contrarrevolucionaria (imposición del aparato burocrático y destrucción del movimiento obrero) en Vietnam, puede dar la impresión que las masas han impuesto al PCV su propia línea en mucha mayor medida de lo que corresponde a la realidad. Este problema se agrava cuando se presenta la actuación de Hanoi en Camboya y Laos no sólo como una supuesta defensa del Estado obrero vietnamita, sino como una intervención que ayuda a la movilización de masas, es un impulso a la revolución laosiana y abre posibilidades de gobierno obrero y campesino en Camboya. Aquí de nuevo la orientación de Hanoi se opone a la lucha anticapitalista en Camboya, pero las masas pueden prevalecer.... y no se ve el papel contrarrevolucionario de la ayuda a la burocracia de Laos y al FUNKSN para que atomen a los obreros y campesinos e impongan aparatos burocráticos.

Con un análisis de este tipo, la afirmación fundamental de que es necesaria la revolución política en Vietnam, no queda fundamentada, parece una afirmación gratuita. Si las masas van imponiendo al PCV su orientación, si los resultados contrarrevolucionarios de la orientación del PCV no aparecen claramente, ¿por qué es necesario derrocarlo?

La línea de revolución política queda tan debilitada que difícilmente se pueden combatir así los errores de la mayoría del SU. Esta se enfrenta al PCV en puntos tan importantes como la invasión de Camboya, pero no rompe con una línea global de adaptación al PCV. La minoría, por su parte, hace concesiones políticas al PCV, embellece objetivamente su

actuación dentro y fuera de Vietnam, y se adapta a él en cuestiones de tanta importancia como la invasión de Camboya y el tratado con Laos.... aunque mantiene la afirmación general de que hay que derrocar a esa burocracia.

El análisis de la minoría del SU recuerda demasiado planteamientos que han costado muy caros a la Internacional, como aquella afirmación del III Congreso:

"Mientras el papel contrarrevolucionario de la burocracia soviética permanece invariable, (...) su posibilidad de realizar con éxito ese papel no es determinada por sus deseos e intenciones subjetivos sino por una situación objetivamente revolucionaria, que debido a su amplio alcance e intensidad se hace cada vez más difícil de destruir o de mantener dentro de rígidos canales burocráticos y controles policiales".

Sin duda, las deficiencias que nos parece constatar en la resolución se pueden deber al ánimo polémico contra la campaña imperialista. Sin embargo, los cc. que firman esa resolución saben mejor que nadie que a nuestro movimiento le ha costado un precio muy alto aprender que no se puede responder a estas campañas con ninguna concesión a una política de bloques que pueda hacer aparecer a los trotskistas en el bloque supuestamente revolucionario que la burocracia de Hanoi pretende representar.

Es indispensable que la minoría del SU explicita la crítica a los logros prácticos de la orientación de colaboración con el imperialismo que desarrolla la burocracia vietnamita, tanto en el establecimiento de un régimen burocrático en Vietnam como en su curso en Camboya y Laos, hostil en todos los casos a la clase obrera y al campesinado pobre. Que explicita que, en consecuencia, la lucha por la revolución política en Vietnam es una de las consignas centrales en la actual situación, inseparable de la lucha contra las agresiones imperialistas. La rectificación de la caracterización de la Camboya de Pol Pot facilitaría mucho, a nuestro entender, esta corrección de unas deficiencias que, sin embargo, van mucho más allá de esa caracterización.

9.- HANOI, MOSCÚ, LA HABANA

La resolución señala correctamente que Moscú da escasa ayuda a Vietnam frente a la ofensiva imperialista, y utiliza esa ayuda para presionar a Hanoi y someterlo a sus objetivos. Como no quiere que Pekín le robe los favores de los USA, ha encubierto la responsabilidad de éstos en la agresión de China contra Vietnam. Moscú es cómplice de la presión yanqui sobre Hanoi.

¿En qué sentido ha presionado Moscú a Hanoi para ayudar a Washington?. Se nos ha dicho que el objetivo inmediato fundamental de los USA era echar de Camboya a los vietnamitas. ¿Presiona Moscú por la retirada?

La resolución da, con razón, mucha importancia a la visita de Teng a los USA pocas semanas antes del ataque chino. Pero, al igual que la declaración de la mayoría del SU, nada dice sobre la visita de Le Duan y Fan Van Dong (jefes del PC y del gobierno de Vietnam) a Moscú pocas semanas antes de la invasión de Camboya. Entonces (1-9 de noviembre del 78) se firmó el tratado de "amistad y cooperación" que con la adhesión al Comecón (junio 78) consagra la subordinación de Vietnam a la burocracia del Kremlin. En esa visita, además de hablar del cultivo de plantas medicinales y de ferrocarriles, tuvo un lugar central la guerra con Camboya, el choque creciente con China, la situación en todo el Sudeste de Asia. La televisión de la URSS informó de la "preocupación por el momento negativo en que se encuentra la situación internacional, principalmente en el Sudeste asiático" y señaló que se había llegado a un acuerdo para rechazar las pretensiones agresivas que "amenazan a los países independientes". Moscú había dado el visto bueno a la invasión de Camboya, lanzada en gran escala al mes si-

Esto puede encajar con cierta dificultad en la versión de la minoría del SU, que atribuye a la invasión un gran impacto revolucionario (impulso de la acción independiente de masas, abrir la vía a un gobierno obrero y campesino). Pero no tiene nada de extraño si entendemos que esas tropas son para Camboya "la bota de la servidumbre burocrática" y pretenden asegurar el orden burocrático de Hanoi — y de Moscú— en el área, acabando con focos de inestabilidad como la crisis del régimen de Pol Pot.

Y no es contradictorio con que Moscú apoye poco a Vietnam. Le interesa que Hanoi esté en una situación débil frente al imperialismo y frente a Pekín, para que dependa más de Moscú. Por eso le dió poca ayuda y se negó a denunciar a Washington (conciliando con éste para buscar la firma de las SALT II). Eso es complicidad con las agresiones imperialistas contra Vietnam, efectivamente.

Pero también es un servicio al imperialismo respaldar frente a las masas de Camboya y de Indochina acciones contrarrevolucionarias como la ocupación de Camboya por Vietnam.

Si esta es la realidad, se cae por los suelos el apoyo dado por el SWP y la minoría del SU a la actitud del "gobierno revolucionario de Cuba", cuya posición se nos presenta —una vez más— artificialmente enfrentada a la del Kremlin.

Esta bien que Castro denuncie la responsabilidad de los "gringos" en Indochina y que distinga entre el régimen de Pekín y el pueblo de China. Pero Castro respalda la agresión de Hanoi y Moscú contra la revolución camboyana, respaldó el orden "revolucionario" que Hanoi quiere imponer en el área.



En cuanto a la amenaza de mandar cubanos a Vietnam para combatir contra China, podría ser una carta de reserva que en un momento dado evitase a Moscú la implicación directa (como en Etiopía). No irían sólo a repeler una agresión china, sino a respaldar a los "gobiernos revolucionarios" de Hanoi y Phnom Penh. Y esa amenaza de mandar tropas no es ninguna singularidad "revolucionaria" de los stalinistas cubanos. Durante la guerra chino-vietnamita en algunos países del Este de Europa se abrió la inscripción de voluntarios para ir a Vietnam. Dentro del bloque de gobiernos subordinados a Moscú, Hanoi invadió Camboya, otros amenazaban con mandar tropas para repeler el ataque chino. Nada de esto se hizo en oposición a Moscú, ni se salía de la coexistencia.

La minoría del SU cree que:

"La posición revolucionaria tomada por la dirección cubana —arriesgándose de nuevo a represalias de Washington — confirma que siguen creyendo que la suerte de la propia Cuba depende ante todo de la defensa y extensión de la revolución mundial."

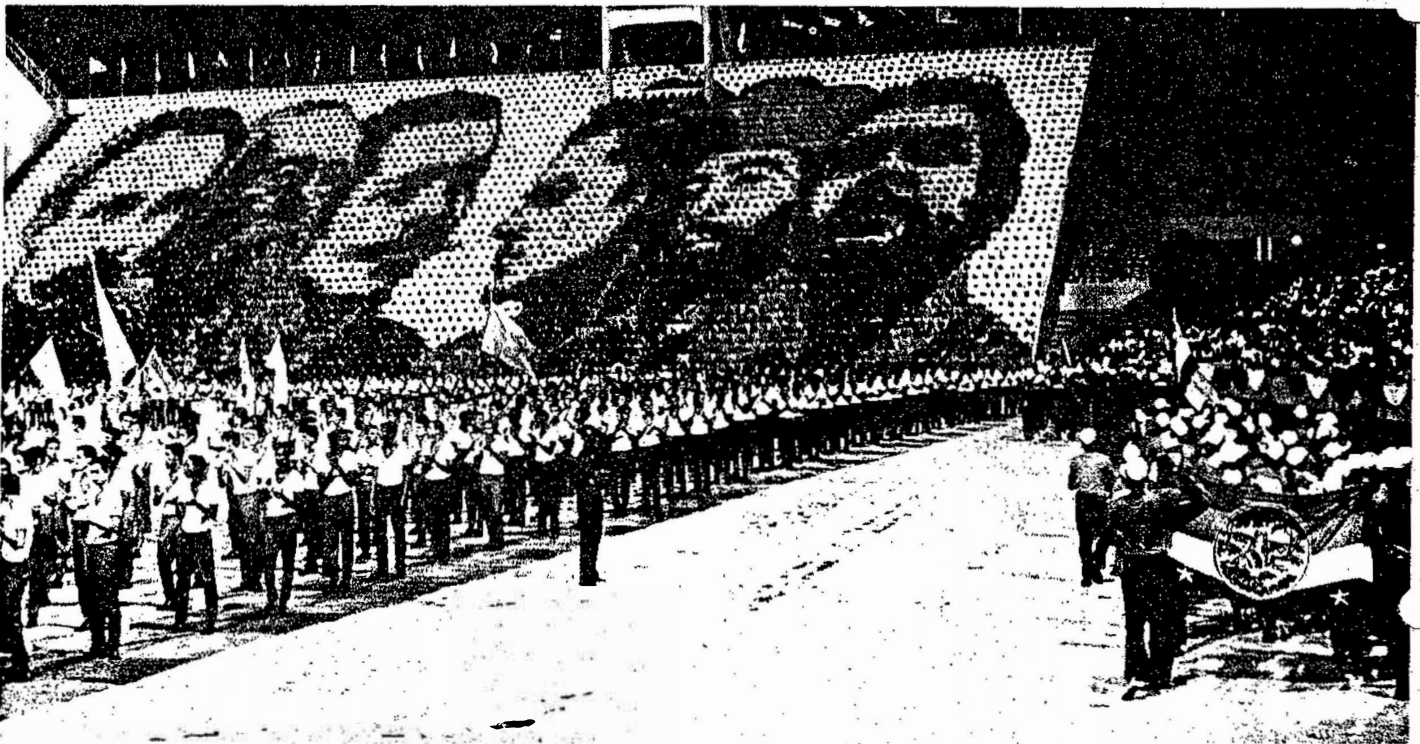
Es decir, que el gobierno cubano sigue una línea de revolución permanente. Es lamentable que los cc. no hayan sabido ver en la complicidad de Castro con la ocupación de Camboya una nueva confirmación de que el PC cubano es una pieza del podrido sistema stalinista, que busca un lugar al sol de la coexistencia.

Pareció antes que los hechos de Etiopía y la Conferencia de la Juventud de la Habana podrían abrir los ojos a los diri-

tados por su contenido político, que debilita a la revolución vietnamita. Desorienta profundamente que se escriban en nuestro movimiento cosas como las siguientes:

"Vietnam reforzó su posición económica y militarmente adhiriendo al Comecón, la unidad económica del bloque soviético, y firmando con la URSS en noviembre un tratado de defensa y ayuda por veinticinco años" ("Tras la caída de Pol Pot", Feldman, en The Militant del 19 de enero)

Aunque en aspectos concretos del enfrentamiento con el imperialismo y Pekín puede hablarse de tal "reforzamiento", no es ese el sentido de los tratados, que debilitan a Vietnam y refuerzan a la burocracia. Una posición confusa hace el juego a la retórica de la burocracia. Y puede confundir sobre cuestiones tan importantes como el Pacto de Varsovia y el Comecón, montajes stalinistas que los troskistas debemos combatir. Defendemos el frente único de estado obreros y luchamos contra los compartimentos establecidos por Stalin entre muchos "socialismos en un sólo país" al mantener las viejas fronteras. Pero la posición de la Cuarta Internacional es la defensa de la independencia de cada estado obrero frente a la burocracia de Moscú (y también la independencia de Ucrania....) Debe quedar clara la oposición a los tratados y bloques que subordinan los estados obreros a los intereses y la política contrarrevolucionaria de la casta burocrática de la URSS. El papel del tratado URSS- Vietnam en los hechos de Indochina exige clarificar esto.



gente de la Internacional, pero ignoraron el apoyo cubano a Mengistu contra el pueblo eritreo, y algunos llegaron acambiar todo el análisis del significado de la lucha de Etiopía contra los somalís. Cambiaron también la línea tradicional trotskista frente a los festivales stalinistas "por la paz", para participar en la conferencia de la juventud preparada durante varios años con una campaña por la coexistencia pacífica. Ahora en Indochina se interpretan también algunos hechos al revés. Sólo a ese precio se puede seguir considerando a Castro como una especie de trotskista inconsciente.

El faro de la Habana está llevando una y otra vez a la Internacional a caer en rutas trazadas por el Kremlin.

Además de denunciar la responsabilidad directa de Moscú por la ocupación de Camboya, es necesario denunciar los tratados firmados en vísperas de esta ocupación entre Vietnam y la URSS. Esos tratados no sancionan sólo la ayuda escasa de la URSS a Vietnam, sino sobre todo la subordinación del estado vietnamita a la burocracia del Kremlin. Defendiendo la ayuda masiva de la URSS a Vietnam, hay que enfrentarse a esos tra-

10. LA COEXISTENCIA Y LA CRISIS DEL STALINISMO

A diferencia de la mayoría del SU, la minoría, en su resolución, establece correctamente los principios trotskistas sobre la burocracia y la coexistencia pacífica. Y en general la resolución se ajusta a ellos. Sin embargo, en diversos pasajes se cae en una versión excesivamente unilateral.

Así, al explicitar el origen del conflicto chino-soviético, se dice que "el esfuerzo de Moscú por conseguir los favores del imperialismo excitó la traición al estado obrero chino frente al boicot económico y presión militar imperialistas". Puede parecer que ningún motivo propio tenía la casta rusa para enfrentarse a China, que sólo lo hizo por hacer un favor a Washington. Aunque más adelante la resolución tiene que añadir que "Moscú no podía permitir que el ejemplo de la revolución china desafiase el marco político monolítico...."

De igual modo, en diversos puntos se explica la agresión

china a Vietnam en términos como los siguientes:

"A cambio de mejores relaciones diplomáticas y de la promesa de una fuerte ayuda económica, los stalinistas chinos intentaron 'darle una lección a Vietnam'. Su objetivo era realizar una expedición de castigo para demostrar su fiabilidad como fuerza contrarrevolucionaria contra la extensión de la revolución indochina...."

Sin embargo, más adelante se da una visión más completa y ajustada: la casta china busca la estabilidad, y por ello cara a los imperialistas, la coexistencia, y cara "a los trabajadores y campesinos chinos, y a las masas trabajadoras del mundo, Pekín busca (...) decapitar el impacto desestabilizador de los estallidos revolucionarios en otros países".

Esta última formulación, coherente con los principios enunciados, es ajustada. En cambio, frases unilaterales como las citadas antes, pueden hacer que se desvanezca la realidad específica de la burocracia dentro de las fuerzas del orden burgués, y por tanto el papel fundamental de la revolución política. Puede parecer que los burócratas de Pekín o de Moscú son simples títeres que bailan según las maniobras concretas que en cada momento emprenda el inquilino de la Casa Blanca. Entonces resulta difícil comprender, por ejemplo, que la táctica concreta de Moscú y la de Washington, siendo ambas contrarrevolucionarias, estando la de Moscú al servicio del imperialismo, sin embargo no coincidan, como ocurre en Indochina, como ha ocurrido en Africa. Aunque la táctica de Moscú se sitúa dentro de la misma política general de los pactos de coexistencia pacífica, y aunque los marxistas debemos analizar cómo esa táctica hace el juego a los planes de Washington.

En concreto, el haber visto la actitud de Pekín hacia Vietnam demasiado desde el ángulo (real) de la necesidad de Pekín de conseguir ayuda económica imperialista, considerando poco la hostilidad de la casta de Pekín a la revolución indochina, puede estar en la base de errores como el haber negado categóricamente la posibilidad de un ataque chino en gran escala contra Vietnam.... como el que se produjo cinco días después de esa profecía. Porque, se decía, Pekín se limita a participar en la campaña de Washington....

11.— LA CUESTION INDOCHINA Y EL CONGRESO MUNDIAL

Es necesario que el movimiento trotsquista mundial tome una postura clara y principista de defensa de la revolución indochina frente a las agresiones del imperialismo y las burocracias conchabadas con él. Además de la exigencia de fin del boicot, retirada de las tropas imperialistas del área, etc., la lucha por la revolución política en la URSS, China, Vietnam y Camboya es un elemento fundamental de esa defensa. Y la exigencia de retirada de las tropas vietnamitas de Camboya una concreción clave de ese combate contra la burocracia y su orientación contrarrevolucionaria.

El V Congreso Mundial después de la reunificación (XI Congreso) debe tomar una actitud decidida en este sentido. Pero para ello debe resolver una serie de problemas políticos y teóricos que vienen de antiguo y que se concentran hoy en la cuestión indochina. Señalamos sólo algunos:

a) La concepción formalista del "monolitismo" y el "monopolio de poder" estalinistas, tal como aparece en la declaración de la mayoría del SU tiene sus bases en el Documento sobre Democracia Socialista y Dictadura del Proletariado, que es uno de los frutos de la "segunda reunificación". (7)

b) La discusión sobre indochina revela que la comprensión de la colaboración contrarrevolucionaria entre las burocracias estalinistas y el imperialismo a nivel mundial es la clave para dar una orientación política a los trotsquistas. Esto da la razón a los

cc. que habíamos criticado el proyecto de Resolución Política Mundial por no trazar el cuadro mundial de la lucha de clases y la coexistencia pacífica, limitándose a observaciones laterales sobre ésta, por ejemplo al hablar de los países coloniales.

c) La cuestión indochina es una de las cuestiones fundamentales de la lucha de clases mundial. Hoy como en 1975, y anteriormente. Han aparecido, desde hace muchos años, divergencias fundamentales en el SU, el CEI y las secciones sobre esta cuestión. Sin embargo, se omitió en el X Congreso y se ha demorado hasta hoy. Es un avance que al fin se haya abierto la discusión. Es necesario que ésta se lleve a fondo y el Congreso adopte un pronunciamiento capaz de ayudar no sólo a la labor internacional de la IV, sino en concreto a la construcción de secciones en Indochina. El homenaje a Ta Tu Thau y demás trotsquistas vietnamitas asesinados por las bandas estalinianas de Ho Chi Minh debe ser la construcción de esas secciones, que hasta hoy se han visto entorpecido y saboteado por los errores políticos de adaptación al PCV cometidos por nuestro movimiento.

d) La discusión sobre Indochina muestra una vez más las graves consecuencias que tiene para la internacional la posición vigente sobre el estado cubano y la dirección castrista. Ha desorientado en los últimos años la línea en Africa, sobre la Conferencia de la Juventud, y en Indochina, lo mismo que antes desorientó en América Latina. En todos estos casos la independencia de la Cuarta Internacional frente al estalinismo ha quedado comprometida.

e) En las dos resoluciones sobre Indochina aparece una desconexión entre la política de Hanoi y la de Moscú que no corresponde a la realidad. Este error prolonga el que se viene cometiendo sobre la política exterior —e interior— de Cuba. Está en juego la comprensión trotsquista sobre el sistema estalinista mundial, sobre las relaciones de las burocracias de otros estados y de los PCs con el Kremlin, problema que se ha manifestado también con graves consecuencias en el análisis del "eurocomunismo" y la actitud hacia él.

f) La debilidad incluso de la posición que defiende la revolución política en Vietnam saca a la luz problemas en la comprensión programática de lo que es un estado obrero deformado y del proceso de establecimiento de estados obreros deformados. Aparece un enfoque unilateral que se centra en detectar la dinámica del gobierno obrero y campesino marginando la actuación contrarrevolucionaria de los estalinistas en esos procesos. Esto ha llevado a unas contradicciones teóricas insostenibles en el análisis del régimen de Pol Pot por la minoría del SU, y paralelamente a un embellecimiento de Vietnam y su burocracia. El camino para estos errores estaba abierto desde el momento en que —lo mismo que los cc. de la mayoría del SU en China, Vietnam...— los cc. de la minoría reconocieron como estado obrero no deformado al estado cubano, a pesar de no tener órganos de democracia obrera. Desde el momento en que se ignoró el papel del Partido Comunista de Cuba, de sus precedentes, de la fusión de Movimiento del 26 de Julio con el PSP estalinista.

Con esto no pretendemos hacer una relación exhaustiva de los problemas que aparecen en las dos resoluciones sobre indochina. A los que hay que añadir los que se dan en las variadas tomas de posición de las distintas secciones, o en documentos como el del c. Mandel (por ejemplo los "criterios sobre el surgimiento de estados obreros" o las apreciaciones sobre las guerras entre estados obreros (8). Solamente queremos subrayar la necesidad de la discusión a fondo y democrática de estos problemas.

Si algo ha revelado la polémica sobre Indochina es que la preparación del Congreso Mundial de ningún modo está resuelta por los documentos "unitarios" surgidos del SU. La lucha de clases en Indochina (y en Irán, y en Perú, y en...) ha hecho entrar en crisis abierta el Documento Mundial y el referente a la Democracia Socialista y Dictadura Proletaria, es decir, las bases políticas de la "segunda reunificación" de 1977, sobre las que se pretendió levantar el V Congreso Mundial d. r. (9) Es necesario que se faciliten a todos los cc. de la Internacional, sin restricciones, las aportaciones de cc. de las diversas secciones al debate. Por nuestra parte reclamamos una vez más nuestra participación

en ese debate, y también nuestra reintegración a la vida de la Internacional, de la que fuimos excluidos en aras precisamente de esa "segunda reunificación".

Al mismo tiempo hay que señalar que los problemas surgidos en Indochina son problemas que tienen en nuestro movimiento treinta años de historia. En su resolución deben participar las distintas organizaciones trotskistas, escindidas como

consecuencia de esta larga crisis política de la Internacional. Es un paso muy importante la participación del CORCI en los debates. Y esto debería extenderse a otras organizaciones, como las que se agrupan en torno a la WSL británica o el POR boliviano.

Junio de 1979
Manolo P.G.

NOTAS:

(1) Después de escribirse este informe los cc. Clark, Feldman, Horowitz y Waters, en su respuesta al c. Mandel (IP, 16 de julio) hacen una crítica correcta a este aspecto de las posiciones del c. Mandel. Ver el principio del capítulo de esa respuesta, donde entre otras cosas afirman:

"El c. Mandel argumenta con firmeza el punto indiscutible de que las castas burocráticas consideran todos los desarrollos autónomos como amenazas a su dominación. Pero su afirmación tajante de que 'en esto, y nada más que en esto' (subrayado por nosotros) hay que buscar la causa subyacente a las guerras entre estados obreros, es falsa hasta la médula.

Este análisis no explica, por ejemplo, por qué el Kremilim no va a la guerra contra la vecina Rumanía. (.....)

Sin embargo, Moscú invadió Hungría en 1956 (.....).

Esos ejemplos ilustran que aunque todo desarrollo autónomo es una amenaza, los desarrollos autónomos que pueden provocar que una casta burocrática vaya a la guerra son aquellos en los que la misma clase obrera empieza a moverse y avanzar su dirección a la revolución política.

Además ha de haber mucho en juego para que Moscú o Pekín se arriesguen a la invasión militar de otro estado obrero. (.....).

Esto nos indica el fallo fatal del argumento del c. Mandel. Centra la atención en la tensión entre castas burocráticas más que en la lucha de clases, que subyace a esa tensión. Prescinde completamente de los desarrollos específicos de la lucha de clases que pueden obligar a las castas a recurrir a las medidas extremas."

Estas afirmaciones, absolutamente correctas, concuerdan con lo que señalamos en este y otros apartados del informe (ver el capítulo siguiente, 4). Sin embargo, a continuación los cuatro cc. del SWP dicen que:

"No había ningún peligro de que el ejemplo de desarrollos 'autónomos' bajo Pol Pot fuese asumido por los obreros y campesinos vietnamitas y utilizado para desafiar a la casta burocrática de Hanoi. (.....) Hanoi actuó como respuesta a desarrollos en la lucha de clases —no como respuesta a la amenaza de revolución política, sino en respuesta a la amenaza creciente del imperialismo".

(2) El c. Tariq Alí ha señalado que Camboya era un factor de desestabilización de toda Indochina. Parece lamentar que se desestabilice el orden burocrático.

(3) Las tesis de la reunificación del 63 van en un sentido opuesto al proponer la incorporación a la estrategia trotskista de la línea de guerrilla campesina. El c. Hansen señaló en 1969 que a la vista de la experiencia cubana y argelina había que rectificar las críticas realizadas por la IV Internacional en 1952 a la línea del PC Chino de guerrillas campesinas aisladas de la lucha en las ciudades, del proletariado. Tras desarrollar sobre esta base la línea de guerrilla campesina en América Latina convirtiéndola en estrategia, la mayoría del SU cambió por la guerrilla urbana. En un momento determinado el c. Bensaid defendió la extensión de esta guerrilla urbana a Francia. La guerrilla urbana no era, sin embargo, proletaria. El mismo c. Bensaid afirmaba la superior capacidad de la pequeña burguesía urbana de cara a la "lucha armada". La tesis sobre la lucha armada aprobada en el X Congreso Mundial constituye, efectivamente, una orientación no proletaria.

La experiencia de Indochina reafirma lo que la revolución china enseñó a los trotskistas sobre el significado político de una línea de guerrilla de base pequeñoburguesa. El no haber comprendido en qué se apoyó la reacción estalinista en Cuba, ni el alcance de esta reacción, ha causado no pocos errores en cuanto a la línea de guerrillas de base pequeñoburguesa.

(4) No solamente en el caso de esos países, sino en el caso de Argelia, donde la IV considera que hubo un gobierno obrero y campesino, se mantuvieron unas relaciones económicas intensas con el imperialismo. En Argelia se mantuvo buena parte del aparato administrativo legado por Francia, como nido de la reacción. También se mantuvo, junto a las nacionalizaciones, un fuerte sector privado, que incluía el mantenimiento de grandes terratenientes.

(5) Esta teoría del c. Feldman se encontraba ya en su artículo de noviembre de 1976 publicado en *Contra la Corriente*. El c. la ha reiterado en la actual polémica. La resolución de la minoría no defiende expresamente esta posición. Pero los cc. Clark, Feldman, Horowitz y Waters, en su respuesta al c. Mandel, asumen la defensa de esta posición basándose en una "tradición de la IV" que resulta ser el III Congreso Mundial, que sirvió de punto de apoyo al liquidacionismo pablista y abrió la crisis de la Internacional.

León Trotsky había escrito cuando Stalin invadió Polonia:

"Esta medida, de carácter revolucionario —la 'expropiación de los expropiadores'— se realiza en este caso de modo burocrático militar. El llamamiento a la actividad independiente de las masas en los nuevos territorios —y sin tal llamamiento aun expresado con extrema cautela, es imposible constituir un nuevo régimen— mañana será sin duda eliminado mediante medidas policiales despiadadas (.....)"

En Europa del Este, en la postguerra, este recurso a la acti-

vidad independiente de las masas en el momento de la expropiación de la burguesía sólo fue claro en algunos casos, como el de Checoslovaquia. Se partía de una situación distinta a la considerada por Trotsky: las masas, con grandes movimientos insurreccionales, con guerras civiles, habían previamente dejado al capitalismo en una situación precaria, completamente a expensas de la voluntad de Stalin. Por ello en muchos casos no fueron necesarios nuevos desarrollos significativos de esa actividad independiente de las masas. Así lo reconocía el c. Hansen en 1969 tal como lo citamos en el siguiente apartado (e) de este mismo capítulo. Esto, señala el c. Hansen, no significaba que las masas hubiesen estado completamente ausentes, que fuesen totalmente ajenas a las expropiaciones, pues éstas no dejan de coincidir con el objetivo de expropiar a la burguesía que había estado presente en sus movilizaciones anteriores, porque en los gobiernos que realizan estas expropiaciones hay algunos dirigentes reconocidos etc. Es decir, el c. Hansen busca otras formas de presencia de las masas distintas de las grandes movilizaciones revolucionarias que no se dieron.

La versión que el c. Frank dio en el III Congreso Mundial y que fue adoptada por el Congreso era distinta del enfoque de Trotsky y de esa apreciación que citamos del c. Hansen. Afirmando que los estados obreros del Este eran producto de la acción revolucionaria de las masas, el c. Frank veía esa acción revolucionaria decisiva fundamentalmente en movilizaciones rigurosamente controladas por los estalinistas simultáneas a la expropiación. No en los comités de fábrica de 1944 sino en los comités burocráticos organizados por los estalinistas de 1949, parte del aparato burocrático de Estado. Para el c. Frank la actuación de los estalinistas en 1947-49 no fue desmovilizadora, sino una acción movilizadora y organizadora de la clase.... pero evitando que se escapase a su control. Las convocatorias rutinarias realizadas por los burócratas con una audiencia obrera residual, mientras las masas se apartaban más y más del régimen, eran para el c. Frank la viva expresión de la clase revolucionaria. Mientras Trotsky subrayaba la acción independiente de las masas, amenaza sentida como tal por los estalinistas, el c. Frank se detenia a cantar las virtualidades de la acción controlada. Objetivamente, esto equivalía a apoyar —críticamente por supuesto— una línea desmovilizadora, a apoyar como organización de la clase los comités burocráticos impuestos para atomizarla.

Esta es la tradición de la que se reclaman expresamente, a través de ilustrativas citas, los cc. Clark, Feldman, Horowitz y Waters. Niegan la creación de un estado obrero en Camboya porque no hubo en ella grandes movilizaciones revolucionarias como las que M. Pablo vio en la Yugoslavia de 1945-47 (época de desmovilización y de expropiación de la burguesía). Sin embarcadas, movilizaciones burocráticas controladas también las hubo en la Camboya de Pol Pot. Este no perdió todo el apoyo de masas en veinticuatro horas. Reclamándose de la misma tradición embellecen la actuación del PCV, como veremos luego.

Afirman que el "informe de Pierre Frank ayudó entonces a preparar al movimiento trotsquista para valorar correctamente la revolución húngara de 1956". Es falso que la valoración de esa revolución por el Secretariado Internacional plabista fuese correcta. Pero aunque lo hubiese sido, los cc. saltan olímpicamente por encima de lo ocurrido entre 1951 y 1956: en continuidad con esa concepción de la relación entre estalinistas y masas, el S.I. se alineó en 1953 en aspectos fundamentales con la burocracia contra los obreros de Berlín Este. El SWP lo denunció como abandono del trotskismo y llamó a formar el Comité Internacional contra el S.I.

¿De qué tradición nos reclamamos?

(6) En el análisis de la revolución vietnamita realizado en 1979, el cda. Feldman mantiene esta explicación que daba en 1976 pero cambia el énfasis, dando menos peso al temor a las masas. Posteriormente, la resolución de la minoría del SU, basada en gran parte en los análisis del cda. Feldman, suprime ese factor.

(7) Cuando se escribió este informe esperábamos que los cdas. de la minoría del SU no adoptasen de manera coherente la orientación del III Congreso Mundial, al que hasta entonces no

se habían referido. Pero como hemos indicado en la nota número 5, los cdas. Clark, Feldman, Horowitz y Waters se remiten a ese Congreso, precisamente para reclamarse de una teoría del surgimiento de estados obreros que embellece a los stalinistas. Hemos criticado en el apartado b) de éste capítulo la confusión entre la movilización de masas de 1975, que marcó decisivamente los acontecimientos posteriores, y la de 1978, que se sitúa a un nivel muy inferior de movilización. El cda. Frank, citado en la réplica a Mandel, afirmaba de manera mas tajante la línea movilizadora de los stalinistas. Hemos criticado la confusión entre los comités de fábrica y el aparato stalinista impuesto. El cda. Frank también era mas contundente y alababa a los stalinistas por "organizar" a la clase en los comités burocráticos del Este. La valoración de la actuación práctica del PCV se aproxima peligrosamente a unos análisis que han costado muy caro a la Internacional.

El III Congreso Mundial también era mas coherente cuando, profundizando en éste tipo de análisis, consideraba centrista al PC yugoeslavo del que se decía que rompió con el Kremlin porque se negaba a subordinar los intereses de la revolución yugoeslava a los de la burocracia de Moscú. (En realidad, rompió por un conflicto entre los intereses de la burocracia yugoeslava y los de la rusa). Los cdas. Clark, Feldman, Horowitz y Waters no aceptan la etiqueta de "centrista" aplicada al PC yugoeslavo, pero admiten el contenido y suscriben entre otras esa explicación del conflicto con Moscú. Cuando se niegan a llamar centrista al PC yugoeslavo pero entienden que defiende los intereses de la revolución en Laos, Camboya, y movilizándolo a las masas en Viet-Nam... ¿no están empezando a vaciar de contenido la lucha de la FLT contra el PC vietnamita como stalinista? ¿no están avanzando hacía considerarlo en la práctica como centrista precisamente en el momento en que esa caracterización estalla en las manos de los cdas. de la mayoría del SU?

¿De que tradición nos reclamamos?

(8) Felizmente, el SU en su última reunión parece haber excluido de la lista de textos básicos para el V Congreso Mundial después de la Reunificación precisamente este documento.

(9) hemos hecho una breve referencia a la teoría del cda. Mandel sobre el surgimiento de estados obreros a partir de la instalación en el poder de un gobierno respaldado por ejércitos stalinistas, señalando que elimina conceptos trotskistas básicos, como el gobierno obrero y campesino, y la asimilación estructural. En cuanto a la teoría sobre las guerras entre estados obreros, parece que el cda. considere que las burocracias stalinistas son capaces de detener la dinámica bélica cuando ésta amenace las bases sociales obreras del estado en que se asientan. Esto es una extensión al terreno militar de lo que la TMI afirmaba sobre la capacidad de la burocracia de defender con su política económica esas bases. Lo correcto es afirmar lo contrario: mas allá de lo que la burocracia pretenda en una guerra, o en unas medidas económicas, su política mina las bases obreras, que sólo el proletariado defiende.

(10) El abandono —posterior a escribirse este informe— del texto sobre "Democracia Socialista y Dictadura Proletaria", refleja esta crisis y es, como hemos dicho, un paso positivo. Sin embargo, el "Documento Mundial" se basa en parte en el documento abandonado. De otro lado, los ataques a las posiciones sobre el "monolitismo" y el "monopolio del poder" stalinistas que había en ese documento se han hecho (sin citarlo) en la polémica sobre Indochina desde otras posiciones que, en muchos de sus desarrollos, no son menos incorrectas. Y la misma crisis indochina, entre otros hechos, ha dejado no menos en bancarota el Documento Mundial. En esta situación, la formación de un agrupamiento de dirigentes fundamentales de la ex-TMI con los dirigentes fundamentales de la ex-FLT para defender el Documento Mundial es un intento nocivo de no reconocer la crisis de la segunda reunificación y mantener ésta con métodos que obstaculizan el debate en la Internacional. Que se excluya la cuestión Indochina, central en la lucha de clases, del orden del día del Congreso, puede servir para no romper la "reunificación", pero perjudica la clarificación de problemas fundamentales para la vida de la Internacional. La confusión sobre el stalinismo afecta a toda la actividad de ésta y a todas sus posibilidades de desarrollo.